PODER JUDICIAL DE
LA NACIÓN

**CÁMARA FEDERAL
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL**

PROSECRETARÍA GENERAL

**DEPARTAMENTO
DE
JURISPRUDENCIA**

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NRO. 45

Año 2007

ÍNDICE

	<u>Página</u>
<u>SEGURIDAD SOCIAL</u>	
AFILIACIÓN	5
DOCENTES	6
ESTADO PERSONAL DEL	6
FINANCIACIÓN	
Cargos	7
Deudas con las cajas	13
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD	
Militares	20
Policía Federal	24
Servicio Penitenciario	26
S.I.D.E.	27
HABERES PREVISIONALES	
Determinación del haber	28
Fecha inicial de pago	28
Reajuste	29
Reducción del haber	53
Regímenes especiales	54
JUBILACIÓN ANTICIPADA	55
JUBILACIÓN ORDINARIA	58
JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ	58
LEGISLADORES	62
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES	63
MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA EX	66
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Fondo compensador	68
PENSIÓN	
Aportante regular e irregular	70
Concubina	76
Concurrencia	78
Divorcio	78
Hijos	79
Viuda/o	81
PRESTACIONES	
Cargos contra el beneficiario	82
Cese en la actividad	83
Convenios de transferencia	84
Otorgamiento del beneficio	88
REGÍMENES ESPECIALES	88
RIESGOS DEL TRABAJO	91
SEGUROS DE RETIRO	97
SERVICIO EXTERIOR, PERSONAL DEL	97
SERVICIOS	
Prueba	99

PROCEDIMIENTO

ACCIÓN DE AMPARO	101
ACCIÓN DECLARATIVA	102
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS	102
CADUCIDAD DE INSTANCIA	104
COMPETENCIA	105
COSTAS	105
DEMANDA	106

EJECUCIÓN DE SENTENCIA	106
EJECUCIÓN FISCAL	114
EXCEPCIONES	114
HONORARIOS	115
INHABILIDAD DE INSTANCIA	117
MEDIDAS CAUTELARES	118
OBRAS SOCIALES	119
PRINCIPIOS PROCESALES	123
RECURSOS	
Amparo por mora de la administración	123
Apelación	124
Queja	125
SANCIÓNES CONMINATORIAS	125
SENTENCIA	127

I- SEGURIDAD SOCIAL

AFILIACIÓN

Regímenes especiales. Opción. Ley 24.241, art. 30. Transferencia de fondos. Acción meramente declarativa.

Al resolverse la vigencia de la ley 22.731 y la pertenencia del peticionante a dicho régimen, se ha modificado judicialmente su situación previsional y el destino de los aportes que efectúa. En consecuencia, no se advierte de que modo dicha declaración importe la inconstitucionalidad del art. 30 de la ley 24.241, porque la vigencia del régimen especial y la incorporación al mismo, torna abstracta tal declaración. Ello así, porque el traspaso de los fondos resulta una consecuencia necesaria de la modificación señalada, que torna abstracta tal declaración. (Del voto de la Dra. Lucas).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119778

01.12.06

“ALES, JORGE CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo s/Acción meramente declarativa”

(L.-H.-F.)

Regímenes especiales. Opción. Ley 24.241, art. 30. Transferencia de fondos. Acción meramente declarativa.

Sin perjuicio de señalar que, en principio, el marco de la acción meramente declarativa se ve excedido por la decisión del “a quo” de ordenar el traspaso de los fondos del régimen de capitalización -al que se hallaba afiliado el peticionante- al de reparto (cfr. solución propiciada por la Sala en autos “Urrutia, Gustavo Alberto y otros c/ E.N.”, sent. del 04.10.06), lo cierto es que un nuevo examen de la cuestión aconseja, en aras de evitar un dispendio jurisdiccional inútil, convalidar lo decidido en la anterior instancia, teniendo en cuenta el allanamiento del organismo a la vigencia de la ley 22.731 y a sus propias decisiones instrumentadas mediante la Res. Conj. A.N.Se.S. 650/00, A.F.I.P. 874/00, S.A.F.J.P. 7/00, por las que se aprobaron las “Normas para la regularización previsional de trabajadores incorrectamente incorporados al Régimen de Capitalización o de Reparto” y las “Tablas de Códigos de Traspasos Especiales”. (Del voto de la Dra. Lucas).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119778

01.12.06

“ALES, JORGE CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo s/Acción meramente declarativa”

(L.-H.-F.)

Regímenes especiales. Opción. Ley 24.241, art. 30. Transferencia de fondos. Acción meramente declarativa.

Por razones de economía procesal y ante el allanamiento que prestara el organismo demandado respecto de la vigencia de la ley 22.731, corresponde confirmar la decisión del “a quo” que ordenó el traspaso de los fondos del régimen de capitalización -al que se hallaba afiliado el peticionante- al de reparto. Ello no modifica el criterio sostenido en autos “Urrutia, Gustavo Alberto y otros c/ E.N.” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 04.10.06), donde se destacó la impropiedad de utilizar la vía que posibilita el art. 322 del C.P.C.C. al efecto no sólo de establecer el orden legal aplicable sino, principalmente, la transferencia de fondos acumulados en el régimen de capitalización, pues en este tipo de pretensiones en que ha habido una conformidad expresa o tácita del reclamante, desaparece el elemento esencial que caracteriza a dicha vía, como es “hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”; aspecto este último cuyas aristas y complejidad exigen un mayor debate e intervención de todos los involucrados, circunstancia que en el caso de autos, se ve superado por el allanamiento referido. (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119778

01.12.06

“ALES, JORGE CARLOS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo s/Acción meramente declarativa”

(L.-H.-F.)

DOCENTES

Haberes previsionales. Ley 24.016. Vigencia. Ley 24.463, arts. 7 y 9. Inaplicabilidad.

La reglamentación del art. 160 de la ley 24.241 (Dec. 2433/93) mantuvo la vigencia de “... las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 23.682, 23.895, 24.018 y 24.019, y cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037”. En consecuencia, ha de concluirse que ante la especificidad del régimen legal aplicable al titular (ley 24.016) y el objeto de la demanda (en el caso, la finalización de la quita dispuesta por la ley 24.019), resulta inaplicable lo dispuesto por el art. 7 de la ley 24.463, a la vez que no resulta oponible el art. 9 de esa ley al reclamo por el cese del descuento practicado en virtud de una norma de excepción una vez agotado el plazo de cinco años de vigencia (cfr. dictamen N° 17598 del 02.10.03 de la Fiscalía Gral. N° 2, in re “Müller, Hans Otto”). Dicho temperamento concuerda con lo resuelto por la C.S.J.N. en autos “Gemelli, Esther Noemí” (sent. del 20.07.05), en cuanto sostuvo que el régimen jubilatorio de la ley 24.016 no ha sido afectado por las referidas leyes 24.241 y 24.463, por lo que se mantiene vigente con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de movilidad.

C.F.S.S., Sala III

sent. 114810

07.11.06

“SALOMÓN, HEBE ELENA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Haberes previsionales. Ley 24.016. Vigencia. Caso “Gemelli”.

La reglamentación del art. 160 de la ley 24.241 (Dec. 2433/93) mantuvo la vigencia de “... las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 23.682, 23.895, 24.018 y 24.019, y cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037”. En consecuencia, ha de concluirse que ante la especificidad del régimen legal aplicable al titular (ley 24.016), resultan inaplicables las disposiciones de los arts. 7 y 9 de la ley 24.463. Dicho temperamento concuerda con lo resuelto por la C.S.J.N. en autos “Gemelli, Esther Noemí” (sent. del 20.07.05), en cuanto que la ley 24.463 no derogó expresamente el estatuto aplicable a los docentes “... habida cuenta de que vino sólo a reformar el sistema establecido por la ley 24.241, sin afectar a otros regímenes especiales y autónomos”; como así también, que la ley 24.016 ha venido a sustituir a partir de su entrada en vigencia al régimen previsional especial para docentes.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115913

22.02.07

“LAPROVIDA, MIGUEL OSCAR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

ESTADO, PERSONAL DEL (LEY 22.955)

Ley 22.955. Haberes. Reducción. Ley 24.019. Ejecución. Movilidad. Planteo. Improcedencia.

Tratándose de una condena consentida y firme, de la que se derivó el cese de la vigencia del descuento operado en la prestación del titular por aplicación de la ley 24.019 sobre el beneficio obtenido al amparo de la ley 22.955, la presentación del titular en la etapa de ejecución, pretendiendo que el organismo le liquide el haber en la suma que le correspondería de acuerdo a lo que percibiría de continuar en

actividad, excede los alcances de la cosa juzgada. Ello así, máxime teniendo en cuenta que resulta aplicable al caso la doctrina establecida por la C.S.J.N. en la causa “Cassella, Carolina” (sent. del 24.04.04, reiterada el 08.11.05 in re “Brochetta, Rafael Anselmo”), por las que se concluyó que la movilidad de las prestaciones otorgadas por la ley antes referida quedó sujeta a las pautas del art. 7 ap. 2 de la ley 24.463 a partir del 30.03.95.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115719

26.12.06

“FOLGAR, MARCELINO OSCAR c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-P.L.)

Ley 22.955. Haberes. Reducción. Ley 24.019. Prueba.

Aún cuando pueda ponerse en tela de juicio si la cuantía de la prestación equivale al 82% de la remuneración total que correspondería a la interesada por el desempeño en el cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio (en el caso, art. 4 de la ley 22.955), si de las pruebas acreditadas en autos no se advierte que el ente previsional haya implementado -vía de hecho mediante- recortes en el haber, sino, por el contrario, que ha sido otorgado un aumento a la peticionante, corresponde revocar el pronunciamiento de la anterior instancia que hizo lugar a la acción de amparo, y ordenó al organismo abstenerse de practicar el descuento dispuesto por el art. 4 de la ley 24.019.

C.F.S.S., Sala III

sent. 114823

13.11.06

“ROLLET, MARÍA GUIEDA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-L.-P.L.)

Ley 22.955. Personal de la D.G.I. Fondo de jerarquización. Dec. 1461/90.

Reconocido el derecho de los peticionantes a la aplicación del régimen de la ley 22.955, va de suyo que les asiste el derecho a la inclusión del Fondo de Jerarquización (Dec. 1464/90), por cuanto “la movilidad de las prestaciones establecidas en la ley referida debe fijarse conforme a la evolución de las remuneraciones de quienes se encuentran en actividad..., no correspondiendo efectuar distinción alguna en cuanto a la denominación que se le asigne a la forma de determinarlo, en cuanto el incremento salarial sea efectivamente de naturaleza remuneratoria” (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 14.10.92, “Arturo, Francisco Héctor”; ídem, sent. del 11.03.02, “Stigliano, Carlos Antonio”).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116286

26.03.07

“ARTIGAS DE JESÚS, LUISA c/ E.N. - A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Ley 22.955. Personal de la D.G.I. Fondo de jerarquización. Dec. 1461/90.

No habiéndose invocado ni acreditado las condiciones requeridas para acceder a los porcentajes establecidos en los incs. b) y c) del art. 3 del Dec. 1464/90, corresponde hacer lugar al reclamo sólo por el 35% del Fondo de Jerarquización previsto por el inc. a) del citado artículo.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116286

26.03.07

“ARTIGAS DE JESÚS, LUISA c/ E.N. - A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

FINANCIACIÓN

CARGOS

Actas de inspección. Acto preparatorio.

Las actas no configuran un acto administrativo en sentido estricto conforme lo regula el título III de la ley 19.549, sino que deben considerarse como un acto preparatorio del mismo (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.05.96, “Grasso, Jorge Claudio”). Al respecto se ha sostenido que las diligencias que se cumplen con la

intervención de los inspectores -con las facultades que les acuerda la normativa vigente- y que se instrumentan a través de las actas de verificación que se notifican al interpelado, no son más que constataciones de la situación del contribuyente frente al organismo administrativo, siempre sujetas a revisión (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. 78028 del 30.05.96). En base a tales constataciones la inspección notifica las infracciones en las que ha incurrido el contribuyente mediante la confección de “actas de infracción”, sirviendo las mismas como intimación para el ingreso de los montos resultantes (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 22.06.05, “Odisa Obras de Ingeniería S.A.C.C.E.I.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

Cooperativas de trabajo. Trabajo autónomo.

Desde la entrada en vigencia de la Res. A.N.Se.S. 784/92 -que estableció como norma de alcance general que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de la misma, debiendo considerárselos como trabajadores autónomos-, la jurisprudencia fue conteste en señalar que la calidad de socio excluye la del trabajador dependiente, y que la dación de trabajo es el servicio que la cooperativa presta a sus asociados, por lo que no existe la posibilidad de considerar el trabajo de estos como una obligación de terceros, ya que sin ella la cooperativa carecería de objeto (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 13.03.93, “Cooperativa de Trabajo y Conf. Textil y Anexo Chovet c/ D.G.I.”; ídem, sent. del 30.09.99, “Cooperativa de Trabajo Servigraf Ltda. c/ D.G.I.”, entre otros).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

Cooperativas de trabajo. Trabajo autónomo.

Con la sanción de la Res. Gral. D.G.I. n° 4328/97 (24.04.97) cabe suponer concluida la controversia sobre el encuadramiento previsional de los socios de cooperativas, ya que con el fin de otorgar certeza a los contribuyentes respecto de su situación como cotizantes de los recursos de la seguridad social, la propia D.G.I. consideró que los asociados de las cooperativas de trabajo legalmente constituidas, y autorizadas a funcionar por el I.N.A.C., deberían ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social como trabajadores autónomos (ver considerandos y art. 1 de la resolución referida). Al respecto, la C.S.J.N. ha señalado que “... de acuerdo con la normativa vigente, los asociados a cooperativas de trabajo legalmente constituidas y autorizadas a funcionar por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, deben depositar sus aportes en el Régimen Nacional de la Seguridad Social como trabajadores autónomos” (cfr. sent. del 28.10.03, “Cooperativa de Trabajo de Transportes La Unión Ltda.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

Cooperativas de trabajo. Trabajo autónomo.

Surgiendo de las constancias de autos que se trata de una cooperativa de trabajo genuina, encuadrada en el marco normativo de la ley 20.337, autorizada a funcionar por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa que aprobó su estatuto, debidamente inscripta en la A.F.I.P. – D.G.I., y cuyos asociados se encuentran amparados bajo el régimen de autónomos, debe concluirse que los elementos de juicio tenidos en cuenta por el organismo para establecer la existencia de relación laboral dependiente resultan insuficientes. Ello así, porque al referirse a las notas distintivas de la relación de trabajo dependiente (dependencia económica, técnica y jurídica de los trabajadores respecto de la cooperativa, como así la existencia de un orden jerárquico y un régimen disciplinario), pierde de vista que las cooperativas de trabajo crean una organización distinta de otros modelos empresarios, basadas en el esfuerzo personal y mancomunado de sus asociados, que tienen

como característica la autogestión y la conducción democrática de las tareas de administración y control. Prestan a sus asociados el servicio de darles ocupación y pagarles un precio por tales servicios, representado por el retorno de los excedentes generados por la fuente de producción, siempre a título de dueños o empresarios.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

Cooperativas de trabajo. Trabajo autónomo.

Frecuentemente, los socios de una cooperativa de trabajo acuerdan percibir mensual o quincenalmente adelantos de utilidades equivalentes a los salarios que rigen para los trabajadores subordinados que cumplen la misma actividad, como adelanto a cuenta del excedente repartible anual, el cual se conoce recién al cierre del ejercicio económico. Tales rasgos de autonomía determinan su deslinde respecto de la regulación jurídica de las relaciones de índole laboral, sin que a ello obsten las instrucciones y normas organizativas que deben observar, propias de todo grupo organizado que persigue un fin común.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

Cooperativas de trabajo. Trabajo autónomo.

Si bien los organismos de recaudación y fiscalización tienen facultades para la determinación de cargos, la generalización no se compadece con cada una de las situaciones individuales relacionadas con la naturaleza de la prestación que se pretende adjudicar, máxime cuando sin hacer distingos de ninguna naturaleza, se decide en forma genérica respecto de los pretendidos vínculos laborales.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

Cooperativas de trabajo. Trabajo autónomo.

La jurisprudencia ha destacado la necesidad de individualización de cada relación alcanzada por la resolución que se impugna y de su calificación jurídica, luego del debido análisis y ponderación de todas las circunstancias de hecho y de derecho que exhibiere cada una de ellas. Sólo así se satisface el debido procedimiento adjetivo, para llegar a determinar si aquellas relaciones tienen como uno de sus sujetos a personas físicas que ya sea en forma permanente, transitoria o accidental, hayan prestado o preste servicios remunerados en relación de dependencia, pues este último dato es cuestión que debe establecerse sobre cada caso concreto e individualizado, para no incurrir en un desarticulado encuadramiento de las relaciones que ligan a las personas y del que dependen derechos y obligaciones de distinto cuño, contenido y finalidad, no sólo entre sí, sino también en relación a terceros (cfr. C.N.A.T., Sala V, sent. del 10/10/78, “Cosméticos Avón S.A.C.I.”; C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 11/03/93, “Cooperativa de Trabajo de Conf. Textil y Anexo de Chovet”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

Cooperativas de trabajo. Trabajo autónomo.

La C.S.J.N. ha señalado que, para desvirtuar la presunción a favor de la vinculación asociativa, debe demostrarse inequívocamente que se está en presencia de una simulación o fraude, sin que de dicha prueba esté exento el órgano administrativo cuando pretende imponer un cargo por una supuesta omisión o evasión

previsional (cfr. sent. del 28.10.03, “Cooperativa de Trabajo de Transporte La Unión Ltda. c/ D.G.I.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.)

C.C.T. 46/89. Adicional “mantenimiento del caballo”.

El adicional contemplado en el art. 9 del C.C.T. 46/89, celebrado entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Casas Consignatarias del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers y el Centro de Consignatarios de Productos del País (“mantenimiento del caballo”), no tiene naturaleza remunerativa, ya que se orienta a compensar al trabajador por la manutención y reposición del equino utilizado para el cumplimiento de sus tareas específicas, cuya provisión está a su cargo. El mismo criterio fue sostenido por la C.N.A.T. (cfr. sent. del 01.09.97, “Cara, Rodolfo c/ Frigorífico Itión S.A. y otro”) al concluir que no procedía su inclusión a los fines de la indemnización sustitutiva del preaviso.

C.F.S.S., Sala III

sent. 114928

16.11.06

“ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(F.-P.L.-L.)

Impugnación de deuda. Dependientes. Incorporación al S.I.J.P. Inscripción obligatoria. Excepciones. Familiares.

La norma encargada de establecer las personas que deben estar obligatoriamente inscriptas como personal dependiente, y como tales, efectuar aportes y contribuciones al S.I.J.P., es la ley 24.241(art. 2, inc. 5). El art. 3 de la citada normativa indica de manera taxativa las personas que no están obligadas a incorporarse al sistema, así como aquellas que directamente se encuentran exceptuadas de inscribirse al S.I.J.P. De los artículos mencionados se desprende claramente que las personas relevadas por el ente recaudador en oportunidad de labrarse el acta respectiva (y que según los argumentos vertidos por el recurrente, no se hallaban declaradas por tratarse de parientes directos suyos -cuñada y sobrino-), se encontraban incluidas dentro de las previsiones del citado en primer término, más no se observa que ocurra lo mismo en relación a las disposiciones referidas a las excepciones al régimen general. Por ello, corresponde confirmar la resolución que formuló los cargos por empleados no inscriptos.

C.F.S.S., Sala I

sent. 121402

15.06.07

“CARLINI ELIDO Y SOULIER RUBÉN S.H. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(Ch.-M.-D.)

Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Declaración espontánea.

Si el apelante busca desvirtuar en la instancia judicial los datos consignados en la Planilla de Relevamiento de Trabajadores confeccionada por personal del organismo -en el caso, firmada por los trabajadores cuestionados y por quien en aquel momento era socio del recurrente, sin que efectuaran objeción alguna-, debe arrimar suficientes elementos probatorios que apoyen su posición; no siendo suficiente a tal efecto adjuntar una declaración jurada realizada por los referidos trabajadores ante escribano público, la cual, si bien posee valor probatorio, por sí sola es insuficiente para desvirtuar las declaraciones espontáneas vertidas ante el personal de la A.F.I.P.

C.F.S.S., Sala I

sent. 121402

15.06.07

“CARLINI ELIDO Y SOULIER RUBÉN S.H. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(Ch.-M.-D.)

Persona jurídica. Directores y gerentes. Responsabilidad solidaria. Ley 11.683, arts. 6 y 8.

La responsabilidad solidaria prevista por los arts. 6 y 8 de la ley 11.683 no es ob-

jetiva, esto es, derivada de ser director, administrador, gerente o representante de una persona jurídica, sino una responsabilidad subjetiva, derivada de un hecho personal que le sea imputable a título de dolo o culpa.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120624

29.03.07

“PATIÑO, ALBERTO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(Ch.-M.-D.)

Persona jurídica. Directores y gerentes. Responsabilidad solidaria. Ley 11.683, arts. 6 y 8.

El Tribunal reiteradamente ha sostenido que en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás, “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549”, pág. 29 y ss). En consecuencia, ha de concluirse que el organismo no cumplió con la garantía del debido proceso adjetivo derivado del art. 18 de la C.N., si denegó por inconducente e improcedentes las pruebas testimonial e informativa solicitada por el recurrente con el propósito de acreditar que, pese a su cargo dentro de la firma, no tenía el manejo de los fondos sociales, y por lo tanto, no estaría alcanzado por la responsabilidad solidaria prevista por los arts. 6 y 8 de la ley 11.683. Ello así, porque ante la existencia de hechos controvertidos, la administración debió extremar los medios a fin de lograr la elucidación de los mismos; máxime teniendo en cuenta que debatía la responsabilidad solidaria por una deuda ajena.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120624

29.03.07

“PATIÑO, ALBERTO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(Ch.-M.-D.)

Relación laboral. Trabajador presunto. Declaración.

La declaración que los supuestos trabajadores brindan a la inspección ha de ser considerada únicamente como el punto de partida de una mayor investigación, y no como presunción cierta de los hechos y circunstancias que manifiesten. El grado de certeza de ese “indicio” dependerá del cúmulo de pruebas que se obtenga mediante la labor investigativa de la administración, sin perjuicio de las que el propio imputado pueda suministrar para la mejor defensa de su derecho.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120254

06.03.07

“MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(F.-H.-D.)

Relación laboral. Trabajador presunto. Declaración.

La presunción que en materia laboral inclina la balanza hacia el supuesto trabajador ha de ser ponderada con cuidado cuando la administración efectúa imputaciones concretas, ya que, necesariamente, debe constituirse en un investigador imparcial, a modo de descubrir, en lo posible, la verdad que se encierra en la situación fáctica que se le presenta. Por ello, no basta la simple denuncia del particular para tener por cierta una relación de trabajo encubierta, sino que ha de ahondarse la investigación para afianzar ese indicio con elementos concretos que den pie a la formación de un cargo, por la gravedad que ello implica.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120254

06.03.07

“MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(F.-H.-D.)

Relación laboral. Trabajador presunto. Declaración.

Las declaraciones que los supuestos trabajadores brindan a la inspección -que podrían asimilarse a una testimonial- deben ser tomadas con todos los recaudos pertinentes, especialmente, el control de aquel sobre el que se imponga el cargo.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120254

06.03.07

“MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(F.-H.-D.)

Relación laboral. Trabajador presunto. Declaración.

En el ámbito laboral, numerosas son las disposiciones tendientes a evitar la comisión de fraude en perjuicio del trabajador (L.C.T. arts. 23, 115, etc.). Sin embargo, no funcionan de manera absoluta y concluyente, dependiendo en todo caso de los elementos circundantes para que ello ocurra. En ese sentido, para presumir que existe relación o contrato de trabajo (arts. 21 y 23 de la L.C.T.), se requiere que una parte realice un acto, efectúe obras o preste servicios a favor de la otra, bajo la dependencia de ésta, en forma voluntaria y mediante una remuneración.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120254

06.03.07

“MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(F.-H.-D.)

Relación laboral. Trabajador presunto. Declaración.

Cuando la administración lleva a cabo las tareas de inspección no prueba los hechos que justifican su pretensión primera, sino que comprueban los presupuestos que legitiman su criterio. Será, posteriormente, la actividad jurisdiccional la que verifique la corrección de la comprobación de la inspección (cfr. en sentido conc. Días, Vicente Oscar, “Inspección Tributaria y Derecho de los Administrados”, pág. 50 y ss.)

C.F.S.S., Sala II

sent. 120254

06.03.07

“MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(F.-H.-D.)

Relación laboral. Trabajador presunto. Declaración.

Exigir al contribuyente una exhaustiva demostración de su inocencia, sin ahondar la investigación -para lo que tiene facultades y atribuciones suficientes el organismo-, implica colocarlo en la difícil -si no imposible- tarea de demostrar un hecho negativo (en el caso, que no trabajaba el supuesto empleado como presume el órgano administrativo), sin más elementos que la presunción con fundamento en una declaración del supuesto trabajador.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120254

06.03.07

“MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(F.-H.-D.)

Sociedades colectivas. Desempeño de los socios. Tareas de administración.

El Tribunal tiene dicho que el organismo fiscal confunde la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios de la sociedad colectiva, que es un aspecto comercial que hace a la cuestión del alcance de las responsabilidades exclusiva o excluyente del patrimonio social, con la administración de la sociedad, la cual a los fines de generar cotización previsional debe, necesariamente, ser una actividad y no una responsabilidad sin actividad alguna (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.12.01, “Velarde Altolaquirre, María Guadalupe”). En consecuencia, no existiendo en autos elementos probatorios que permitan vislumbrar el desempeño de la actividad de gerenciamiento de la recurrente, ni intervención alguna como administradora o conductora de la sociedad de la que forma parte, corresponde revocar la resolución por la que se le formularon cargos (en el caso, la administración reclamó el pago de la diferencia entre lo efectivamente abonado al Régimen de Trabajadores Autónomos por inscripción en la Categoría “D” y lo que resultaría de la aplicación de la Categoría “D”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120227

14.12.06

“GUERRA, GABRIELA LAURA c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(M.-Ch.)

Sociedad de hecho. Relación de dependencia.

Ha de considerarse que el integrante de una sociedad de hecho se desempeñó

como empleado de la misma con derecho a las prestaciones propias de un contrato de trabajo, si de la prueba surge que realizaba personalmente las tareas, mientras que el otro integrante no lo hacía en idénticas condiciones (cfr. C.N.A.T., Sala IV, “Flores, Andrés c/ Liggieri, Eduardo”, D.T. 1987-B-202).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116390

17.04.07

“RECTIFICACIONES PRINGLES c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(P.L.-F.-L.)

Prescripción.

Si bien el art. 3980 del Código Civil dispone una suerte de suspensión de los términos prescriptivos, refiere a situaciones en las que desde el punto de vista fáctico el acreedor se ve imposibilitado de reclamar su derecho. Esa imposibilidad de obrar debe ser apreciada, concretamente, en relación con la persona del demandante. Por ello, no puede considerarse configurada la misma cuando el organismo no ejerció oportunamente las facultades que le son propias (en el caso, la empresa rubrada pese a tener una fiscalización preventiva, no tuvo verificación por los Recursos de la Seguridad Social, y la determinación de deuda se originó como consecuencia de la comunicación cursada por oficio judicial librado en causa laboral, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nacional de Empleo -24.013-).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120191

30.11.06

“BELLIZI, ÁNGEL ARMANDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(M.-D.-Ch.)

Prescripción.

El organismo fiscal tiene amplias facultades de verificación, control y formulación de cargos (art. 35, ley 11.683 y cctes.), con prescindencia de la causa judicial que promoviera el trabajador.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120191

30.11.06

“BELLIZI, ÁNGEL ARMANDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(M.-D.-Ch.)

Prescripción.

El organismo recaudador no puede neutralizar la prescripción con la invocación del art. 17 de la Ley Nacional de Empleo (24.013), o con la prevención de la evasión regulada por la ley 25.345 -modificatoria del art. 15 de la L.C.T.- y por el art. 132 bis de la ley 18.345, en tanto esas normas sólo imponen a la autoridad administrativa y judicial el deber de informar, no creando excepciones de naturaleza alguna en orden a los plazos prescriptivos.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120191

30.11.06

“BELLIZI, ÁNGEL ARMANDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(M.-D.-Ch.)

Prescripción.

Corresponde admitir la prescripción liberatoria en los términos del art. 16 de la ley 14.236, sólo respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años previos al reclamo que formulara el organismo fiscal, no resultando de aplicación en autos la suspensión del curso de la prescripción por el término de un año (art. 10, ley 24.587) en razón de la naturaleza de las deudas reclamadas (conf. criterio fijado en situación análoga por la C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, “D.G.I. c/ Servicios Internacionales S.A.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120191

30.11.06

“BELLIZI, ÁNGEL ARMANDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(M.-D.-Ch.)

DEUDAS CON LAS CAJAS

Aportes y contribuciones. Depósito. Mora. Multas.

En el caso de las multas previsionales, la constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que este invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida. La aplicación de las sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Administración, cuya razonabilidad cae bajo el control del Poder Judicial para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 14.11.96, "Cargill S.A."). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115267

11.12.06

"CLUB ATLÉTICO KIMBERLEY c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(P.L.-L.-F.)

Aportes y contribuciones. Depósito. Mora. Multas.

La Res. Gral. (D.G.I.) 3756/93 sólo vino a reglamentar la ley 17.250 en cuanto a las causales que hacen variar los porcentajes de las multas aplicables, ya que si bien la ley citada establecía una graduación de "hasta el 30% del total adeudado por el concepto indicado en caso de mora en el depósito de aportes y contribuciones", era necesario discriminar en razón de qué circunstancias variaba este porcentaje, quedando a la discrecionalidad del juez verificar si efectivamente se dan los supuestos que autorizarían a que los mismos se apliquen. Por otra parte, la propia Res. Gral. prevé multa sancionatoria que va variando según los días de atraso para "resarcirse" de los días de mora; de allí que la potestad jurisdiccional no se agota en la aplicación mecánica de las normas, sino que exige discriminar los distintos aspectos del litigio, a fin de lograr en cada hipótesis la justicia concreta del caso. Ello así pues la equidad y el principio de razonabilidad exige que se cuide especialmente, que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el plazo que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulta contradictoria con la establecida en la Ley Fundamental (Fallos 307:862; 311:394 entre otros; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 21.11.95, "Impra S.A."). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115267

11.12.06

"CLUB ATLÉTICO KIMBERLEY c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(P.L.-L.-F.)

Aportes y contribuciones. Depósito. Mora. Multas. Intereses.

El art. 15 de la ley 17.250 establece las sanciones a las que dará lugar el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en las leyes de previsión, precisando que la aplicación de aquéllas será sin perjuicio de los intereses y penalidades que correspondan. Así, para el caso de mora en el depósito de aportes y contribuciones, el inc. 1, ap. c), impone una multa de hasta el 30% del total adeudado por dicho concepto, sin hacer mención alguna a los intereses. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución que incluyó los intereses en la base de cálculo de la multa (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 23.06.03, "Servin S.A. c/ D.G.I."). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115267

11.12.06

"CLUB ATLÉTICO KIMBERLEY c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(P.L.-L.-F.)

Aportes y contribuciones. Depósito. Mora. Multas. Intereses.

La multa habrá de ser reliquidada con exclusión de los intereses en su base de cálculo, toda vez que lo actuado en tal sentido por el organismo no se compadece con lo dispuesto por el art. 15 de la ley 17.250 referido a las sanciones a las que da lugar el incumplimiento de las obligaciones previsionales, en cuanto precisa que su aplicación será sin perjuicio de los intereses y penalidades que correspondan. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115267

11.12.06

"CLUB ATLÉTICO KIMBERLEY c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(P.L.-L.-F.)

Determinación de deuda. Ejecución. Medida cautelar.

No corresponde hacer lugar a la medida cautelar por la que se procura que la A.F.I.P. se abstenga de dar inicio y/o llevar adelante el proceso judicial de ejecución de los ajustes practicados a la recurrente mediante las determinaciones de deuda previsional practicadas, por cuanto con ella pretende impedir lisa y llanamente, la iniciación de un proceso, lo que significaría “inferir en los poderes de otro juez” (cfr. Roland Arazi y Carlos E. Fenocchietto, “Régimen del C.P.C.C.N.”, pág. 232). Con esa inteligencia, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideran imposible paralizar actuaciones de otro juicio, tanto como evitar la promoción o prosecución de otras causas, pues ello compromete el derecho constitucional de ocurrir ante el órgano judicial (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. 48812, “Banco Mariva S.A. c/ O.S.B.A.”; C.N.A.Civ., Sala A, 18.08.82, L.L. 1983-640). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94991

26.02.07

“TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. c/ A.F.I.P. s/Medida cautelar”

(L.-F.-P.L.)

Determinación de deuda. Ejecución. Medida cautelar.

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada en procura de que se ordene a la A.F.I.P. se abstenga dar inicio y/o llevar adelante el proceso judicial de ejecución de los ajustes practicados mediante las determinaciones de deuda previsional efectuadas -correspondiente a aportes y contribuciones con destino al régimen de la Seguridad Social-, si de los elementos fácticos y jurídicos obrantes en autos se desprende que se encuentran configuradas las circunstancias para su procedencia, atento no hallarse consolidada la situación de deudora de la peticionante, de conformidad con lo prescripto por el art. 230 del C.P.C.C. Ante planteos formulados por los contribuyentes en cuestiones de temática similar a la presente -comunicación a las entidades bancarias que realizaba la D.G.I.-, el Tribunal hizo lugar a los mismos, disponiendo que el organismo debía abstenerse de realizar las conductas descriptas hasta tanto quedaran firmes las resoluciones administrativas o judiciales que, eventualmente, sobre la deuda determinada pudieran recaer (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 07.10.96, “Instituto Privado de Nutrición y Metabolismo”; ídem Sala I, sent. del 17.05.94, “Sanatorio Colegiales S.A.”; ídem Tribunal de FERIA, sent. del 27.01.94 “Edenor S.A.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere el Dr. Laclau, en minoría).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94991

26.02.07

“TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. c/ A.F.I.P. s/Medida cautelar”

(L.-F.-P.L.)

Determinación de oficio. Medidas cautelares. Embargo preventivo. Facultad del organismo. Límites.

Si bien el organismo está facultado para “solicitar embargo preventivo, o en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios” (art. 111 ley 11.683 -t.o. Dec. 821/98-), dicha facultad no dispensa al órgano fiscal del cumplimiento de los recaudos legales que hacen a la procedencia de la cautela solicitada. En consecuencia, existiendo bienes que ya se encuentran afectados mediante sentencia firme y consentida dictada en una causa que, entre las mismas partes, tramita ante otra sala del Tribunal, los que a simple vista constituyen suficiente garantía para el pago de la presunta deuda determinada por el fisco, ha de concluirse que la medida pretendida en autos deviene excesiva, puesto que el art. 213 del C.P.C.C. establece que el embargo “se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas”.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64482

08.03.07

“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. – D.G.I. c/ Stertz, Cristian Luis s/Medidas cautelares”

(F.-H.-D.)

Determinación de oficio. Medidas cautelares. Embargo preventivo. Facultad del organismo. Límites.

Si bien la A.F.I.P. puede, ya sea por una parte o por el total de la deuda, ejecutar

el patrimonio de la sociedad deudora, así como también el de sus socios gerentes (arts. 6, 8 y conc., ley 11.683) por efecto de la solidaridad (art. 705 Código Civil), no puede pretender que la garantía de su pago se vea -como ocurre en autos- cuadruplicada, mediante el recurso de embargar los bienes de todos los co-deudores, sin siquiera probar sumariamente, que los afectados cautelarmente son insuficientes para satisfacer el cobro respectivo.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64482

08.03.07

“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. – D.G.I. c/ Stertz, Cristian Luis s/Medidas cautelares”

(F.-H.-D.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Eximición. Seguro de caución.

El depósito previo que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguardia del interés colectivo comprometido (cfr. C.F.S.S., Sala I, “Parflik S.A.C.I.F.I.A.”, sent. del 14.04.94; ídem, “Tronchet Pour L'Homme S.A.”, sent. del 12.06.95; Sala II, “Club Atlético Vélez Sársfield Asoc. Civil”, sent. del 18.12.98; Sala III, “Creaciones Guíñese S.A.I.C.”, sent. del 17.05.95). En consecuencia, habiendo la recurrente acompañado un seguro de caución, ha de tenerse por garantizado el pago de las obligaciones reclamadas en las actas que se cuestionan y, por tal motivo, eximirse de la carga impuesta por la norma referida, ya que la obligación se encuentra suficientemente garantizada.

C.F.S.S., Sala I

sent. 121569

28.06.07

“MONTRUL, SILVIA ELIZABETH c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(Ch.-M.-D.)

Impugnación de deuda. Recursos. Juzgados federales. Delegación. Caducidad de instancia. Improcedencia. Ley 26.063.

Si bien es cierto que el art. 8, inc. b) de la ley 23.473 no determina el procedimiento aplicable, ni establece claramente el rol del juzgado federal que recibe el recurso, se observa que el mismo asigna expresamente a la C.F.S.S. la competencia para conocer en el recurso de apelación interpuesto contra la determinación de deuda practicada por la A.F.I.P. en concepto de aportes y contribuciones previsionales y, en consecuencia, para realizar todos los actos procesales dirigidos a emitir el pronunciamiento con relación a lo pretendido.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64917

26.04.07

“PRONTO S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(F.-H.-D.)

Impugnación de deuda. Recursos. Juzgados federales. Delegación. Caducidad de instancia. Improcedencia. Ley 26.063.

Sin detrimento a la competencia que surge del art. 8, inc. b) de la ley 23.473 y a su carácter indelegable (art. 3 del C.P.C.C.), la ley referida establecía una especie de delegación de la función judicial por razones operativas a los magistrados federales distribuidos en todo el territorio nacional, para la realización de determinadas diligencias auxiliares destinadas a facilitar el acceso a la jurisdicción del contribuyente. Tal función -limitada a la realización de las diligencias específicamente encomendadas por la ley- era, por su propia naturaleza excepcional, de interpretación restrictiva. En consecuencia, la caducidad declarada por el juez federal ante el que se presentó el recurso constituye una decisión que excede a su competencia, pues su función se ciñe a la realización de actos de neto corte material, como son la recepción del recurso, del expediente administrativo y la remisión de los autos al tribunal competente. Interpretar la norma como se hizo se opone a la finalidad de facilitar el ejercicio de la facultad de impugnar lo resuelto en sede administrativa, frustrando así el acceso a la jurisdicción. Coadyuva a esta decisión la nueva redacción que la ley 26.063 da al art. 9 de la ley 23.473, responsabilizando al mismo órgano que dictó la medida a recepcionar el recurso y remitir las actuaciones a la C.F.S.S.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64917

26.04.07

“PRONTO S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(F.-H.-D.)

Multas. Cuestionamiento. Facultades del organismo.

En el caso de las multas previsionales, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatoria válida (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 09.12.96, “Deheza, Martín”; ídem, sent. del 23.06.03, “Servin S.A.”; C.F.S.S., Sala II, sent. del 19.10.98, “Pilot Pen S.A.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120467

08.03.07

“ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN NIÑA c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.-D.)

Multas. Cuestionamiento. Facultades del organismo.

La cuantía de la multa aplicada no puede ser cuestionada basándose exclusivamente en una consideración numérica relacionada con el monto total de las retenciones omitidas, sin tener en cuenta las demás circunstancias apreciadas para su determinación. Ello así, máxime cuando del propio acto resolutivo surge que el importe de la multa se estableció comparando el mínimo y el máximo previsto en la norma de aplicación, señalándose el criterio interpretativo adoptado respecto de los topes a que refieren los incisos a) y b) del art. 14 de la Res. Gral. A.F.I.P. 1566, modificada por Res. Gral. A.F.I.P. 1779.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120467

08.03.07

“ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN NIÑA c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(M.-Ch.-D.)

Multas. Facultades del organismo.

En el caso de las multas previsionales, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatoria válida (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 19.10.98, “Pilot Pen S.A.”). A mayor abundamiento, cabe señalar que la Res. Gral. 1566 (texto sustituido en 2004) no es una norma penal, sino que se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la ley 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120616

28.03.07

“SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL BLANCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(Ch.-M.-D.)

Multas. Intereses. Improcedencia.

No corresponde incluir los intereses en la base de cálculo de la multa (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 23.06.03, “Servin S.A.”). Así también lo dispuso la A.F.I.P. mediante la Instrucción Gral. 4/06.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120616

28.03.07

“SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL BLANCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(Ch.-M.-D.)

Multas. Recursos. Depósito previo.

El depósito previo previsto en los arts. 15 de la ley 18.820, 12 de la ley 21.864 y

26 de la ley 24.463, no resulta exigible en expedientes donde lo cuestionado es la procedencia o improcedencia de una multa (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 14.06.06, "Club Atlético Kimberley"; ídem, sent. del 18.02.05, "Plastar Buenos Aires S.A."). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119793

01.12.06

"CLUB ATLÉTICO KIMBERLEY c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(L.-F.-H.)

Multas. Recursos. Depósito previo.

El art. 15 de la ley 18.820 y sus modificatorias, exige el depósito previo de las sumas reclamadas tanto en los casos en que se determine deuda por falta de aportes, como en los supuestos en los que se fijen multas; por lo que no cabe efectuar distinción alguna al respecto. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119793

01.12.06

"CLUB ATLÉTICO KIMBERLEY c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(L.-F.-H.)

Multas. Determinación. Procedimiento.

El Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que el devengamiento de la multa se opera por el mero incumplimiento, razón por la cual en sanciones de esta naturaleza, el elemento subjetivo no resulta relevante como cuando nos encontramos ante un ilícito penal. En consecuencia, corresponde rechazar el argumento de la recurrente que sostiene que la resolución es nula si no se advierte que la misma se encuentre viciada, pues las actas fueron labradas por autoridad competente, debidamente notificadas y contando la impugnante con la oportunidad de formular su descargo, por lo que su derecho de defensa no se vio afectado; y tampoco se observa la existencia de diligencia alguna tendiente a acreditar que el embargo decretado judicialmente por la A.F.I.P. -llevada a cabo en otra causa judicial en trámite- sobre una cuenta corriente, fuera determinante de un estado de cesación de pago. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120393

15.03.07

"MICROSYSTEM ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(D.-F.-H.)

Multas. Determinación. Procedimiento.

En el caso de multas previsionales, la constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida; circunstancia esta que puede ser ocasionada por la propia conducta del acreedor al colocar al deudor en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones. Por ello, ante la imposibilidad de pago de las obligaciones fiscales y de seguridad social puesta en conocimiento del organismo por la recurrente, quien alegó como impedimento para cumplir en término el embargo en su cuenta corriente que la propia A.F.I.P. llevara a cabo en una causa judicial en trámite, la administración debió investigar la circunstancia alegada. Si por el contrario, el órgano administrativo ratificó la aplicación de la sanción pecuniaria, sin constatar si -efectivamente- existía imposibilidad material de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones previsionales, colocando al contribuyente en estado de indefensión y motivando, en definitiva, un enriquecimiento indebido para el Fisco, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de determinación de la multa. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120393

15.03.07

"MICROSYSTEM ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(D.-F.-H.)

Relación laboral. Prescripción.

La A.F.I.P. – D.G.I. es un organismo del estado al que, debido a su función, la legislación -por ejemplo el art. 35 de la ley 11.683- lo ha dotado de recursos y herramientas a los efectos de indagar sobre presuntos responsables. Debido a ello, no resultan atendibles las alegaciones del Ente en torno a que recién a partir de la notificación del juzgado laboral tuvo conocimiento de la exigibilidad de la deu-

da; máxime si se tiene en cuenta que no se observa ni se invoca una situación de dificultad o imposibilidad de hecho que hubiere impedido temporalmente el ejercicio de la acción (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 24.11.06, "Clorox Argentina S.A."; ídem, sent. del 27.11.06, "Oficina Comercial de la Embajada de la República de Corea"). Al respecto, resulta clarificador lo expresado por el Dr. Jorge J. Llam-bías, al manifestar que "...el comienzo de la prescripción es independiente del conocimiento que tenga el titular de la existencia de su derecho ..." (cfr. "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones"; Tº III, pág. 357). En sentido análogo se ha expedido la Sala III de la C.F.S.S., en autos "Maitor S.R.L.", sent. del 20.02.06.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120616

28.03.07

"SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL BLANCO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"

(Ch.-M.-D.)

Relación laboral. Prescripción.

En tanto el Código Penal prevé la prescripción de la acción penal estableciendo una graduación temporal según la naturaleza de la pena y su duración (ver Título X) y, por su parte, el Código Civil establece en su art. 4017 que "Por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo título, ni buena fe", resulta que también se libera el deudor si transcurre el plazo de 10 años desde el devengamiento de los aportes, contribuciones, multas y restantes obligaciones derivadas de las leyes previsionales -ley 14.236, art. 16- (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 20.02.06, "Maitor S.R.L."). Ello así, pues la D.G.I. tiene amplias facultades (art. 35, ley 11.683, t.o.) para efectuar verificaciones, labrar actas y formular cargos contra eventuales empleadores deudores, por lo que el presunto fraude que se pudiera cometer o haber cometido no es óbice para el accionar de aquella, máxime si no se observa -ni se invoca- una situación de dificultad o imposibilidad de hecho que hubiere impedido temporalmente el ejercicio de la acción -de interpretación restrictiva y más allá de la distinción entre imposibilidad jurídica de obrar o dificultad o imposibilidad de hecho-, ni que se trate de alguna de las acciones imprescriptibles que enumera el Código Civil (art. 4019).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115161

29.11.06

"SHINJI, KAZ UMITSU c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"

(P.L.-L.-F.)

Relación laboral. Prescripción.

Se ha sostenido que la conducta del acreedor no es ajena al vencimiento del plazo de la prescripción liberatoria, puesto que -como ocurre con habitualidad- en ejercicio de sus facultades de fiscalización y verificación, bien pudo haber promovido el reclamo que ahora persigue en tiempo oportuno, con prescindencia de la existencia o no de una causa judicial interpuesta por el trabajador. En otras palabras, no ha sido acreditado que el organismo recaudador ejerció en debida forma las atribuciones que le son propias o que, habiéndolo hecho, no pudo llegar a un resultado acertado en virtud del ocultamiento del empleador (cfr. C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 06.05.86, L.L. 1987-A-241; E.D. Tº 119, pág. 265)

C.F.S.S., Sala III

sent. 115161

29.11.06

"SHINJI, KAZ UMITSU c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"

(P.L.-L.-F.)

Relación laboral. Prescripción.

Es, sin dudas, el Fisco quien tiene las facultades y el deber de perseguir a los evasores, para lo cual dispone de amplias facultades. Pero ellas deben ejercerse dentro de los límites temporales previstos para su ejercicio, constituyéndose así en un recaudo que garantiza la seguridad jurídica, a la par que evita las consecuencias disvaliosas que se derivarían de la situación contraria.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115161

29.11.06

"SHINJI, KAZ UMITSU c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"

(P.L.-L.-F.)

Relación laboral. Prescripción. Multa. Intereses.

Tratándose de un caso en trámite que resulta comprendido dentro de los alcances de la Instrucción General A.F.I.P. 4/06, para el recálculo de la multa habrá de estarse a la Res. Gral. 1566, texto sustituido en 2004, en virtud del cual corresponde excluir los intereses de la base para la determinación de aquella. Ello así, de conformidad a la doctrina reiteradamente sostenida al respecto por el Tribunal, según la cual “la multa habrá de ser reliquidada con exclusión de los intereses en su base de cálculo, toda vez que lo actuado en tal sentido por el organismo no se compadece con lo dispuesto por el art. 15 de la ley 17.250 referido a las sanciones a las que da lugar el incumplimiento de las obligaciones previsionales, en cuanto precisa que su aplicación será sin perjuicio de los intereses y penalidades que correspondan -cfr. sent. del 13.03.06, “La Genovesa Supermercados S.A.”-.

(Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115161

29.11.06

“SHINJI, KAZ UMITSU c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(P.L.-L.-F.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

MILITARES

Ejecución de sentencia. Liquidación. Impugnación.

Corresponde confirmar la sentencia del “a quo” que rechazó por extemporánea la impugnación efectuada por los accionantes, aduciendo la falta de detalles en la liquidación practicada por el I.A.F., en tanto todas las anteriormente aprobadas a petición de los interesados fueron practicadas de la misma forma y no merecieron objeción alguna. En consecuencia, y sin perjuicio de lo resuelto por la Sala en autos “Tofoleti de Vallejos, Ángela E. y otros” (sent. del 29.09.06), ha de concluirse que la impugnación deviene no sólo extemporánea, sino también contraria a sus propios actos, atento que los actores deben enfrentar las consecuencias de éstos, porque “a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta”.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69389

13.06.07

“ELÍAS, HÉCTOR HUGO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-D.-M,)

Ejecución de sentencia. Liquidación. Impugnación.

Deben desestimarse las objeciones vertidas respecto a la liquidación aprobada, cuando la generalidad con la que los accionantes intentan cuestionarla no resulta idónea a los fines pretendidos por no constituir, en modo alguno, una impugnación en los términos de los arts. 178 y 504 del C.P.C.C., en tanto no demuestran error en los números o aplicación del derecho, e intentan sustentar la misma en un ejemplo que en nada cumple con los requisitos de tal (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.02.01, “Sabbatini, Héctor”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69389

13.06.07

“ELÍAS, HÉCTOR HUGO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-D.-M,)

Ejecución de sentencia. Liquidación. Impugnación.

La impugnación de una liquidación requiere, para ser examinable, el suministro de los cálculos correctos y de cuya comparación surgirá el error (cfr. C.N.A.Com., Sala C, sent. del 31.08.89, “Acrílicos Salerno S.A. s/incidente de verificación por Roberto Fiocchi”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69389

13.06.07

“ELÍAS, HÉCTOR HUGO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(Ch.-D.-M.)

Ejecución de sentencia. Liquidación. Impugnación.

Corresponde estimar no precluido el planteo formulado contra una liquidación practicada por el I.A.F. aún cuando haya sido consentida por las partes, ya que ello no obliga al magistrado a obrar en un sentido determinado (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.09.06, “Tofoleti de Vallejos, Ángela E. y otros”). A esto cabría agregar (“iura novit curia”) la antigua y reiterada postura de que el acreedor de créditos de naturaleza previsional es igual a los de origen laboral, respecto de los cuales se prevé que el trabajador pueda percibir sumas a cuenta de las que resulta acreedor sin asumir riesgo -con su actitud-, de convalidar un pago insuficiente -art. 260 R.C.T.- (cfr. C.N.A.T., Sala II, “Graziani, Norma Haydee”, sent. del 24.02.84; C.N.A.S.S., Sala I, “Pérez Fernández, Eva Elena”, sent. del 28.02.92).
C.F.S.S., Sala I
sent. int. 68325
24.11.06

“BOZZELLI, MARÍA ROSARIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(M.-D.-Ch.)

Ex combatiente de Malvinas. Suplemento. Dec. 1244/98.

Sólo tienen derecho a percibir el suplemento mensual establecido por el Dec. 1244/98 los ex combatientes incorporados a la Administración Pública Nacional que se encuentren prestando servicios en ella en virtud del régimen de incorporación dispuesto por la ley 23.109 y su Dec. Reg. 509/88. Por lo demás, la lectura del art. 2 del referido Dec. 1244/98 -en cuanto establece que el complemento “no será considerado como base de cálculo para ningún otro Adicional, Suplemento o Bonificación ni estará sujeto a descuentos previsionales y asistenciales ...”-, demuestra que únicamente es aplicable al personal en actividad.

C.F.S.S., Sala III
sent. 115789

13.02.07

“BONORINO, AROLDO RENÉ c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(P.L.-F.L.)

Ex combatientes de Malvinas. Subsidios. Dec. 886/05.

A la luz del cambio legislativo acontecido a partir de la vigencia del Dec. 886/05 y atendiendo a las directivas del art. 3 del Código Civil, corresponde resolver los reclamos de los ex combatientes de Malvinas con la prudencia propia de la materia previsional, y de acuerdo con la disposición más favorable al beneficiario (cfr. C.S.J.N., sent. del 05.07.06, “Ibarra, Argentino Edelmar”, cons. 6º y su cita).

C.F.S.S., Sala I
sent. 119571

18.10.06

“MEDRANO, RAÚL ALBERTO Y OTROS c/ E.N. – Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(Ch.-D.-M.)

Ex combatientes de Malvinas. Subsidios. Dec. 886/05.

Cabe estimar que la promoción de la demanda efectuada con el objeto de obtener la aplicación de la ley 23.848 y sus modificatorias (24.434, 24.652, 24.892), implica la implícita opción a que alude el art. 7 del Dec. 885/05, en cuanto dispone que “A los efectos de la percepción de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en situación de retiro deberá desistir de las acciones y del eventual derecho que tuvieren a percibir el complemento instituido por el Decreto N° 1244/98”.

C.F.S.S., Sala I
sent. 119571

18.10.06

“MEDRANO, RAÚL ALBERTO Y OTROS c/ E.N. – Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(Ch.-D.-M.)

Ex combatientes de Malvinas. Subsidios. Dec. 886/05.

Según la situación subjetiva de cada peticionante, corresponde la aplicación del

art. 1 de la ley 24.892 según el texto sustituido por el art. 3 del Dec. 885/05, en tanto prescribe “Extiéndese el beneficio establecido por las Leyes N° 23.848 y N° 24.652 al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última en tanto no se hubieran dado las situaciones a que se refiere el artículo 6° del Decreto N° 1357/04, y que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur”.

C.F.S.S., Sala I

sent. 119571

18.10.06

“MEDRANO, RAÚL ALBERTO Y OTROS c/ E.N. – Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(Ch.-D.-M.)

Ex combatientes de Malvinas. Subsidios. Dec. 886/05.

El art. 2 del Dec. 885/05, al sustituir el art. 3 del Dec. 1357/04, adecua la convergencia de los distintos plexos normativos vigentes destinados a contemplar la situación de los veteranos de la llamada guerra de Malvinas, en la medida que decide que “El cobro de la pensión de guerra instituida por la Ley N° 23.848, su modificatoria y complementaria, es compatible con cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente o de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial o municipal, con la percepción de otro ingreso, con el subsidio extraordinario instituido por la Ley N° 22.674 o con las pensiones graciabiles vitalicias otorgadas por las Leyes N° 23.598 y N° 24.310”.

C.F.S.S., Sala I

sent. 119571

18.10.06

“MEDRANO, RAÚL ALBERTO Y OTROS c/ E.N. – Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(Ch.-D.-M.)

Haberes previsionales. Decretos 2266/84 y 2554/84. Reclamo administrativo. Prescripción.

El reclamo administrativo interfiere el curso de la prescripción -art. 1, inc. e), ap. 9, ley 19.549- (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala III, sent. del 03.12.92, “Chávez, Alfredo c/ E.N.”), en tanto no hay prescripción liberatoria sin inactividad del titular del derecho. La suspensión acarrea una detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevivientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción, inutilizando el lapso que corre mientras esas causas operan. En consecuencia, el reclamo administrativo no puede alzarse en contra de las pretensiones de quien lo dedujo (en el caso, peticionando las asignaciones dispuestas por los Decretos 2266/84 y 2554/84), mientras la suspensión del curso de la prescripción producida por su interposición continuaba a la fecha de ser deducida la demanda.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120315

06.03.07

“RAVAGLIA, ZULEMA c/ E. N. - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(H.-D.-F.)

Haberes previsionales. Suplementos. Herederos.

Cuando mediante la acción iniciada, los herederos procuran no la obtención del cobro de haberes de pensión que hubieren quedado impagos (lo que sería susceptible de reclamo por integrar los derechos transmisibles del causante), sino que pretenden obtener un reajuste del haber pensionario con invocación del carácter no remunerativo y no bonificable de adicionales (en el caso, los establecidos por los Decs. 628/92 y 270/93), sin que la beneficiaria en vida hubiera planteado reclamo alguno en tal sentido al organismo previsional, corresponde rechazar la acción. Ello así, ya que conforme lo dispuesto por el art. 3270 del Código Civil, “... nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 13.05.04, “Aguilera, Stella Maris y otros c/ E. N. - Ministerio de Defensa”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120295

06.03.07

“TORRES, DANIEL OMAR c/ E. N. – Ministerio de Defensa – I.A.F. s/ Personal

militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(F.-D.-H.)

Haberes previsionales. Suplementos. Herederos.

Para rechazar la acción iniciada por los herederos en procura de la obtención del cobro de adicionales (en el caso, los establecidos por los Decs. 628/92 y 270/93) que nunca habían sido reclamados por el causante, basta aplicar las específicas normas previsionales, dado que los actores carecen de legitimación por no revestir la calidad de causahabientes.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120295

06.03.07

“TORRES, DANIEL OMAR c/ E. N. – Ministerio de Defensa – I.A.F. s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(F.-D.-H.)

Haberes previsionales. Suplementos. Herederos.

Surgiendo de las constancias de autos que el causante, aunque formuló el reclamo administrativo, luego lo abandonó, y que la pensionada tampoco continuó tal iniciativa -a punto tal que ni siquiera figura como codemandante en la presente causa-, los herederos, basados en los principios generales del Código Civil pero olvidándose de la ley específica (art. 111, ley 21.965), no pueden pretender subrogarse en los derechos del “de cuius”, pues ello sería lisa y llanamente violar el principio del art. 3270 de dicho Código, que establece que nadie puede transmitir un mejor derecho o más extenso que el que gozaba (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.10.04, “Paz, Alicia Beatriz y otros c/ E.N. - Ministerio de Defensa - Estado Mayor General de la Armada”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120295

06.03.07

“TORRES, DANIEL OMAR c/ E. N. – Ministerio de Defensa – I.A.F. s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(F.-D.-H.)

Haberes previsionales. Suplemento por tiempo mínimo cumplido. Reingreso. Dec.1982/85. Ley 19.101, arts. 69 y 74.

De una interpretación armónica del Dec. 1982/85 y los arts. 69 y 74 de la ley 19.101 se colige que quien encontrándose retirado es convocado prestar nuevos servicios, tiene derecho a que se compute éste tiempo hasta su nuevo pase a retiro a fin de percibir el suplemento “tiempo mínimo cumplido”. Ello así, máxime cuando durante su convocatoria le fue liquidado dicho suplemento en su recibo de haberes. La circunstancia de que al momento del primer retiro el titular contara menor antigüedad que la exigido por las disposiciones del Anexo 3 de la ley 19.101 para el grado que detentaba, no puede resultar óbice para acoger -por parte del organismo- la petición formulada, más aún teniendo en cuenta que a partir de la nueva alta en el servicio que dispusiera la demandada, transcurrieron más de diez años de permanencia en el cargo, por lo que cumplió holgadamente con el requisito que la normativa impone.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120458

19.03.07

“EZCURRA, GUILLERMO RAMÓN c/ E. N. – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(H.-F.-D.)

Veteranos de guerra. Pensión vitalicia. Dec. 886/05, art. 3. Planteo de inconstitucionalidad.

Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 3 del Dec. 886/05 (modificadorio del art. 1 de la ley 24.892) que el peticionante solicitó por considerarlo discriminatorio, dado que de la letra de la normativa surge que el legislador quiso dar preeminencia al hecho de “haber estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), presupuesto que -sin desconocer la importancia de las tareas desarrolladas- no fue cumplido por el accionante, que lo hizo desde la Base San Julián. Ello así, máxime cuando se observa que las modificaciones introducidas por el decreto referido no alteran, en lo sustancial, al cuerpo normativo que reglamenta, el cual -además- no fue atacado por el accionante.

C.F.S.S., Sala II
sent. 120404
15.03.07

“ANDRADE, ARTURO ANTONIO c/ E. N. – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(D.-H.-F.)

Veteranos de guerra. Pensión vitalicia. Dec. 886/05, art. 3. Planteo de inconstitucionalidad.

Igualdad es igual trato ante circunstancias iguales, con lo cual las discriminaciones o beneficios que tengan una causa razonable no son violatorias del principio de igualdad. Sólo son inconstitucionales las discriminaciones hostiles, persecutorias, arbitrarias o estigmatizantes que obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de personas o grupos (cfr. Miguel A. Ekmekdjian, “Tratado de Derecho Constitucional”, Tº II, pág. 140).

C.F.S.S., Sala II
sent. 120404
15.03.07

“ANDRADE, ARTURO ANTONIO c/ E. N. – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(D.-H.-F.)

Veteranos de guerra. Pensión vitalicia. Dec. 886/05, art. 3. Planteo de inconstitucionalidad.

La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o desfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución (Fallos 313:1513, considerando 57 y sus citas).

C.F.S.S., Sala II
sent. 120404
15.03.07

“ANDRADE, ARTURO ANTONIO c/ E. N. – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(D.-H.-F.)

Viajes al exterior. Viáticos. Dec. 280/95.

A la luz de los lineamientos dados por la C.S.J.N. al fallar en autos “Guida, Lilianna” (sent. del 02.06.00) con referencia a la relación de empleo público, y de acuerdo a las constancias de autos, se advierte en forma clara que lo percibido por el titular (en el caso, como integrante del Batallón del Ejército Argentino 7 desplegado en Croacia) no integra el haber mensual, sino que se trata de la compensación de gastos originados por circunstanciales y transitorias necesidades que se entienden cubiertas con lo abonado. Además, al aludir a variables de índole personal como es la percepción de viáticos, resulta evidente que su monto puede estar sujeto a la incidencia del art. 11 del Dec. 280/95.

C.F.S.S., Sala I
sent. 121245
24.05.07

“RODRÍGUEZ, CARLOS ALFREDO c/ E.N. – Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(D.-M.-Ch.)

POLICÍA FEDERAL

Haberes previsionales. Bonos de consolidación. Intereses. Tasa aplicable.

Si los bonos se encuentra vigentes -es decir que no ha vencido el período de consolidación dispuesto en la correspondiente normativa-, conforme el procedimiento establecido en las leyes de consolidación, las acreencias se calculan en la forma prevista en la sentencia o convenio hasta la fecha de corte, con más sus intereses. A partir de allí y hasta el vencimiento de los bonos, éstos conllevan sus propios intereses. Al respecto, la C.S.J.N. sostuvo que “durante todo el período que contempla la consolidación, es decir, desde la fecha de emisión de los bonos hacia el futuro, las obligaciones devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central” (Fallos 321:3513). Ahora bien, si vencido el plazo de diez años por el cual se emitie-

ron los bonos la deuda no fue cancelada, corresponde el pago de intereses desde su vencimiento hasta el efectivo pago en los términos de la sentencia que se ejecuta, es decir -en el caso de autos-, aplicando la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (Fallos 325:1185).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120595

28.03.07

“GALIANO DE ALBAREZ, MARÍA ANTONIA c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-M.-D.)

Haberes previsionales. Embargo. Honorarios.

De la lectura del articulado de la ley 21.965 y sus reglamentaciones, no surge la existencia de una prohibición de embargar los haberes de los sujetos comprendidos en dicha normativa. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la solicitud del letrado de la actora, disponiendo el embargo de los haberes de ésta hasta un límite del 20% de los mismos.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69282

18.05.07

“MELGAREJO, ELBA DEL CARMEN Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-M.-D.)

Haberes previsionales. Embargo. Honorarios.

Si bien la normativa habla de la inembargabilidad de los haberes jubilatorios -en un principio lo contempló el art. 2 de la ley 9.511, luego el art. 46 de la ley 18.037, que hizo la salvedad respecto de las cuotas por alimentos y litisexpensas, y actualmente el art. 14, incs. c) y d) de la ley 24.241; amén de lo dispuesto en el art. 319, inc. 3 del C.P.C.C.-, no resulta un dato menor a tener en cuenta el hecho que en autos no se haya discutido la procedencia o no del beneficio en sí, sino el reajuste del mismo, que fue obtenido por la titular mediante las labores profesionales realizadas.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69282

18.05.07

“MELGAREJO, ELBA DEL CARMEN Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-M.-D.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2744/93. Intereses. Tasa aplicable.

El planteo referido a la tasa de interés aplicable remite a cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas por el Alto Tribunal en autos “Ramundo, Juvenal” y “Beltrán, María Gladis”, ambas falladas el 27.12.06; cuyos fundamentos y doctrina corresponde dar por reproducidas. En consecuencia, corresponde ordenar la aplicación de la tasa de interés pasiva.

C.F.S.S., Sala I

sent. 121013

30.04.07

“CORREA, ISABEL MARÍA MARGARITA c/ Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(D.-Ch.-M.)

Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 2133/91 y 713/92. Policía de los ex territorios nacionales.

La decisión del “a quo” que reconoció el carácter remunerativo y bonificable de los beneficios instituidos por los Decs. 2133/91 y 713/92, no se altera en razón del argumento esgrimido por el apelante relativo a que los accionantes cumplieron funciones de policía en los ex territorios nacionales, pues tal situación fue analizada en la sentencia que se ataca, poniéndose de relieve la existencia de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, por la cual se consideró de aplicación el régimen de la ley 21.965 y normativas reglamentarias a dichos agentes. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116205

19.03.07

“LUCERO, SATURNINO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior s/Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”
(L.-P.L.-F.)

Pensión. Viuda. Importes devengados al momento del fallecimiento del causante.
Los importes devengados al tiempo del fallecimiento del causante deben ser percibidos por su viuda a la que se le otorgó pensión, de conformidad con las disposiciones del art. 20 de la ley 14.370 (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.12.02, “Salgueiro, Elida Josefa c/ A.N.Se.S.”). Ello así, porque el derecho a pensión por fallecimiento del causante surge en virtud de un título que otorga la ley; es decir, que se es continuador legal por derecho propio y no por el carácter hereditario. En igual sentido, el Alto Tribunal sostuvo que la facultad del reclamante (pensionada) para hacer valer ese derecho “no deriva de su título de heredera, sino de beneficiaria previsional que le reconoció el propio Organismo Administrativo demandado, y que proviene de un llamado directo y personal de la ley” (cfr. “Herrasti, Soledad c/ I.M.P.S.”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120029

08.02.07

“POVSE DE MALLEA, MARÍA c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal - Ministerio del Interior”
(H.-F.-D.)

Personal en actividad. Obra Social. Aporte. Dec. 582/93. Competencia

Encontrándose en actividad el peticionante, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender en el recurso interpuesto contra la sentencia que le denegó el reintegro de sumas retenidas por aplicación del Dec. 582/93. Ello así, porque dicha competencia se halla limitada a “...los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Juzgados Federales de Primera Instancia ...” respecto de “las demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” (arts. 4 y 2, inc. c, Ley 24.655).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68713

22.02.07

“SEIMANDI, RODOLFO ESTEBAN c/ Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(Ch.-M.)

SERVICIO PENITENCIARIO

Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción.

En el fallo “Saralegui, Francisco c/ E.N. – P.E.N.” (sent. del 14.02.06) -que al igual que el caso de autos, refiere a un retirado del Servicio Penitenciario Federal que cuestionaba la constitucionalidad del Dec. 894/01 y pedía que el Estado se abstenga de exigirle el cumplimiento de la opción prevista en dicha norma- la C.S.J.N., conforme lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nación a cuyo dictamen remite, sostuvo la razonabilidad del decreto cuestionado. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116477

20.04.07

“CALLEJAS MARÍN, ALFREDO c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Servicio Penitenciario Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(L.-F.-P.L.)

Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción.

El Poder Ejecutivo, mediante el Dec. 894/01, actuó dentro de las atribuciones que le son propias al introducir modificaciones al régimen de incompatibilidades, sin contradecir el estatuto de empleo público dictado por el Congreso. Asimismo, tampoco resulta óbice decisivo el régimen orgánico que contiene, en el caso, la ley 20.416 del Servicio Penitenciario, pues se trataría de un permiso con una hipótesis de máxima, reconocido a quienes se encuentren en situación de retiro, pero no de un mandato legal para quien lo incorpore. (cfr. dictamen del Procura-

dor General de la Nación al que remite el fallo de la C.S.J.N. in re “Saralegui, Francisco c/ E.N. – P.E.N.”, sent. del 14.02.06). (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación al que remite el fallo de la C.S.J.N. in re “Saralegui, Francisco c/ E.N. – P.E.N.”, sent. del 14.02.06; C.F.S.S., Sala I, sent. del 25.04.06, “Breuning, Silvia Noemí c/ Servicio Penitenciario Federal”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116477

20.04.07

“CALLEJAS MARÍN, ALFREDO c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Servicio Penitenciario Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(L.-F.-P.L.)

Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción.

La razonabilidad del Dec. 894/01 se sustenta en que no impone una de las alternativas, y deja librada a la voluntad del agente elegir por lo que más le convenga a sus intereses, que podrían no ser meramente patrimoniales. La falta de obligatoriedad por la opción de continuar trabajando sin el pago de remuneraciones no puede generar derecho a reparación alguna, en la medida que tal hipótesis sería producto de una decisión deliberada del agente y no una medida coactiva de la administración. Sólo en este caso resultaría aplicable la indemnización prevista en la ley de empleo público (art. 21 de la ley 25.164). La opción por percibir el salario puede convenir a los intereses del agente además de que tal elección no afecta al derecho adquirido a percibir el haber jubilatorio, porque sólo implica la suspensión de su cobro (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación al que remite el fallo de la C.S.J.N. in re “Saralegui, Francisco c/ E.N. – P.E.N.”, sent. del 14.02.06; C.F.S.S., Sala I, sent. del 25.04.06, “Breuning, Silvia Noemí c/ Servicio Penitenciario Federal”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116477

20.04.07

“CALLEJAS MARÍN, ALFREDO c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Servicio Penitenciario Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(L.-F.-P.L.)

S.I.D.E.

Haberes previsionales. Asignaciones generales. Reclamo. Retroactivo. Período de actividad. Competencia.

Aún cuando para resolver la petición de los accionantes actualmente retirados (en el caso, cobro de asignaciones generales con más su retroactivo), resulte necesario evaluar situaciones sucedidas durante el período en actividad, corresponde la aplicación de la ley 24.655 que determina la competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social para conocer en las demandas vinculadas a la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (art. 2, inc. c). Al respecto se ha expedido la C.S.J.N., estableciendo que “... no resulta razonable exigir a los recurrentes que deduzcan dos demandas similares ante distintos fueros a fin de lograr idénticos reconocimientos, ya que no sólo importa un arbitrario retraso en la declaración de derechos de naturaleza alimentaria que cuenta con amparo constitucional, sino que trasunta un dispendio jurisdiccional que se opone a principios básicos de economía y concentración procesal ...” (cfr. sent. del 03.05.05, “Castro Fox, Rodolfo Alberto y otros”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68805

28.02.07

“BRIZUELA BLASIDA, MARÍA ORLINDA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior y otros s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-D.-M.)

Caducidad de la acción. Reclamo administrativo previo. Ley 19.549. Inaplicabilidad.

Habida cuenta que el Alto Tribunal se ha expedido en los autos “Daus, Oscar Normando” (sent. del 18.07.06), confirmado el criterio sentado en “Bagnat”, “Sire”

“Tajes” en cuanto a que “... los requisitos de admisibilidad de la acción contencioso administrativo previstos en la ley 19.549, no son aplicables en el ámbito de las fuerzas armadas y de seguridad ...”, corresponde modificar el criterio reiteradamente sostenido por la Sala, en el sentido de que correspondía la aplicación de dicha normativa a los fines de comprobar la admisibilidad de causas similares a la debatida en autos.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68805

28.02.07

“BRIZUELA BLASIDA, MARÍA ORLINDA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior y otros s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-D.-M.)

HABERES PREVISIONALES

DETERMINACIÓN DEL HABER

Ley 24.241. Caso “Baudou”.

Ante la índole de los planteos atinentes a la determinación y movilidad de la prestación hasta el 30.03.95, corresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” que, con apoyo en la doctrina del Superior Tribunal -vigente a la fecha del pronunciamiento-, tuvo en cuenta que las remuneraciones computadas para el cálculo del haber inicial debían revalorizarse con arreglo a la doctrina sentada en los precedentes “Chocobar, Sixto Celestino” y “Baudou, Osvaldo Jorge” (sentencias del 27.12.96 y 31.08.99, respectivamente), aclarando que la suma de la PBU, PC y PAP no podrá exceder el tope del art. 9 de la ley 24.463, ni ser inferior a la suma efectivamente percibida en la actualidad. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116007

01.03.07

“VÁZQUEZ ESTÉVEZ, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Impugnación de fecha inicial de pago”

(L.-F.-P.L.)

Ley 24.241. Caso “Baudou”.

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el organismo contra el pronunciamiento del “a quo” que ordenó el recálculo de la PBU, PC y PAP, aplicando -en lo relativo a la determinación del haber inicial- la doctrina emergente de lo dispuesto por la C.S.J.N. en autos “Baudou, Osvaldo Jorge” (sent. del 31.08.99), toda vez que dicho precedente era de aplicación para un sistema previsional distinto a aquel en el cual el accionante obtuvo su beneficio. (Disidencia del Dr. Laclau)

C.F.S.S., Sala III

sent. 116007

01.03.07

“VÁZQUEZ ESTÉVEZ, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Impugnación de fecha inicial de pago”

(L.-F.-P.L.)

FECHA INICIAL DE PAGO

Trabajadores autónomos. Dec. 679/95. Res. Conj. A.N.Se.S. 91/95 y D.G.I. 16/95.

Si bien el art. 3 del Dec. 679/95, reglamentario del art. 19 de la ley 24.241, no aclara que debe entenderse por solicitud, cuando se trata de trabajadores autónomos se tendrá en cuenta la Res. Conj. A.N.Se.S. 91/95 y D.G.I. 16/95, según la cual la prestación se tiene por pedida en la fecha de presentación ante la D.G.I. del formulario de declaración jurada 577/A “Solicitud de determinación de deuda y situación de revista”; quedando ello supeditado a que se cancele el saldo deudor por aportes omitidos en los plazos que la D.G.I. indique y que el legajo se presente ante la A.N.Se.S. dentro de los 45 días siguientes a la notificación del

saldo deudor -ver Rodríguez Simón, "Fecha inicial de pago", R.J.P., Tº VI, pág. 305- (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 15.03.02, "Moscoso Domínguez, Ricardo"; ídem, Sala I, sent. del 29.11.04, "Bilos, Pedro José").

C.F.S.S., Sala II

sent. 120619

11.04.07

"BLANK, ANA JULIA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias"

(F.-E.-D.)

Trabajadores autónomos. Dec. 679/95. Res. Conj. A.N.Se.S. 91/95 y D.G.I. 16/95.

Si de la compulsión del expediente administrativo no surge acreditado que el peticionante haya presentado todos los elementos que acreditan el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder a la prestación con anterioridad a la fecha de la solicitud del beneficio ante la A.F.J.P. -aún existiendo instrumentos que prueban el oportuno pago de la deuda determinada por el fisco (volante de pago del capital adeudado y tiquete exigido en el pto. 1.5.2. del Anexo I de la Res. Conj. A.N.Se.S. 91/95 y D.G.I. 16/95)-, corresponde confirmar la decisión que otorgó el beneficio desde dicho momento. Ello así, porque la fecha de presentación ante la D.G.I. del formulario de declaración jurada 577/A no puede ser tomada como fecha inicial de pago, puesto que la formación del expediente administrativo se produjo vencido el plazo de 45 días que fija el art. 5, párrafo primero, de la referida Res. Conj. A.N.Se.S. 91/95 y D.G.I. 16/95 y, en consecuencia, cobra operatividad lo prescrito en el segundo párrafo de la disposición citada, que reza: "vencido el término fijado en este artículo, se tendrá como fecha de solicitud del beneficio el día en que se formalice la presentación del legajo ante la A.N.Se.S. en las condiciones mencionadas, aunque no se registre deuda".

C.F.S.S., Sala II

sent. 120619

11.04.07

"BLANK, ANA JULIA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias"

(F.-E.-D.)

REAJUSTE

Consolidación de deuda. Bonos Previsionales Cuarta Serie.

No obstante el criterio sustentado recientemente por el Tribunal en autos "Gómez, Marcelino José" (sent. del 22.09.06), atento lo resuelto por la C.S.J.N. in re "Viplán S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ B.C.R.A." (sent. del 10.10.06), un nuevo estudio de las cuestiones planteadas llevan a concluir que es recién al momento de tener liquidación aprobada y firme que la parte cuenta con su crédito consolidado, y como consecuencia de ello, es -en ese momento- que puede producirse la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69304

24.05.07

"REALES, OSCAR HIPÓLITO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"

(D.-Ch.-M)

Consolidación de deuda. Bonos Previsionales Cuarta Serie.

La serie con la cual se cancelará el pago es una cuestión eminentemente fáctica, que se encuentra reservada al Ministerio de Economía o al órgano que éste designe, por ser quienes cuentan con la información referida a los importes necesarios y arbitran las medidas tendientes a la cancelación de las deudas según los valores nominales emitidos (cfr. dictamen de la Procuración General, acápite IV, último párrafo, en el fallo de la C.S.J.N. in re "Viplán S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ B.C.R.A." -sent. del 10.10.06-). Ello así, tratándose -en el caso de autos- de una liquidación total y aprobada el día 15.06.06, el crédito del actor será cancelado con la entrega Bonos Cuarta Serie.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69304

24.05.07

"REALES, OSCAR HIPÓLITO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"

(D.-Ch.-M)

Consolidación de deuda. Bonos Previsionales Cuarta Serie.

Los agravios dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de los arts. 64 a 66 de la ley 25.827, respecto del mayor plazo de pago dispuesto en los Bonos de Consolidación Previsional Cuarta Serie con respecto a los Bonos Tercera Serie encuentran, tal como lo sostuvo la C.S.J.N. in re “Viplán S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ B.C.R.A.” (sent. del 10.10.06), adecuada respuesta en los fundamentos y conclusiones expuestos por el Alto Tribunal en la causa “Galli, Hugo Gabriel” (Fallos 328:690), donde se sostuvo que no hay violación del art. 17 de la C.N. cuando, por razones de necesidad, se sanciona una norma que no priva a los particulares de beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni se les niega su propiedad, y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad (cfr. dictamen de la Procuración General a la que remitió la Corte en el referido caso “Galli”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69304

24.05.07

“REALES, OSCAR HIPÓLITO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-Ch.-M)

Consolidación de deuda. Bonos Previsionales Cuarta Serie.

Conforme el art. 7 b) del Dec. 1873/02, el saldo de capital de los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Moneda Nacional Tercera Serie 2% se ajustarán conforme el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), a partir de la fecha de emisión (03.02.02). Por su parte, los bonos creados por el art. 66 de la ley 25.827, es decir, los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Cuarta Serie, se ajustarán también conforme el CER a partir de la fecha de su emisión, esto es, recién el 05.03.04; quedando así todo un período -desde el 01.01.02 hasta el 14.03.04- sin pauta alguna de ajuste. Dicha omisión pretendió ser suplida por el Ministerio de Economía y Producción mediante Res. 378/04, en la cual se dispuso que para la determinación de la cantidad de bonos a entregar, a partir de la fecha de corte y hasta el 14.03.04, se adicionará la tasa de interés a que refiere la Comunicación “A” 1828, pto. I, publicada por el B.C.R.A. (o sea, Caja de Ahorro Común). Pero en atención a que la aplicación de la referida tasa provoca un grave perjuicio al reclamante, ya que sustituye la tasa de interés prevista en la sentencia (esto es, un 8,30% -tasa de caja de ahorro común B.C.R.A. por el período 01.01.02 al 14.03.04- frente a un 42,06% por igual período a tasa pasiva promedio B.C.R.A.), ha de concluirse, habida cuenta que los bonos para cancelar la deuda aparecen emitidos más de dos años después de la consolidación hasta la fecha de la efectiva concreción de la novación, que el monto sujeto a consolidación deberá incrementarse con la tasa de interés dispuesta en la sentencia, esto es, la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69304

24.05.07

“REALES, OSCAR HIPÓLITO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-Ch.-M)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

El Alto Tribunal, en la causa “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), al analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 7.2 de la ley 24.463, fija un plejo sustancial de derechos objetos de tutela y el medio para concretarlos; reivindicando con énfasis a la dignidad humana como un valor social axiomático. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

El deterioro adquisitivo ocurrido a partir del año 2002 a raíz del cataclismo económico que deprecia al poder adquisitivo de los haberes previsionales a partir del año referido (cfr. C.S.J.N., “Badaro, Adolfo Valentín”, sent. del 08.08.06, Consid. 9º), ha sucedido sin que para su admisión se necesite prueba que lo corrobore. Sumado ello a la clara directiva hermenéutica constitucional que sienta el Alto Tribunal en “Sánchez, María del Carmen” (sents. del 17.05.05 y 28.07.05), la manda de la movilidad con motivo de la naturaleza sustitutiva de las prestaciones jubilatorias, propias de regímenes contributivos que reviste y para que ello sea

eficaz, impone al Estado el deber de resguardar un equilibrio razonable de los ingresos de pasividad con los salarios de actividad (art. 14 bis C.N.), que llevó a considerar en distintos pronunciamientos que correspondía fijar un parámetro de movilidad a partir del año 2002, quedando al Congreso de Nación fijar la cuantía del mismo. De allí que se propició que las variables de ajuste que se determinen para la movilidad posterior al año 2003, conforme lo señalado por el Alto Tribunal en el referido caso “Badaro”, debían contemplar el reconocimiento del retroactivo de los incrementos habidos desde ese año. Sin embargo, la ley 26.198 sólo prevé un incremento a partir del año 2007, y fija un haber previsional mínimo (arts. 45 y 46). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Los estudios económicos que se realizaron en la causa “Ortino, José Ángel” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 17.10.05) evidencian que el incremento acordado a partir del año 2007 por la ley 26.198, no es suficiente para paliar el desfasaje producido en los beneficios previsionales durante más de quince años. No revierte esa situación los aumentos que se han acordado a los haberes jubilatorios, muchos de ellos selectivos y que abarcan únicamente a un sector del ámbito previsional -el de menores recursos- pero que dejan sin margen de movilidad a una amplia franja de beneficiarios que, por exceder el mínimo, sólo han merecido un tratamiento parcial y en modo alguno implicaron un parámetro de movilidad. Al respecto debe tenerse en cuenta que las diferencias previsionales no implican una inequitativa distribución de los haberes, sino la aplicación de diversas pautas legales al otorgarse la jubilación. Diversidad dada por la sola razón de haberse aportado más al sistema. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

El ajuste dado por la ley 26.198, a más de los aumentos parciales o generales que ya dio el Poder Ejecutivo, no logra, en la práctica, una recomposición eficaz para toda la masa previsional, y a ello no obsta que un sector -el de más bajos ingresos- pueda verse compensado. Queda fuera del marco y directiva constitucional que impone y ampara a la movilidad previsional, un marcado número de beneficiarios que han visto gravemente deteriorados sus ingresos y su dignidad y que, de tal manera, quedan ya desfasados al momento de otorgarse la recomposición que establece la ley citada. Ante la situación descrita, ha de emplearse un atributo específico e indelegable de la función jurisdiccional que señala que nada impide al juzgador analizar la razonabilidad de la norma a tenor de la realidad a que se impone, y entre ese análisis se encuentra, precisamente, verificar si su aplicación de cumplimiento a una norma superior en la escala jerárquica legislativa, la Constitución Nacional. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Si la norma no contempla la situación, o es insuficiente, la competencia del Congreso de la Nación para fijar la movilidad del haber previsional no es obstáculo para que en el desempeño de otra esencial potestad, la jurisdiccional, y en resguardo de la incolumidad del principio de supremacía constitucional, se adopte en el caso puntual y de manera pretoriana la decisión que -a su saber y entender- en el marco de la equidad, le indique al juez lo que en justicia corresponde para restablecer la integridad de la manera que fija el poder constituyente. “Si bien el mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social y dispone que las jubilacio-

nes y pensiones serán móviles, se dirige primordialmente al legislador, cuando los cambios circunstanciales hacen que la solución legal inatacable en su comienzo se torne irrazonable, el cumplimiento del mandato constitucional atañe también a los restantes poderes públicos, los que dentro de la órbita de su competencia, deben hacer prevalecer el espíritu de los constituyentes, en el marco que exigen las diversas formas de justicia” (cfr. C.S.J.N., “Valles, Eleuterio Santiago”, sent. del 29.10.87). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

De enero de 2002 a junio de 2005, el promedio de las remuneraciones declaradas al sistema de jubilaciones y pensiones ascendió al 45,50%. No obstante ello, dicho aumento no se vio reflejado en un ajuste de los haberes de la totalidad de la masa previsional. En efecto, el Poder Ejecutivo, mediante los Decs. 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, otorgó incrementos selectivos que, a excepción del acordado por el Dec. 764/06, sólo comprendieron a parte del sector pasivo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

La evaluación de un posible porcentaje de aumento, acotado al lapso 2003 a 2007, si bien necesariamente ha de resultar pretoriano, debe propender a mantener una justa equiparación entre el ingreso a las arcas del Estado y el egreso formalizado mediante el pago de los beneficios, sin obviar en esa consideración los aumentos acordados por el Poder Ejecutivo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

La idea de una pauta de movilidad consiste en mantener, en lo posible, el nivel adquisitivo tenido en mira al momento de otorgar el beneficio, sin perder de vista las diferencias propias de cada uno de ellos de acuerdo con las circunstancias en que fueron acordados. En consecuencia, la proyección retroactiva del porcentaje acordado por la ley 26.098, no parece irrazonable, acotado el mismo al período que se inicia en el año 2003, y con especial incidencia para aquellos que no tuvieron aumento en sus haberes o que sólo tuvieron una mínima recomposición, desproporcionada con respecto al incremento remunerativo y consiguiente incidencia en los aportes y contribuciones ingresados al sistema por similar período. En consecuencia, corresponde reconocer para el lapso 2003 a 2005 un ajuste del 39%, en el que quedarán subsumidos todos los aumentos que pudiera haber tenido el beneficiario en ese tiempo. En el año 2006 se estará al aumento general dispuesto por el P.E.N. (11% para todas las prestaciones a cargo del Régimen Previsional del S.I.J.P., conforme Dec. 764/06), y a partir del año 2007, se aplicará la ley 26.198 y demás normas presupuestarias. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Respecto al reajuste posterior al 31.03.95, corresponde aplicar al haber previsional del titular una movilidad equivalente a la primera variación del 10% que se registre en el RIPTÉ (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Es-

tables) a partir de la fecha indicada, y así sucesivamente hasta tanto el Congreso de la Nación determine el “contenido concreto” de la garantía de movilidad que consagra el art. 14 bis. de la C.N. (cfr. C.S.J.N., “Sánchez, María del Carmen”, sent. del 17.05.05). Desde la fecha de la liquidación definitiva, la A.N.Se.S. dispondrá el reajuste dentro de los 60 días de producida variación mínima del 10% en el índice indicado. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120791

25.04.07

“CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05) obligó, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a confirmar el rechazo de “... toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles ...” según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7, punto 2 de la ley 24.463. Ello así, la Sala, siguiendo tales lineamientos y en la convicción de la justicia del reclamo, se pronunció en el caso “González, Elisa Lucinda” (sent. del 16.06.05), fijando las pautas de movilidad con posterioridad al 01.04.95. Ello en el entendimiento que la norma constitucional del art. 14 bis no tiene límites temporarios en su aplicación. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120472

09.03.07

“GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Habida cuenta el limitado alcance de cada pronunciamiento -acotado al litigante- y en cuanto los otros departamentos del Estado no reglamenten adecuadamente el derecho constitucional vulnerado, lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), no puede resultar en una paralización de los reclamos de reajuste en trámite ante los juzgados con competencia en la materia. En especial, por cuanto son objeto de pretensión diferencias de haberes que surgen de períodos pretéritos y que requieren un pronunciamiento actual que no puede postergarse ante la gravedad de la lesión producida y edad de los reclamantes. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120472

09.03.07

“GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

En la causa “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06) se advierte que la C.S.J.N., con apropiado activismo, impulsa la realización por parte del Estado de las políticas públicas necesarias para evitar que prosiga la lesión a los derechos tutelados (cfr. R. Gil Lavedra, “Independencia judicial: Una cuestión prioritaria”, pub. en Realidad Judicial, pág. 2, del 25/08/06). Pero en el ínterin, no pueden los Tribunales posponer la resolución de las causas sometidas a decisión (arts. 15 y 16 Cód. Civil; art. 34, inc. 3 C.P.C.C.). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120472

09.03.07

“GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Ya en el caso “Postiglione” (Fallos 325:3540) nuestro Máximo Tribunal había advertido claramente sobre el limitado alcance de “Heit Rupp” (Fallos 322:2229) a los períodos de estabilidad económica, situación que sufrió dramáticas variaciones producto de la devaluación operada en el año 2002, con el consecuente envilecimiento de las jubilaciones y pensiones. Ni dicha advertencia, ni las sentencias

dictadas posteriormente reconociendo el derecho a la movilidad, sirvieron para que desde los ámbitos en que el tema debió ser tratado se hubiera adoptado medida alguna al respecto, excepto deducir recursos contra los pronunciamientos adversos a la A.N.Se.S. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120472

09.03.07

“GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Con independencia de las decisiones que para el futuro adopten los responsables en reglamentar el derecho a la movilidad del haber previsional, el concreto agravio constitucional planteado por el peticionante requiere de una respuesta actual, habida cuenta que “... el Poder Judicial es el llamado para resguardar la supremacía de la Constitución Nacional” (Fallos 308:1855). En consecuencia, debe entenderse que la garantía de “jubilaciones y pensiones móviles” (art. 14 bis de la C.N.) recibe adecuada tutela para el período posterior a marzo de 1995. Por ello, debe confirmarse la decisión del “a quo” que hizo lugar al reajuste desde la fecha indicada, el que será utilizado hasta el 31.12.06, momento a partir del cual se aplicará el incremento dispuesto por el art. 45 de la ley 26.198. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120472

09.03.07

“GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05) obliga, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a rechazar “... toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles ...” según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7, punto 2 de la ley 24.463. Por esa razón, la Sala, siguiendo los lineamientos del Tribunal Címero, dictó el fallo “González, Elisa Lucinda” (sent. del 16.06.05), donde estableció criterios de movilidad a partir del 01.04.95; entendiendo que la norma constitucional del art. 14 bis no tiene límites temporarios en su aplicación. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120472

09.03.07

“GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Si bien es cierto que conforme la doctrina de la Corte Suprema se le reconoce al parlamento la facultad de reglamentar el art. 14 bis, doctrina ya sentada desde vieja data en los casos “Rolón Zappa, Victor Francisco” (sent. del 25.8.88), “Chocobar, Sixto Celestino” (sent. del 27.12.96), “Heit Rupp, Clementina” (sent. del 16.09.99) y “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), no es menos cierto que también el Alto Tribunal en la causa citada “Badaro”, puntualiza en el considerando 7° que la facultad parlamentaria del art. 7 punto 2 de la ley 24.463 no fue ejercida ya que las leyes de presupuestos números 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967 no contienen previsión alguna de incremento de las prestaciones ni han señalado la existencia de graves razones de interés general que impidieran concederlos, aspectos -no haber fijado pautas de movilidad- que pueden ser cuestionados por el demandante en la medida que ese aumento resulte necesario para mantener un adecuado nivel de su beneficio. Ante tan clara doctrina de la Corte, y habida cuenta que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (art. 15 del Cód. Civ.), el Tribunal se ve compelido a resolver -en definitiva y en forma integral- esta causa, para llegar a una solución justa presidida por el espíritu de la Constitución que fluye de los fines y valores que la articulan. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120472
09.03.07
"GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"
(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso "Badaro".

El principio de movilidad consagrado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional es una institución suprallegal, que sencillamente ha tenido por objeto mantener en igual grado de dignidad a la persona a lo largo de toda su vida, y la ponderación de ello en el tema previsional, es respetar la capacidad adquisitiva que se traduce con la consagración de la proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber de pasividad. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I
sent. 120472
09.03.07
"GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"
(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso "Badaro".

Los datos oficiales del INDEC entre enero de 2002 y enero de 2007 - comparados con la realidad remuneratoria del demandante- unido a lo expresado en el considerando 9º del fallo "Badaro Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06), reflejan un evidente deterioro del haber previsional del actor, que inexorablemente debe ser reparado. Si ello no ocurre, estaremos en presencia de una violación al principio constitucional de "movilidad" -que significa la permanente adecuación de la prestación dineraria a los vaivenes de la economía y por ende variabilidad de las remuneraciones de los activos-; también al principio de integralidad -que significa que la prestación en pasividad debe ser de tal magnitud que guarde relación con el haber del activo-; y también -lo más grave-, frente a la violación del principio básico -también constitucional- de garantizar el derecho humano de "dignidad" de la persona inserto en el Preámbulo y en el art. 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en el caso de los mayores, no admite dilación su reconocimiento. En consecuencia, corresponde ordenar el reajuste de los haberes del actor en la forma dispuesta por el Tribunal in re "González, Elisa Lucinda" (sent. del 16.06.05) hasta diciembre de 2006, y sobre ese haber, a partir de enero de 2007, se actualizarán en la forma indicada en el art. 45 de la ley 26.198. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I
sent. 120472
09.03.07
"GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"
(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso "Badaro".

En el fallo "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06), el Alto Tribunal concluye que corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias, que la "omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido en la Ley Fundamental", y difiere el pronunciamiento sobre el período posterior al mes de marzo de 1995 por un plazo que resulte suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes. Por ello, teniendo en cuenta la autoridad institucional de los fallos de la C.S.J.N. (Fallos 315:2386; 326:4165), conjugada con el inexcusable deber de juzgar que tienen los magistrados judiciales (art. 15 del Código Civil), corresponde confirmar la vigencia del derecho a la movilidad de las prestaciones para el lapso posterior al mes y año antes referidos, con el fundamento, alcances y condiciones indicados por la Corte en el precedente citado. Ello sin perjuicio de lo prescripto por el art. 45 de la ley 26.198. (Disidencia de la Dra. Maffei).

C.F.S.S., Sala I
sent. 120472
09.03.07
"GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"
(D.-M.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso "Badaro".

Lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Sánchez, María del Carmen" (sent. del

17.05.05) obligó, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a confirmar el rechazo de "... toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles ..." según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7, punto 2 de la ley 24.463. Ello así, la Sala, siguiendo tales lineamientos y en la convicción de la justicia del reclamo, se pronunció en el caso "González, Elisa Lucinda" (sent. del 16.06.05), fijando las pautas de movilidad con posterioridad al 01.04.95. Ello en el entendimiento que la norma constitucional del art. 14 bis no tiene límites temporarios en su aplicación. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

"GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso "Badaro".

Ya en el caso "Postiglione" (Fallos 325:3540) nuestro Máximo Tribunal había advertido claramente sobre el limitado alcance de "Heit Rupp" (Fallos 322:2229), acotándolo a los períodos de estabilidad económica, situación que sufrió dramáticas variaciones producto de la devaluación operada en el año 2002, con el consecuente envilecimiento de las jubilaciones y pensiones. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

"GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso "Badaro".

La prudencia del reajuste reconocido por la Sala está dado en que éste sólo es procedente cuando, recalculado el haber (conf. C.S.J.N., "Pellegrini, Américo", sent. del 28.11.06) a partir de abril de 1995, el importe del reajuste resultante supera en más de un 15% la remuneración, reconociéndose el derecho a percibir sólo las diferencias que excedan de dicho porcentual, disminución considerada como no confiscatoria en "Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo" -Fallos 323:4216- (cfr. C.S.J.N. "Cretari, Artemio Luciano", sent. del 21.12.04), manteniendo la vigencia de "Villanustre, Raúl Félix" (C.S.J.N., sent. del 17.12.91), y usando el más general de los índices que, a juicio del Tribunal, refleja la realidad del movimiento de los ingresos de los trabajadores (cfr. C.F.S.S., Sala I, "González, Elisa Lucinda", sent. del 16.06.05), y siempre limitado temporalmente hasta que el legislador de adecuado tratamiento a la garantía constitucional en juego. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

"GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios"

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso "Badaro".

Transcurridos más de 20 años de "Rolón Zappa" (Fallos 308:1848), donde pudo entenderse que nada más cabía agregar para la descalificación de normas cuya aplicación conducía a incumplir la manda constitucional sobre "jubilaciones y pensiones móviles", lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06) aparece como una medida de elevado carácter institucional, pero que en modo alguno puede posponer el tratamiento de los legítimos reclamos -esencialmente de naturaleza alimentaria- de reajuste en trámite. En la referida causa, se advierte que la C.S.J.N. con apropiado activismo, impulsa la realización por parte del Estado de las políticas públicas necesarias para evitar que prosiga la lesión a los derechos tutelados (cfr. R. Gil Lavedra, "Independencia judicial: Una cuestión prioritaria", pub. en Realidad Judicial, pág. 2, del 25/08/06). Pero en el ínterin, no pueden los Tribunales posponer la resolución de las causas sometidas a decisión (arts. 15 y 16 Cód. Civil; art. 34, inc. 3 C.P.C.C.). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”
(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

No obstante el tiempo transcurrido, y la entidad de las cuestiones propuestas por el Alto Tribunal en el fallo “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), los otros poderes del Estado siguieron desoyendo el requerimiento para terminar con la zozobra e inseguridad en que se mantiene a un amplio espectro de titulares de prestaciones previsionales en orden al derecho a gozar de movilidad en sus haberes conforme lo consagrado por el art. 14 bis de la C.N. La determinación de “... una movilidad del 13% ...” para el ejercicio presupuestario 2007, dispuesta a partir del 01 de enero en las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público (art. 45, ley 26.198), tras el requerimiento institucional de la Corte en la causa referida, sumado al 11% (Dec. 764/06) otorgado a partir del 01 de junio del año 2006, no resulta un modo válido de reglamentar la movilidad de las prestaciones para quienes, jubilados en el marco de la ley 18.037, percibían haberes superiores a los mínimos. Ello así, en cuanto no refleja en modo alguno la consolidación del proceso de recuperación de las variables salariales iniciada en el año 2003, datos que por su carácter público, no necesitan de mayor demostración (cfr. cons. 9 del citado caso “Badaro”). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”
(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

El reajuste dispuesto en carácter de movilidad por la ley 26.189, que no tiene en cuenta el deterioro pretérito de los ingresos del reclamante, aparece como una reglamentación insuficiente del precepto consagrado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que lo altera gravemente en perjuicio del beneficiario, y por lo tanto, es obligación de los magistrados el impedir que frustren derechos cuya salvaguarda está a su cargo (cfr. C.S.J.N., “Badaro, Adolfo Valentín”, sent. del 08.08.06, cons. 18). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”
(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Tratándose el objeto de la pretensión de diferencias de haberes que surge de períodos pretéritos y que requieren un pronunciamiento actual que no puede postergarse ante la gravedad de la lesión producida y la edad de los reclamantes, con independencia de las decisiones que para el futuro adopten los responsables en reglamentar el derecho a la movilidad del haber previsional, el concreto agravio constitucional planteado por el peticionante requiere de una respuesta actual, habida cuenta que “... el Poder Judicial es el llamado para resguardar la supremacía de la Constitución Nacional” (Fallos 308:1855). En consecuencia, debe entenderse que la garantía de “jubilaciones y pensiones móviles” (art. 14 bis de la C.N.) recibe adecuada tutela para el período posterior a marzo de 1995 conforme lo resuelto por el Tribunal en la causa “González, Elisa Lucinda” (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 16.06.05), el que se aplicará hasta diciembre de 2006. Sobre el monto del haber así recalculado, se deberá aplicar el incremento por movilidad dispuesto por la ley 26.198. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”
(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05) obliga, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a rechazar

“... toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles ...” según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7, punto 2 de la ley 24.463. Por esa razón, la Sala, siguiendo los lineamientos del Tribunal Címero, dictó el fallo “González, Elisa Lucinda” (sent. del 16.06.05), donde estableció criterios de movilidad a partir del 01.04.95; entendiendo que la norma constitucional del art. 14 bis no tiene límites temporarios en su aplicación. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Si bien es cierto que conforme la doctrina de la Corte Suprema se le reconoce al parlamento la facultad de reglamentar el art. 14 bis, doctrina ya sentada desde vieja data en los casos “Rolón Zappa, Víctor Francisco” (sent. del 25.8.88), “Chocobar, Sixto Celestino” (sent. del 27.12.96), “Heit Rupp, Clementina” (sent. del 16.09.99) y “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), no es menos cierto que también el Alto Tribunal en la causa citada “Badaro”, puntualiza en el considerando 7° que la facultad parlamentaria del art. 7 punto 2 de la ley 24.463 no fue ejercida ya que las leyes de presupuestos números 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967 no contienen previsión alguna de incremento de las prestaciones ni han señalado la existencia de graves razones de interés general que impidieran concederlos, aspectos -no haber fijado pautas de movilidad- que pueden ser cuestionados por el demandante en la medida que ese aumento resulte necesario para mantener un adecuado nivel de su beneficio. Ante tan clara doctrina de la Corte, y habida cuenta que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (art. 15 del Cód. Civ.), el Tribunal se ve compelido a resolver -en definitiva y en forma integral- esta causa, para llegar a una solución justa presidida por el espíritu de la Constitución que fluye de los fines y valores que la articulan. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

El principio de movilidad consagrado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional es una institución suprallegal, que sencillamente ha tenido por objeto mantener en igual grado de dignidad a la persona a lo largo de toda su vida, y la ponderación de ello en el tema previsional, es respetar la capacidad adquisitiva que se traduce con la consagración de la proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber de pasividad. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Los datos oficiales del INDEC entre enero de 2002 y enero de 2007 - comparados con la realidad remuneratoria del demandante- unido a lo expresado en el considerando 9° del fallo “Badaro Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), reflejan un evidente deterioro del haber previsional del actor, que inexorablemente debe ser reparado. Si ello no ocurre, estaremos en presencia de una violación al principio constitucional de “movilidad” -que significa la permanente adecuación de la prestación dineraria a los vaivenes de la economía y por ende variabilidad de las remuneraciones de los activos-; también al principio de integralidad -que significa que la prestación en pasividad debe ser de tal magnitud que guarde relación con el haber del activo-; y también -lo más grave-, frente a la violación del principio básico -también constitucional- de garantizar el derecho humano de “dignidad” de la persona inserto en el Preámbulo y en el art. 22 de la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre, que en el caso de los mayores, no admite dilación su reconocimiento. En consecuencia, corresponde ordenar el reajuste de los haberes del actor en la forma dispuesta por el Tribunal in re “González, Elisa Lucinda” (sent. del 16.06.05) hasta diciembre de 2006, y sobre ese haber, a partir de enero de 2007, se actualizarán en la forma indicada en el art. 45 de la ley 26.198. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. La Dra. Maffei votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

En el fallo “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), el Alto Tribunal concluye que corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias, que la “omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido en la Ley Fundamental”, y difiere el pronunciamiento sobre el período posterior al mes de marzo de 1995 por un plazo que resulte suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes. Por ello, teniendo en cuenta la autoridad institucional de los fallos de la C.S.J.N. (Fallos 315:2386; 326:4165), conjugada con el inexcusable deber de juzgar que tienen los magistrados judiciales (art. 15 del Código Civil), corresponde confirmar la vigencia del derecho a la movilidad de las prestaciones para el lapso posterior al mes y año antes referidos, con el fundamento, alcances y condiciones indicados por la Corte en el precedente citado. Ello sin perjuicio de lo prescripto por el art. 45 de la ley 26.198, vigente desde el 01.01.07. (Disidencia de la Dra. Maffei).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120627

29.03.07

“GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-Ch.-M.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Aún cuando en causas anteriores, en virtud de la autoridad institucional de los fallos de la C.S.J.N. (Fallos 315:2386 y 326:4165), conjugada con el inexcusable deber de juzgar que tienen los magistrados judiciales conforme al art. 15 del Código Civil, la suscripta -dejando a salvo su opinión- decidió hacer lugar a la movilidad para el período posterior al 31.03.95 con el fundamento, los alcances y condiciones indicados por el Alto Tribunal en el caso “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), un nuevo análisis de la cuestión lleva a concordar con el criterio expuesto por el Dr. Díaz en el caso “Godoy, Santiago Loreto” (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.03.07), en cuanto expresa que no obstante el tiempo transcurrido y la entidad de la cuestión propuesta, los otros poderes del Estado siguieron desoyendo el requerimiento para terminar con la zozobra e inseguridad en que se mantiene a un amplio espectro de titulares de prestaciones previsionales en orden al derecho a gozar de movilidad en sus haberes conforme lo consagrado por el art. 14 bis de la C.N. La determinación de “... una movilidad del 13% ...” para el ejercicio presupuestario 2007, dispuesta a partir del 01 de enero en las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público (art. 45, ley 26.198), tras el requerimiento institucional de la Corte en la causa referida, sumado al 11% (Dec. 764/06) otorgado a partir del 01 de junio del año 2006, no resulta un modo válido de reglamentar la movilidad de las prestaciones para quienes, jubilados en el marco de la ley 18.037, percibían haberes superiores a los mínimos. De tal manera, para dar una justa solución al reclamo del titular, resulta adecuado remitir a los fundamentos y solución a que arribara el Tribunal al fallar en autos “González, Elisa Lucinda” (sent. del 16.06.05), en mérito de lo cual el reajuste del haber resultante hasta diciembre de 2006 se practicará conforme a las pautas indicadas en dicho precedente. Sobre el monto del haber así recalculado se aplicará el incremento por movilidad dispuesto por la ley 26.198. (Del voto de la Dra. Maffei, al que adhieren los Drs. Díaz y Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. 121723

12.07.07

“BARRIOS, LUIS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(M.-D.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

Tal como se decidió en autos “González, Elisa Lucinda” (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 16.06.05), toda vez que la inconsecuencia no se supone en el legislador, y por eso se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptar como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor efectivo (Fallos 310:195), resulta innecesario expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 7, ap. 2 de la ley 24.463.

C.F.S.S., Sala I

sent. 121723

12.07.07

“BARRIOS, LUIS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(M.-D.-Ch.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro”.

No basta la simple afirmación de que una norma o cuerpo normativo es contrario a la Constitución Nacional, sino que es preciso demostrar la lesión alegada razonablemente y con relación a las concretas circunstancias de la causa (Fallos 252:325; 258:255; 276:303; 274:423). En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 45 y 47 de la ley 26.198.

C.F.S.S., Sala I

sent. 121723

12.07.07

“BARRIOS, LUIS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(M.-D.-Ch.)

Período posterior al 01.04.95. Caso “Badaro”.

El Alto Tribunal, al fallar el 08.08.06 en autos “Badaro, Adolfo Valentín”, reiteró que la fijación de la movilidad jubilatoria es atribución del Congreso de la Nación, señalando que “la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema de dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la C.N.”, comunicando el contenido de la sentencia al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a fin de que, dentro de un plazo razonable, adopten las medidas pertinentes, sin fijar ningún tipo de movilidad ni incremento alguno en su pronunciamiento. Por consiguiente, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional inútil, y sin perjuicio de dejar a salvo el suscripto su opinión al respecto, corresponde no dar porcentaje alguno de aumento, declarando que la movilidad del haber previsional entra dentro de las facultades acordadas al Congreso de la Nación, el cual habrá de otorgarlas según estime pertinente, más allá de la eventual potestad judicial a ser ejercida en caso de que la misma se estime inadecuada por parte del titular del beneficio. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116055

09.03.07

“BLANCO, FERMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(L.-F.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Caso “Badaro”.

La C.S.J.N., en la causa “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), sin perjuicio de convalidar -una vez más- el derecho a la movilidad del haber previsional, y por ello poner a “conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido por la Ley Fundamental” (ver cons. 19), no juzga apropiado “que el Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa, por la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer” (ver cons. 16); agregando “que la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema de dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la C.N. Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal -Fallos 308:1848-” (ver cons. 18). En consecuencia, dejando a salvo la opi-

nión del suscripto, corresponde declarar expresamente la vigencia del derecho a la movilidad de las prestaciones previsionales a partir del 01.04.95, con el fundamento, alcances y condiciones indicadas por la C.S.J.N. en el referido caso “Badaro”. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116055

09.03.07

“BLANCO, FERMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(L.-F.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

La cuestión de la movilidad posterior al 01.04.95, ineludiblemente debe ser dilucidado -sin más dilaciones- por imperio de la regla contenida en el 15 del Código Civil (“los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”). Proceder de ese modo implica cumplir con “el ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal” (cfr. C.S.J.N. “Badaro, Adolfo Valentín”, sent. del 08.08.06). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117580

16.08.07

“GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

De los incrementos habidos en las prestaciones previsionales -cuyo importe mínimo quedó anclado a partir del 01.08.91 en el mínimo de Australes 1.500.000, (cfr. Dec. 1182/91) seguido de la Res. A.T. y S.S. 678/91 (luego \$ 150)- conforme lo establecido por los Decretos 391/03, 1194/03; 683/04; 1199/04; 748/05; 1273/05; 764/06 y la Ley 26.198, surge un tratamiento marcadamente dispar -con excepción del último período- según la suma de la prestación de que se trate se ubique en alguna de las siguientes tres categorías: a) haberes mínimos que a partir de \$150 (valor vigente desde agosto de 1991) fueron incluidos en todos los incrementos otorgados hasta ubicarse en \$530 a partir del 01.01.07, lo que conforma un 253,30% de aumento máximo; siendo menester aclarar que el porcentual de máxima apuntado, válido para las prestaciones mínimas absolutas de \$150 -la gran mayoría de este colectivo- tuvo menor incidencia en aquellas otras cuya cuantía originaria superaba el mentado piso, hipótesis en la cual, recién se beneficiaron con la suba cuando eran superadas por la nueva base legal; por lo que bien puede afirmarse que la proporción añadida es -aún dentro de este sector- inversamente proporcional al importe inicial del beneficio; b) haberes intermedios superiores al mínimo de \$280 vigente a partir del 01.09.04 (cfr. art. 1 del Dec. 683/04) y hasta \$ 1000, que fueron alcanzados desde esa fecha por el suplemento de movilidad creado por el art. 2 del Dec. 1199/04 (cuya aplicación no podía superar ese límite máximo), seguido de los aumentos dispuestos por el art. 1 del Dec. 764/06 y el art. 45 de la ley 26.198, que significaron una mejoría máxima del 37,97%, para el caso que hubiere correspondido percibir la totalidad del aludido suplemento o -de lo contrario- ligeramente inferior a ese nivel; siendo oportuno aclarar que el mentado suplemento por movilidad quedó neutralizado en los beneficios que fueron incrementados por la elevación de los haberes mínimos a \$350 y \$390 dispuestas por los Decs. 748/05 y 1273/05, respectivamente; c) los haberes superiores a \$1000, que fueron elevados por el Dec. 764/06 y el art. 45 de la ley 26.198 y se favorecieron con una suba de tan solo un 25,43%. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117580

16.08.07

“GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

Para dilucidar si con los incrementos otorgados de conformidad a lo dispuesto por los Decretos 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05, 764/06, y la Ley 26.198, se observó el mandato constitucional que impone que las jubilacio-

nes y pensiones sean móviles, no alcanza con comprobar el trato recibido por la prestación de que se trata en función de la categoría a la que pertenece. Para ello se hace imprescindible -además- confrontar esos datos con otros de origen oficial y, por ello, de público y notorio, que sirvan para reflejar la evolución del costo de vida por un lado, y de los salarios y recursos obtenidos por la recaudación de aportes y contribuciones sobre ellos, por el otro. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117580

16.08.07

“GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

Aún admitiendo que no se trata de un índice de costo de vida, como aclara el I.N.D.E.C. (organismo encargado de su confección), resulta acertado recurrir al de precios al consumidor, por cuanto busca “reflejar los cambios de gastos que un consumidor promedio destina para mantener constante su satisfacción, utilidad, o su nivel de vida...” mediante la ponderación de una canasta de consumo suficientemente amplia y representativa de los rubros que hacen a la vida diaria; y siempre sobre este particular -en concordancia con lo expresado por el suscripto in re “Sirombra, Lucía Elvira” y “Rueda, Roberto” (ambas falladas el 14.09.05)-, escoger el de precios al consumidor del G.B.A, Nivel General, del que se desprende que el incremento del período que va del 1.4.95 al 31.12.06 fue del 88,97%. Por otro lado, el indicador disponible y adecuado para medir la evolución de los ingresos de la población económicamente activa registrada y su consiguiente impacto en la recaudación de aportes y contribuciones con destino al S.U.S.S. -tras la derogación del AMPO dispuesta por la reforma introducida al texto originario del art. 32 de la ley 24241 por la ley 24463-, lo constituye el Promedio de las Remuneraciones Declaradas al S.I.J.P. informado por el Ministerio de Economía -incluido el SAC devengado por ser este remunerativo y estar sujeto a aportes-, elaborado por la Secretaría de Política Económica a través de la Dirección Nacional de Programación Macroeconómica, sobre la base de la información del S.I.J.P. provista por la A.F.I.P. que, en el mismo lapso, aumentó un 107,48%. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117580

16.08.07

“GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

Del cotejo de los guarismos que arrojan los incrementos otorgados de conformidad a lo dispuesto por los Decretos 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05, 764/06, y la Ley 26.198 por un lado, y el de precios al consumidor del G.B.A, Nivel General y el Promedio de las Remuneraciones Declaradas al S.I.J.P. por el otro, se concluye que, en su gran mayoría, el sector de jubilados y pensionados comprendidos en la categoría que percibió haberes mínimos a partir de \$150 obtuvo una notable mejoría en sus haberes que, salvo excepciones, superó con creces al costo de vida y al aumento de la recaudación previsional. Por el contrario, los que percibieron haberes superiores al mínimo de \$280 y hasta \$1.000, y -más aún- los de la categoría que superaban éste último importe, se vieron perjudicados, puesto que no sólo recibieron incrementos porcentuales sensiblemente inferiores a los que partieron del piso de \$150, sino que ellos se ubicaron, además, muy por debajo del incremento verificado en el costo de vida (medido a través del Índice de Precios -GBA- Nivel General) y del constatado en el Promedio de las Remuneraciones aludido. La evidencia expuesta precedentemente, en modo alguno implica cuestionar la política seguida en materia de haberes mínimos, cuya atención prioritaria por las autoridades competentes es -desde todo punto de vista- plausible, teniendo en cuenta que las prestaciones dinerarias que atienden son de naturaleza alimentaria. Lo que se pone en tela de juicio es la situación de las jubilaciones y pensiones que, con prescindencia del grupo al que pertenezcan, no tuvieron una movilidad adecuada para mantener razonablemente en el tiempo su valor real, que se torna más perjudicial cuanto mayor es el importe de la jubilación o pensión. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. 117580
16.08.07
"GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso "Badaro".

Con el objetivo de "impedir que se frustren derechos constitucionales cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal preservar", una vez examinados los alcances de los actos de los otros poderes en torno a la movilidad aplicada a la prestación del peticionante a partir del 01.04.95 (en el caso, recién tuvo su primer aumento del 10% por el suplemento de movilidad a partir del 01.09.04 -art. 2 del Dec. 1199/04-, más el 11% desde el 01.06.06 -art. 1 del Dec. 764/06-, y del 13% a partir del 01.01.07 -art. 45 de la ley 26.198-, lo que significa una recomposición total del 37,97%), debe concluirse que, por lo exiguo, resultan irrazonables e injustos en tanto traducen un tratamiento desigual, producen un perjuicio patrimonial confiscatorio y vulneran -a la vez- el carácter integral e irrenunciable del derecho previsional en juego. Ello es así, máxime si se tiene en cuenta la notable recuperación de la economía de la que dan cuenta muy variados indicadores oficiales por todos conocidos, como ser, la estabilidad lograda en el tipo de cambio elevado y el aumento sostenido durante los últimos años del PBI, de la recaudación impositiva y de los recursos de la seguridad social, de las reservas monetarias atesoradas por el B.C.R.A. En ese favorable contexto cabe agregar, además, el éxito declarado en el logro del objetivo de "inclusión social" procurado a través de la generosa oportunidad ofrecida por ley 25.994, cuyo plan de facilidades de pago reglamentado en una primera etapa por el Dec. 1454/05, permitió a los trabajadores acceder al beneficio jubilatorio en forma simultánea a la cancelación de sus deudas previsionales aún cuando "se encontraban percibiendo algún otro tipo de beneficio previsional compatible con las prestaciones de la ley 24.241", de modo que "gran parte de la clase pasiva (quedara) incorporada a los beneficios de la seguridad social como consecuencia de las posibilidades y beneficios descriptos...", (según expresan los párrafos séptimo a noveno de los considerandos de la Res. A.N.Se.S. D.E. n° 884/06), en paralelo con la existencia de superávit en las cuentas del mismo organismo a ser destinado, junto a otros recursos, al financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) creado por el art. 1° del Dec. 897 del 12.07.07. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. 117580
16.08.07
"GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso "Badaro".

A fin de tornar operativa la movilidad del haber previsional devengada desde el 01.04.95, resulta válido remitir -en lo sustancial- a los lineamientos establecidos por el voto mayoritario del Tribunal en los precedentes "Sirombra, Lucía Elvira" y "Rueda, Roberto" (ambas falladas el 14.09.05), que ordenó calcularlo y liquidarlo semestralmente a partir de enero de 2002, en base al incremento del Promedio de Remuneraciones, pero, a diferencia de lo decidido en los citados casos (en los que se descargó sólo el 70% del aumento de la pauta de ajuste escogida en atención a la emergencia declarada), en autos corresponde aplicar -en su integridad- la variación habida en el Promedio de las Remuneraciones declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, porque la evolución de los parámetros macroeconómicos y sociales no legitiman, al presente, quita alguna. El baremo escogido es -en el actual contexto- por su naturaleza y continuidad, el apropiado para ser considerado el piso mínimo de la mentada movilidad de los haberes regidos por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, pues traslada a los ingresos de pasividad -de manera paralela y simétrica- el incremento del Promedio de las Remuneraciones que sirven de base a la recaudación previsional, lo que permite dar a las mismas un tratamiento semejante al de otros beneficios regidos por leyes especiales (por caso, 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018). En consecuencia, el titular será acreedor de la diferencia (con sus intereses) que surja -para cada período semestral sujeto a reliquidación- del cotejo entre el nuevo haber reajustado con el efectivamente percibido. Vale decir entonces, que la movilidad así dispuesta absorbe los aumentos ya aplicados (en el caso, por tratarse de una prestación

cuyo importe devengado para enero de 2007 ya fue incrementado en un 37,97% -art. 2 Dec. 1199/04; art. 1 Dec. 764/06 y art. 45 ley 26.198-, le resta percibir al actor por la movilidad devengada durante el período en tratamiento, una diferencia acumulativa del 50,38% sobre lo ya abonado para completar la pauta por este pronunciamiento -para ese mes- en el 107,48%). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117580

16.08.07

“GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

Corresponde descartar los argumentos economicistas que el organismo suele oponer al progreso de los reclamos de recomposición del haber previsional, porque el halagüeño panorama presentado por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional -del que aquella depende- priva de sustento a esas argumentaciones (cfr. C.N.A.Civ. y Com. Fed., Sala I, sent. del 18.10.05, “Galeazzi, Carlos c/ E.N. - Ministerio de Defensa”, voto del Dr. Martín Diego Farrell). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117580

16.08.07

“GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

El Alto Tribunal, en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), estimó que a partir del año 2003 se dio en nuestro país un proceso de recuperación económica que se tradujo en aumentos salariales, pero no en un aumento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias, y efectuó diversas consideraciones que fueron comunicadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a fin de que, en un plazo razonable, se adoptaran las medidas a las que se alude en los considerandos, esto es, hacer efectiva la movilidad de las prestaciones jubilatorias. Posteriormente, por el art. 45 de la ley 26.198 (presupuesto para el año 2007), se estableció una movilidad del 13% a partir del 1 de enero de dicho año. Sin embargo, cabe señalar que en esta oportunidad, el Congreso de la Nación sólo se ha expedido fijando la movilidad para el año 2007, omitiendo tratar la correspondiente a los años anteriores. Por ello, a fin de tornar operativo el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia y careciéndose de otras pautas objetivas fuera de las consideradas en el Presupuesto de 2007, el 13% de aumento del monto de los haberes previsionales allí fijado debe ser trasladado a los años que corren entre 2003 y 2006 inclusive, quedando subsumidos dentro de ese porcentaje todos los aumentos que se hubiesen efectuado a la prestación del titular durante el referido período -inclusive el concedido en 2006 con carácter general por Dec. 764/06, puesto que esa normativa no emanó del Congreso de la Nación, tal como lo prescribe el art. 7, inc.2, de la Ley 24.463, con lo cual dicho aumento no se efectuó conforme a derecho, debiéndose elevar el 11% allí acordado al 13% dispuesto ahora por el Congreso-. En consecuencia, corresponde, respecto al período posterior a 1995, acordar un reajuste del haber del accionante, por el período comprendido entre 2003 y 2006, equivalente al 52%, quedando subsumido en dicho porcentual todos los aumentos que se hubiesen acordado al mismo durante ese lapso, debiendo aplicarse, a partir del 1/1/07, el aumento dispuesto por la Ley 26.198. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117580

16.08.07

“GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior a \$ 1.000.- Caso “Badaro”.

Conforme los argumentos vertidos por el voto de la mayoría en autos “García, Norma Concepción” (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 16.08.07), y a fin de tornar operativa la movilidad del haber previsional del peticionante devengada desde el 01.04.95, resulta válido remitir -en lo sustancial- a los lineamientos establecidos por el voto mayoritario del Tribunal en los precedentes “Sirombra, Lucía Elvira” y

“Rueda, Roberto” (ambas falladas el 14.09.05), que ordenó calcularlo y liquidarlo semestralmente a partir de enero de 2002, en base al incremento del Promedio de Remuneraciones, pero, a diferencia de lo decidido en los citados casos (en los que se descargó sólo el 70% del aumento de la pauta de ajuste escogida en atención a la emergencia declarada), en autos corresponde aplicar -en su integridad- la variación habida en el Promedio de las Remuneraciones declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, porque la evolución de los parámetros macroeconómicos y sociales no legitiman, al presente, quita alguna. El baremo escogido es -en el actual contexto- por su naturaleza y continuidad, el apropiado para ser considerado el piso mínimo de la mentada movilidad de los haberes regidos por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, pues traslada a los ingresos de pasividad -de manera paralela y simétrica- el incremento del Promedio de las Remuneraciones que sirven de base a la recaudación previsional, lo que permite dar a las mismas un tratamiento semejante al de otros beneficios regidos por leyes especiales (por caso, 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018). En consecuencia, el titular será acreedor de la diferencia (con sus intereses) que surja -para cada período semestral sujeto a reliquidación- del cotejo entre el nuevo haber reajustado con el efectivamente percibido. Vale decir entonces, que la movilidad así dispuesta absorbe los aumentos ya aplicados (en el caso, por tratarse de una prestación cuyo importe devengado para enero de 2007 ya fue incrementado en un 25,43% -art. 1 Dec. 764/06 y art. 45 ley 26.198-, le resta percibir al actor por la movilidad devengada durante el período en tratamiento, una diferencia acumulativa del 65,41% sobre lo ya abonado para completar la pauta por este pronunciamiento -para ese mes- en el 107,48%). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117621

31.08.07

“VÁZQUEZ, RENÉ ETHEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior a \$ 1.000.- Caso “Badaro”.

El Alto Tribunal, en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), estimó que a partir del año 2003 se dio en nuestro país un proceso de recuperación económica que se tradujo en aumentos salariales, pero no en un aumento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias, y efectuó diversas consideraciones que fueron comunicadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a fin de que, en un plazo razonable, se adoptaran las medidas a las que se alude en los considerandos, esto es, hacer efectiva la movilidad de las prestaciones jubilatorias. Posteriormente, por el art. 45 de la ley 26.198 (presupuesto para el año 2007), se estableció una movilidad del 13% a partir del 1 de enero de dicho año. Sin embargo, cabe señalar que en esta oportunidad, el Congreso de la Nación sólo se ha expedido fijando la movilidad para el año 2007, omitiendo tratar la correspondiente a los años anteriores. Por ello, a fin de tornar operativo el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia y careciéndose de otras pautas objetivas fuera de las consideradas en el Presupuesto de 2007, el 13% de aumento del monto de los haberes provisionales allí fijado debe ser trasladado a los años que corren entre 2003 y 2006 inclusive, quedando subsumidos dentro de ese porcentaje todos los aumentos que se hubiesen efectuado a la prestación del titular durante el referido período -inclusive el concedido en 2006 con carácter general por Dec. 764/06, puesto que esa normativa no emanó del Congreso de la Nación, tal como lo prescribe el art. 7, inc.2, de la Ley 24.463, con lo cual dicho aumento no se efectuó conforme a derecho, debiéndose elevar el 11% allí acordado al 13% dispuesto ahora por el Congreso-. En consecuencia, corresponde, respecto al período posterior a 1995, acordar un reajuste del haber del accionante, por el período comprendido entre 2003 y 2006, equivalente al 52%, quedando subsumido en dicho porcentual todos los aumentos que se hubiesen acordado al mismo durante ese lapso, debiendo aplicarse, a partir del 1/1/07, el aumento dispuesto por la Ley 26.198. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117621

31.08.07

“VÁZQUEZ, RENÉ ETHEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Período posterior al 01.04.95. Haber superior al mínimo e inferior a \$ 1.000. Porcentual distinto al fallo “García”. Caso “Badaro”.

Conforme los argumentos vertidos por el voto de la mayoría en autos “García,

Norma Concepción” (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 16.08.07), y a fin de tornar operativa la movilidad del haber previsional del peticionante devengada desde el 01.04.95, resulta válido remitir -en lo sustancial- a los lineamientos establecidos por el voto mayoritario del Tribunal en los precedentes “Sirombra, Lucía Elvira” y “Rueda, Roberto” (ambas falladas el 14.09.05), que ordenó calcularlo y liquidarlo semestralmente a partir de enero de 2002, en base al incremento del Promedio de Remuneraciones, pero, a diferencia de lo decidido en los citados casos (en los que se descargó sólo el 70% del aumento de la pauta de ajuste escogida en atención a la emergencia declarada), en autos corresponde aplicar -en su integridad- la variación habida en el Promedio de las Remuneraciones declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, porque la evolución de los parámetros macroeconómicos y sociales no legitiman, al presente, quita alguna. El baremo escogido es -en el actual contexto- por su naturaleza y continuidad, el apropiado para ser considerado el piso mínimo de la mentada movilidad de los haberes regidos por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, pues traslada a los ingresos de pasividad -de manera paralela y simétrica- el incremento del Promedio de las Remuneraciones que sirven de base a la recaudación previsional, lo que permite dar a las mismas un tratamiento semejante al de otros beneficios regidos por leyes especiales (por caso, 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018). En consecuencia, el titular será acreedor de la diferencia (con sus intereses) que surja -para cada período semestral sujeto a reliquidación- del cotejo entre el nuevo haber reajustado con el efectivamente percibido. Vale decir entonces, que la movilidad así dispuesta absorbe los aumentos ya aplicados (en el caso, por tratarse de una prestación cuyo importe devengado para enero de 2007 ya fue incrementado en un 91,81% -en virtud de los Decretos 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05, 764/06 y art. 45 ley 26.198-, le resta percibir al actor por la movilidad devengada durante el período en tratamiento, una diferencia acumulativa del 8,16% sobre lo ya abonado para completar la pauta por este pronunciamiento -para ese mes- en el 107,48%).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117831

12.09.07

“SEANES, CONSUELO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.)

Movilidad posterior a marzo de 1995. Caso “Badaro (II)”.

Respecto a las pautas de movilidad a tener en cuenta para el período posterior al 01.04.95, el Tribunal se expidió en autos “González, Elisa Lucinda” (sent. del 16.06.05), “Godoy, Santiago Loreto” (sent. del 29.03.07) y “Barrios, Luis Alberto” (sent. del 12.07.07) -entre otros-, reconociendo el derecho a que los haberes de los beneficiarios se reajustaran conforme los parámetros del AMPO por el período abril '95 / septiembre '96 (26,84%), y a partir del año 2002 -fecha en que se registraron movimientos apreciables en el incremento del costo de vida y en el índice general de las remuneraciones-, en función del Índice de Salarios – Nivel General (INDEC). Respecto al último período, esto es desde el 01 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, atento lo resuelto por la C.S.J.N. en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 26.11.07), la prestación deberá ajustarse según las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC. Asimismo, también de conformidad al referido caso “Badaro (II)”, corresponde ordenar al organismo que abone el nuevo haber y las retroactividades que surjan de la liquidación en el plazo previsto en el art. 2 de la ley 26.153, estas últimas con más los intereses a la tasa pasiva según el precedente “Spitale, Josefa Elida” (Fallos 327:3721); autorizándose la deducción de las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del Dec. 764/06.

C.F.S.S., Sala I

sent. 123072

29.11.07

“GUTIÉRREZ, MARÍA LUCÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(Ch.-M.-D.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Sabido es que, como proyección sustitutiva de la remuneración que el agente percibía en actividad, el haber de pasividad debe guardar una razonable proporcionalidad con esa remuneración. Ello a tenor de lo preceptuado por los arts. 14 bis (régimen de movilidad jubilatoria), 16 (principio de igualdad ante la ley) y 17 (derecho de propiedad) de nuestra Carta Magna. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Una vez concedida la prestación, y ya en curso de pago, debe mantenerse la relación entre el monto del beneficio y la remuneración que percibía el actor estando en actividad. Ello a efecto de tornar operativa la tutela constitucional contenida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

El Supremo Tribunal, al pronunciarse en la causa “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05), dispuso en forma categórica la necesidad de ratificar los principios básicos de interpretación referidos a la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones previsionales, rechazando toda inteligencia restrictiva de las obligaciones que impone al Estado de otorgar jubilaciones y pensiones móviles según lo establece el art. 14 bis de nuestra Carta Magna. Así planteada la cuestión, se impone la necesidad de actualizar las remuneraciones históricas de quienes se jubilaron después del 31.03.91, bajo el amparo de la ley 24.241. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Las disposiciones del art. 10 de la ley 23.928 y ley 25.561 no resultan de aplicación a las pautas que en materia de actualización salarial fijan las normas previsionales (cfr. C.S.J.N., “Sánchez, María del Carmen”, sent. del 17.05.05), sin que pueda encontrarse motivo valedero para privar de la tutela que otorga el art. 14 bis de la C.N. a aquellos que obtuvieron su prestación previsional bajo la ley 24.241. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

La ley 24.241 estableció que para la determinación de la prestación compensatoria (PC) los haberes percibidos debían ser actualizados mediante índice salarial de carácter oficial -art. 24, inc. a)-, concepto también aplicable a la prestación adicional por permanencia (PAP) -art. 30, inc. b)-. En virtud de ello, resulta procedente la aplicación del índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado- sin limitación temporal para actualizar las remuneraciones del titular hasta la fecha en que se produjo el cese de actividades. Para el supuesto de no haberse continuado con la elaboración del referido índice, el organismo deberá adoptar las medidas pertinentes para la rápida elaboración del mismo, el cual -como señalara el Dr. Fernández en su voto en autos “Zabala, Hugo Raúl” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 07.11.05)- no podrá diferir de los que por similar concepto, emita el I.N.D.E.C. u otro organismo oficial que lo reemplace en la determinación de los índices oficiales. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

En el fallo “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06) el Tribunal Cimero ex-

presó que el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad imperante, mediante una reglamentación que importe la aplicación práctica del mandato constitucional. También ha señalado que los cambios en las circunstancias pueden hacer que una solución legal, correcta en un comienzo, se torne irrazonable y que cuando ello sucede, el cumplimiento de la garantía en juego atañe también a los restantes poderes públicos que debían, dentro de la órbita de sus competencias, hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto dentro del marco que exigen las diversas formas de justicia (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.09.04, “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A.”). Dicha atribución -continúa diciendo refiriendo el Superior- más que una facultad es un deber que le compete al legislador, fijando el contenido concreto de la garantía constitucional en juego, y teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales (ver art. 75, incs. 19 y 23 C.N.). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Es función del Magistrado aplicar la ley, pero sin olvidar ni por un instante los estrictos términos de nuestra Carta Magna. En sintonía con tal línea de pensamiento, ha expresado el Superior Tribunal que el objetivo preeminente de la Constitución, según reza su Preámbulo, es lograr el bienestar general, lo cual significa decir la justicia en su más alta expresión, esto es, la justicia social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. Las leyes pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido, consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, es decir, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad (Fallos 289:430). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

El art. 45 de la ley 26.198 (presupuesto para el año 2007) estableció una movilidad del 13% para las prestaciones a cargo del régimen previsional público del S.I.J.P., pero nada expresa con relación a los años anteriores, durante los cuales el Congreso omitió referir el porcentaje de movilidad que debía aplicarse sobre los haberes de pasividad. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Teniendo presente que nuestro Máximo Tribunal, en el caso “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), expresó que desde el año 2003 se consolidó en nuestro país un proceso de recuperación de las variables salariales que no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias, toda vez que las mejoras de pasividad -dispuesta a través de diferentes decretos- sólo beneficiaron a las prestaciones mínimas pero sin tener incidencia en los hechos alguna en haberes superiores a \$ 1.000, resulta necesario adoptar un mecanismo que en los hechos importe tornar operativa la garantía de movilidad que consagra nuestra Constitución Nacional a través de su art. 14 bis. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Si apartarse -por razones de jerarquía institucional- de los términos de la doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), corresponde disponer la proyección de la movilidad del 13% dispuesta por el art. 45 de la ley 26.198 para los años 2003, 2004 y 2005, llegando a un ajuste del 39% para dicho período. En dicho ajuste quedarán subsumidos todos los aumentos que pudiera haber tenido el titular de autos en ese tiempo. Para el año 2006, dado que en virtud del Dec. 764/06 se incrementaron en un 11% las prestaciones del S.I.J.P., logrando de ese modo quebrar la inamovilidad a que fueron sometidos los haberes de pasividad, resulta prudente ceñirse al referido porcentaje. Por último, para el año en curso, deberá estarse a los términos de la referida ley 26.198. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

En el precedente “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05) la C.S.J.N. dispuso que la ley 18.037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de la sanción de la ley 23.982, y sólo fue derogada por la ley 24.241 de creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con el límite fijado en su art. 160 que mantenía las fórmulas de movilidad de las prestaciones reguladas por las leyes anteriores. El referido ajuste por movilidad no constituye indexación ni violenta la referida ley 23.982, puntualiza el Alto Tribunal, pues así como “las remuneraciones de los activos no fueron alcanzadas por la ley de convertibilidad y registraron, en general, variables significativas después de su sanción” no existe fundamento válido para retacear los ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en cumplimiento de la manda contenida en el art. 14 bis de la C.N. (cfr. Consid. 7º). (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

No se advierte impedimento jurídico alguno para que la doctrina emergente del precedente “Sánchez, María del Carmen” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05) no se proyecte más allá del 30.03.95 con respecto a la actualización de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones a los fines previstos en los arts. 24 inc. a) y 30 inc. b) de la ley 24.241, toda vez que la posición contraria se traduciría en un diferente tratamiento para los afiliados según hubieran cesado antes o después de la fecha indicada (C.N. arts. 16 y 75 inc. 23). (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Decidida la proyección de la doctrina emergente del precedente “Sánchez, María del Carmen” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05) más allá del 30.03.95, corresponde disponer para la determinación de la PC y la PAP la aplicación analógica -y ante el vacío normativo existente- a partir del 01.04.91 y hasta la fecha de cese del titular, el mecanismo de actualización contemplado en el art. 49 de la ley 18.037 en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones, y a partir del momento en que dejó de elaborarse ese índice, se aplicará en su reemplazo el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Para así concluir ha de valorarse el hecho que aún persiste la prohibición de indexar mediante precios, actualización monetaria o cualquier otra forma de repotenciación (cfr. ley 25.561, art. 4), de modo que en orden a lo dispuesto por los arts. 24 inc. a) y 30 inc. b) de la ley 24.241, y en línea con el precedente antes citado, sólo la aplicación de mecanismos que reflejen la variación del promedio de las re-

muneraciones sujetas a aportes y contribuciones al sistema previsional puede considerarse no violatoria de la referida prohibición y compatible con los esfuerzos de las autoridades del Gobierno Nacional en procura de preservar la estabilidad de la economía. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Caso “Badaro”. Ley 26.198.

Respecto al reajuste posterior a la fecha de cese, corresponde aplicar al haber previsional del titular una movilidad equivalente a la primera variación del 10% que se registre en el RIPTe a partir de la fecha indicada, y así sucesivamente hasta tanto el Congreso de la Nación determine el “contenido concreto” de la garantía de movilidad que consagra el art. 14 bis. de la C.N. (cfr. C.S.J.N., “Sánchez, María del Carmen”, sent. del 17.05.05). Desde la fecha de la liquidación definitiva, la A.N.Se.S. dispondrá el reajuste dentro de los 60 días de producida variación mínima del 10% en el índice indicado. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120992

03.05.07

“SAHADE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(D.-F.-H.)

Ley 24.241. Período posterior al 01.04.95. Haber superior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

Conforme los argumentos vertidos por el voto de la mayoría en autos “García, Norma Concepción” (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 16.08.07), y a fin de tornar operativa la movilidad del haber previsional del peticionante devengada desde el 01.04.95, resulta válido remitir -en lo sustancial- a los lineamientos establecidos por el voto mayoritario del Tribunal en los precedentes “Sirombra, Lucía Elvira” y “Rueda, Roberto” (ambas falladas el 14.09.05), que ordenó calcularlo y liquidarlo semestralmente a partir de enero de 2002, en base al incremento del Promedio de Remuneraciones, pero, a diferencia de lo decidido en los citados casos (en los que se descargó sólo el 70% del aumento de la pauta de ajuste escogida en atención a la emergencia declarada), en autos corresponde aplicar -en su integridad- la variación habida en el Promedio de las Remuneraciones declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, porque la evolución de los parámetros macroeconómicos y sociales no legitiman, al presente, quita alguna. El baremo escogido es -en el actual contexto- por su naturaleza y continuidad, el apropiado para ser considerado el piso mínimo de la mentada movilidad de los haberes regidos por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, pues traslada a los ingresos de pasividad -de manera paralela y simétrica- el incremento del Promedio de las Remuneraciones que sirven de base a la recaudación previsional, lo que permite dar a las mismas un tratamiento semejante al de otros beneficios regidos por leyes especiales (por caso, 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018). En consecuencia, el titular -en el caso, obtuvo la prestación previsional con arreglo a la ley 24.241- será acreedor de la diferencia (con sus intereses) que surja -para cada período semestral sujeto a reliquidación- del cotejo entre el nuevo haber reajustado con el efectivamente percibido. Vale decir entonces, que la movilidad así dispuesta absorbe los aumentos ya aplicados (en el caso, por tratarse de una prestación cuyo importe devengado para enero de 2007 ya fue incrementado en un 25,43% -art. 1 del Dec. 764/06 y art. 45 ley 26.198-, le resta percibir al actor por la movilidad devengada durante el período en tratamiento, una diferencia acumulativa del 65,41% sobre lo ya abonado para completar la pauta por este pronunciamiento -para ese mes- en el 107,48%). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 118067

12.10.07

“RUTOWICZ, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Ley 24.241. Período posterior al 01.04.95. Haber superior a \$ 1.000. Caso “Badaro”.

El Alto Tribunal, en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), estimó que a partir del año 2003 se dio en nuestro país un proceso de recuperación

económica que se tradujo en aumentos salariales, pero no en un aumento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias, y efectuó diversas consideraciones que fueron comunicadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a fin de que, en un plazo razonable, se adoptaran las medidas a las que se alude en los considerandos, esto es, hacer efectiva la movilidad de las prestaciones jubilatorias. Posteriormente, por el art. 45 de la ley 26.198 (presupuesto para el año 2007), se estableció una movilidad del 13% a partir del 1 de enero de dicho año. Sin embargo, cabe señalar que en esta oportunidad, el Congreso de la Nación sólo se ha expedido fijando la movilidad para el año 2007, omitiendo tratar la correspondiente a los años anteriores. Por ello, a fin de tornar operativo el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia y careciéndose de otras pautas objetivas fuera de las consideradas en el Presupuesto de 2007, el 13% de aumento del monto de los haberes provisionales allí fijado debe ser trasladado a los años que corren entre 2003 y 2006 inclusive, quedando subsumidos dentro de ese porcentaje todos los aumentos que se hubiesen efectuado a la prestación del titular durante el referido período -inclusive el concedido en 2006 con carácter general por Dec. 764/06, puesto que esa normativa no emanó del Congreso de la Nación, tal como lo prescribe el art. 7, inc. 2, de la Ley 24.463, con lo cual dicho aumento no se efectuó conforme a derecho, debiéndose elevar el 11% allí acordado al 13% dispuesto ahora por el Congreso-. En consecuencia, corresponde, respecto al período posterior a 1995, acordar un reajuste del haber del accionante, por el período comprendido entre 2003 y 2006, equivalente al 52%, quedando subsumido en dicho porcentual todos los aumentos que se hubiesen acordado al mismo durante ese lapso, debiendo aplicarse, a partir del 1/1/07, el aumento dispuesto por la Ley 26.198. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 118067

12.10.07

“RUTOWICZ, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Prestación Compensatoria (PC). Servicios. Cómputo. Ley 24.241, art. 24. Inconstitucionalidad.

Corresponde hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad del tope de 35 años a computar para el cálculo de la P.C. dispuesto por el art. 24, inc. a) de la ley 24.241, en la medida que priva de efectos -sin razón alguna que lo justifique- y convierte en un impuesto al trabajo estéril e ilegal, a los aportes realizados por servicios prestados con anterioridad al 14.07.94, fecha de entrada en vigencia del S.I.J.P., más allá de esa criba -en el caso, de seis años- por los que no se le reconoce al afiliado prestación alguna. El no reconocimiento del excedente apuntado conspira contra el carácter integral e irrenunciable que la C.N. reconoce a los derechos de la seguridad social, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad resguardados en los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Carta Magna, por cuanto el beneficiario es acreedor al importe de la prestación sin mengua alguna.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115477

26.12.06

“GIACHINO, LUIS ARTURO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.)

Casos “Sánchez” y “Badaro”.

El Alto Tribunal, en el pronunciamiento del 17.05.05 in re “Sánchez, María del Carmen” y su aclaratoria del 28.07.05, reivindicó la vigencia del principio de movilidad de los haberes previsionales con posterioridad al 01.04.91, imprescindible a fin de concretar la garantía de integralidad e irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social amparados por el art. 14 bis. de la C.N. En atención a ello, corresponde analizar las remuneraciones a computar para el cálculo del haber inicial de la Prestación Compensatoria y de la Prestación Adicional por Permanencia, como así también la de la movilidad de aquéllas desde el otorgamiento en adelante, respecto de los siguientes períodos: 1) hasta el 31.03.95, adecuando la solución a la postura asumida por la C.S.J.N. a partir del precedente “Sánchez” antes invocado, por el cual el reclamo por movilidad habrá de ser atendido mediante la aplicación del índice general de las remuneraciones; y 2) desde el 01.04.95 -sin perjuicio del criterio sentado por la Sala a partir de las sentencias “Sirombra, Lucila Elvira” y “Rueda, Roberto” (ambas del 14.09.05) y de dejar a salvo la opinión del suscripto-, debe declararse expresamente la vigencia del derecho a la movilidad de las prestaciones previsionales con el fundamento, alcances y condiciones indicadas por el Supremo Tribunal in re “Badaro, Adolfo Valen-

tín” (sent. del 08.08.06), en el que se dispuso poner en “conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido por la Ley Fundamental” (ver cons. 19), no juzgando apropiado “que el Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa, por la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer” (ver cons. 16); agregando “que la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema de dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la C.N. Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal -Fallos 308:1848-” (ver cons. 18).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115477

26.12.06

“GIACHINO, LUIS ARTURO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(F.-P.L.)

Sentencia. Movilidad posterior. Nuevo reclamo. Cosa juzgada.

El alcance de la sentencia que hizo lugar al reclamo del titular, y ordenó el reajuste del haber incluso para el período posterior al juzgado y “mientras rija el actual sistema”, ha de interpretarse que refiere a la vigencia del régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia establecido por la ley 18.037. Desde esa perspectiva, cabe tomar como límite temporal de la movilidad ordenada en el fallo la vigencia de la normativa citada, que fue derogada expresamente con la sanción de la ley 24.241, vigente a partir del 15.07.94. En consecuencia, ha de concluirse que la pretensión de establecer la movilidad del haber con posterioridad al hito temporal antes señalado (15.07.94), no se encuentra alcanzado por los efectos de la cosa juzgada. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)

C.F.S.S., Sala III

sent. 116011

01.03.07

“ULLUA, ANDRONICO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(P.L.-F.-L.)

Servicios prestados antes de los 18 años de edad. Aportes. Cómputo.

Si al inicio de sus actividades el titular no contaba con 18 años de edad, pero no obstante ello, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes a ese entonces (mayo de 1946), le fueron retenidos por el empleador, e ingresados al sistema previsional, los aportes correspondientes -circunstancia reconocida por el organismo en sus verificaciones previas al otorgamiento de la prestación-, le asiste el derecho al afiliado al cómputo de los mismos. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la A.N.Se.S. dirigido a excluir esos servicios para el cálculo de las prestaciones fundado en la edad mínima de aportación obligatoria establecida por el art. 2 de la ley 24.241, disposición a la que se pretende adjudicarle un efecto retroactivo que no encuentra sustento legal alguno, y que resulta violatoria del art. 3 del Código Civil.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116437

18.04.07

“ROSITO, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(F.-L.-P.L.)

Sumas retroactivas. Consolidación. Ley 25.344, art. 13.

De conformidad con el art. 13 de la ley 25.344, las obligaciones previsionales originadas en el régimen general sólo serán objeto de consolidación en los casos que el beneficio hubiera sido otorgado antes de la fecha de entrada en vigencia del S.I.J.P. establecido por la ley 24.241. En consecuencia, la prestación otorgada en fecha posterior queda fuera de sus alcances.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115986

01.03.07

“CACERES, ROSALÍA FELISA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Topes. Ley 24.463, art. 9, ap. 2. Inaplicabilidad.

Si tanto en la primigenia sentencia por la cual se reconoció el derecho del titular al reajuste del haber como en la dictada a raíz de la demanda promovida por aquél para que se lo eximiera del tope previsto por el art. 55 de la ley 18.037, ya se incluyó un descuento permanente sobre el haber reajustado del 10%, y atento que no obstante no hallarse mencionado expresamente en los pronunciamientos, la mentada reducción se fundó en el principio de solidaridad social y la suma retenida significó una “contribución al Sistema Público de Reparto, para atender a su financiamiento ...” a expensas del actor, ha de concluirse que, en esas condiciones, la adición de una nueva quita a la ya indicada -esta vez conforme lo dispuesto por el art. 9, ap. 2 de la ley 24.463, modificado por el art. 25 de la ley 25.239-, conduce a una reducción que supera holgadamente el margen jurisprudencialmente admitido como confiscatorio, esto es, el 15%. En consecuencia, en el caso corresponde declarar inconstitucional, y por ello inaplicable, el tope del referido art. 9, ap. 2, de la ley 24.463.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94013

09.11.06

“BENITES LASTRA, RODOLFO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

REDUCCIÓN DEL HABER

Confiscatoriedad. Ley 25.453, art. 10. Ley 24.463, art. 9.

Corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que rechazó la solicitud del titular de que se ordene a la A.N.Se.S. abstenerse de practicar reducciones sobre su haber previsional por aplicación de la escala establecida en el art. 9 de la ley 24.463, invocando para ello el criterio sustentado por la C.S.J.N. en el sentido que incumbe al legislador evaluar -en cada oportunidad- las variables económico sociales, y determinar en base a ellas que metodología corresponde adoptar para asegurar el equilibrio entre los diversos beneficios acordados, justificándose la reducción en los casos de beneficio general o razones de orden público, sin que ello implique violar la garantía constitucional de propiedad (art. 17 C.N.), salvo que la reducción resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada (Fallos 192:359; 258:14; 306:615; 295:674; 300:616 entre otros). En esa línea de pensamiento, cabe recordar que el Alto Tribunal al expedirse en “Chocobar, Sixto” (sent. del 27.12.96) sostuvo que “... por el lado que atañe a los derechos adquiridos ..., esta Corte ha sabido reconocer que si bien ninguna ley podría hacer caducar beneficios jubilatorios concedidos, el alcance de dicha protección no alcanza en igual grado a la cuantía de los haberes, pues éstos pueden limitarse en lo sucesivo de acuerdo con exigencias superiores de una política salvadora de su propia subsistencia, de su desenvolvimiento regular o por razones de interés colectivo que hacen al bienestar general, siempre que no resulten sustancial y arbitrariamente alterados” (cfr. fallo referido, consid. 39). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 93967

08.11.06

“CULOTTA, JORGE DANIEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(P.L.-F.-L.)

Confiscatoriedad. Ley 25.453, art. 10. Ley 24.463, art. 9.

Si la liquidación practicada por el organismo en cumplimiento de la sentencia emanada del Tribunal incluyó un descuento permanente sobre el haber reajustado, y no obstante no encontrarse expresamente aclarado en el fallo, va de suyo que dicha reducción se funda en el principio de solidaridad social y que la suma retenida significa una “contribución al Sistema Público de Reparto, para atender a su financiamiento...” a expensas del actor, la adición de una nueva quita a la ya indicada -también sustentada en el principio solidario-, esta vez dispuesta por el art. 9, ap. 2 de la ley 24.463 modificado por el art. 25 de la ley 25.239, conduce a una reducción del haber que supera holgadamente el margen jurisprudencialmente admitido como no confiscatorio (15%). En consecuencia, corresponde declarar inconstitucional, y por ello inaplicable -en el caso- el referido art. 9 ap. 2 de la ley 24.463. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 93967

08.11.06

“CULOTTA, JORGE DANIEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”
(P.L.-F.-L.)

Ley 24.463, art. 9. Confiscatoriedad.

El art. 9, inc. 2 de la ley 24.463 -en su nueva redacción conforme art. 25 de la ley 25.239- establece que la reducción del haber se calcula sobre el excedente. Por ello, representando dicho descuento -en el caso- aproximadamente el 11,34% del haber que percibe el accionante, en modo alguno puede sostenerse que el mismo resulte confiscatorio conforme los parámetros fijados por la C.S.J.N. in re “Actis Caporale” (Fallos 323:4216).

C.F.S.S., Sala I

sent. Int. 69012

29.03.07

“SOLDANI, VÍCTOR LUIS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos”
(Ch.-D.-M.)

REGÍMENES ESPECIALES

Poder Ejecutivo. “Gastos protocolares”. Dec. 838/94.

El rubro “gastos protocolares” regulado por el Dec. 838/94 no integra la remuneración, habida cuenta que constituye un adicional que compensa gastos propios del cumplimiento de la función asignada conforme surge del art. 2 del citado Decreto, razón por la cual no corresponde se los incluya como base de cálculo para el reajuste del haber previsional (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 31.05.05, “Bertran, Rufino José y otro”).

C.F.S.S., Sala III

sent. 114720

31.10.06

“POMAR, ISABEL SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(F.-P.L.-L.)

JUBILACIÓN ANTICIPADA

Ley 25.944. Res. A.N.Se.S. 884/06. Medida cautelar.

El Alto Tribunal ha sostenido que “dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión” (Fallos 316:1833). En consecuencia, corresponde revocar lo resuelto por el “a quo” que declaró la inaplicabilidad de lo dispuesto por el art. 4 de la Res. A.N.Se.S. 884/06 para el otorgamiento de la jubilación anticipada de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.994, puesto que no se encuentra suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho invocado. Ello así, máxime si se tiene en cuenta que la C.S.J.N. ha establecido que medidas como la requerida no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan (Fallos 313:1420), criterio que ha hecho suyo la Sala en autos “Micio, Jerónimo Ramón”, “Sigal, Humberto César”, “Andrés, Blanca Nueves y otro”, “Insfran, Ángel Custodio y otro”, entre otros.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69103

23.04.07

“RÍOS, JUSTA c/ A.N.Se.S. s/ Incidentes”
(M.-Ch.-D.)

Ley 25.944. Res. A.N.Se.S. 884/06. Medida cautelar.

Si el organismo se excedió o no en sus facultades reglamentarias al dictar la Res. A.N.Se.S. 884/06, debe ser analizado con extremo cuidado y siempre teniendo presente lo prescrito por el art. 6, párrafos 2do. y 3ero. de la ley 25.994, y lo es-

tablecido por la C.S.J.N. en cuanto a que los jueces deben proceder con extrema cautela para llegar al desconocimiento de los beneficios de la Seguridad Social por tratarse de prestaciones de carácter alimentario (cfr. “Álvarez, Roberto Germán”, sent. del 27.10.87; “Cañete, Angélica”, sent. del 13.10.90; Vergara, Berta Candelaria, sent. del 04.09.90). También el Cívero Tribunal ha expresado que, en la inteligencia que cabe asignar a las normas de la seguridad social, el puro rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen judicialmente los fines que la inspiran, razón por la cual el resultado al que llega la interpretación que se proponga debe merecer una cuidadosa consideración (Fallos 316:2404; 323:2082, entre otros). Por ello, y sin perjuicio que en alguna oportunidad la mayoría del Tribunal haya sostenido una diferente opinión en causas análogas, corresponde confirmar la resolución del “a quo” que tuvo por acreditados los requisitos del art. 230 del C.P.C.C. e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora -en el caso, beneficiaria de una pensión mínima- tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 2, 3 y conc. del Dec. 1451/06, 4, 5 y conc. de la Res. A.N.Se.S. 884/06 y de cualquier otra norma que le impida obtener su jubilación en virtud de la ley 25.994, tal como lo hubiera podido hacer antes del 23.10.06. (Del voto de la Dra. Dorado y del Dr. Herrero. El Dr. Fernández se remite a los argumentos de su voto en la causa “Olivieri, Carmen Esther”, sent. del 12.04.07).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65298

14.06.07

“GUTIÉRREZ, LEONTINA MARTA c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Incidente”
(D.-H.-F.)

Ley 25.944. Res. A.N.Se.S. 884/06. Medida cautelar.

La jurisprudencia ha señalado que las medidas de no innovar o innovativas sólo pueden ser decretadas en supuestos excepcionales pues, de lo contrario, podría violentarse el derecho de defensa en juicio del afectado (cfr. C.F.S.S., Sala de FERIA, “Gallastegui, Eleodoro”, sent. del 08.01.00), y que aún cuando para apreciar la verosimilitud del derecho debe procederse con amplitud de criterio, la posibilidad de su existencia se juzga atendiendo a las particularidades de cada caso y al fundamento de la acción que se promueve (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 03.03.91, L.L.1981-337). En consecuencia, teniendo en cuenta que en el caso no se encuentra acreditado el “fumus bonis iuris” dada la aparente razonabilidad de las sucesivas normas que limitan el acceso al beneficio perseguido en la acción principal, y que no habría verosimilitud si para el acogimiento de la pretensión de fondo es menester declarar la inconstitucionalidad de los preceptos legales que ataca el demandante (Fallos 303:626, cit. en “Medidas Cautelares” de Eduardo N. de Lazzari, pág. 25), corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión cautelar dirigida a obtener la suspensión de la vigencia del Dec. 1451/06 y la Res. A.N.Se.S. 884/06 en tanto dispone que las personas que perciban una prestación de naturaleza previsional sólo adquieren el derecho al cobro de la jubilación instituida por la ley 25.994 a partir de la cancelación total de la deuda reconocida. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia)

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64783

12.04.07

“OLIVERI, CARMEN ESTHER c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Incidente”
(F.-D.-H.)

Ley 25.944. Res. A.N.Se.S. 884/06. Medida cautelar.

Si bien se ha sostenido que una medida cautelar sólo puede ser decretada en supuestos excepcionales y con criterio restrictivo pues, de lo contrario, podría violentarse el derecho de defensa en juicio (cfr. C.F.S.S., Sala de FERIA, sent. del 28.01.00, “Gallastegui, Eleodoro y otros c/ E.N.”), frente a un reclamo por el cual la titular -en el caso, beneficiaria de una pensión que asciende a \$ 500- pretende acogerse al beneficio que estableció la ley 25.994 al introducir en el sistema previsional argentino la denominada “Jubilación Anticipada”, un criterio de prudencia obliga a reconsiderar aquella posición que parte de una base que reposa su aplicación en una presunción legal, pero que en manera alguna inhibe la ponderación judicial. Ello así, máxime cuando lo que es objeto de controversia no es la bondad de la norma, sino si ha existido un ejercicio razonable de la facultad delegada por el órgano delegado en una materia de innegable carácter alimentario y, por tal, vital para la manutención de la peticionante. En consecuencia, ante esa colisión de valores -uno de los cuales roza la integridad del goce de una facultad

legal que se establece en pro de salvaguardar una subsistencia digna-, ha de concluirse que se encuentra sumariamente justificado el derecho que se invoca, y hacer lugar a la medida innovativa solicitada, ordenando al organismo abstenerse de aplicar la Res. A.N.Se.S. 884/06, así como cualquier otra norma que cercene el derecho de la actora a obtener su jubilación en el marco de la ley 25.944, conforme la situación legal existente con anterioridad al día 23.10.06. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 64783
12.04.07

“OLIVERI, CARMEN ESTHER c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Incidente”
(F.-D.-H.)

Ley 25.944. Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Acción de amparo.

No obstante que es criterio reiterado de la Sala que no corresponde el rechazo “in limine” de las acciones de amparo (cfr. C.F.S.S., Sala I, “Mignaberrigaray, María E.”), ello es a condición de que su improcedencia no resulte manifiesta. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que rechazó la acción de amparo iniciada con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 del Dec. 1451/06 y de la Res. A.N.Se.S. 884/06 y sus normas reglamentarias y complementarias para obtener el acceso al beneficio establecido por la ley 25.994.

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 69254
16.05.07

“PAOLETTI, LUISA c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Amparos y sumarísimos”
(Ch.-M.-D.)

Ley 25.944. Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Acción de amparo.

El art. 2, inc. d) de la ley 16.986 actúa como valladar a la pretensión del amparista, toda vez que no ha perdido vigencia con la reforma constitucional de 1994, pues si la procedencia del amparo queda supeditada a la existencia de conductas arbitrarias o de ilegalidad manifiesta, la vía de excepción no queda habilitada cuando se requiere de un mayor debate y prueba, siendo deber de los jueces extremar la cautela a fin de que no se decida por la vía sumarísima del amparo aquello que deba resolverse por otros medios procesales (cfr. Morello y Vallefin, “El amparo. Régimen procesal”, pág. 30).

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 69254
16.05.07

“PAOLETTI, LUISA c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Amparos y sumarísimos”
(Ch.-M.-D.)

Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Acción de amparo.

El amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en la que, por carencias de otras vías aptas, pelagra la salvaguardia de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva, y que resulta del acto u omisión de autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de amplio debate o prueba (cfr. C.S.J.N., sent. del 19/03/87, “Vila, Juan Diego”). De modo que, si bien el art. 43 de la C.N. introdujo modificaciones sustanciales a este régimen, de ninguna manera lo ha transformado en un proceso ordinario, por lo que la acción intentada, de naturaleza expedita y rápida, mantiene su carácter subsidiario, no supletorio de otras vías; es decir que procede cuando no existe otro medio judicial más idóneo.

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 69254
16.05.07

“PAOLETTI, LUISA c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Amparos y sumarísimos”
(Ch.-M.-D.)

Res. A.N.Se.S. 884/06. Planteo de inconstitucionalidad. Acción de amparo.

No es factible la utilización de la vía del amparo, si es que no se alega y funda específicamente un daño concreto y grave, que la arbitrariedad invocada surja de tal modo que el juzgador pueda captarla a simple vista, como lo prescribe el art. 1 de la ley 16.986, y que la ilegalidad del acto lesivo se evidencie en forma notoria; siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 09.12.97, “Servicios Médicos Sarmiento S.A. c/ E.N.”; C.F.S.S., Sala I, sent. del 28.02.05, “Barreyro, Elva Pilar”; ídem, sent. del 26.05.03, “Fasce, Ana María”; ídem, sent. del 01.10.02, “Heligon, Jacoba Petrona y otros”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69254

16.05.07

“PAOLETTI, LUISA c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y otros/Amparos y sumarísimos”

(Ch.-M.-D.)

Trabajadores autónomos. Res. A.N.Se.S. 884/06. Medida cautelar.

Es principio uniformemente aceptado que los jueces deben extremar la prudencia en el otorgamiento de medidas que configuren un anticipo de jurisdicción favorable acerca del fallo final de la causa, lo que exige examinar con mayor atención los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos 316:1833). Ello resulta particularmente aplicable cuando el objeto de la medida cautelar coincide con aquél que se persigue mediante una acción de amparo, cuya celeridad excluye -en principio- la configuración del peligro en la demora. En consecuencia, corresponde confirmar el rechazo de la medida cautelar -prohibición de innovar- dirigida contra la Res. A.N.Se.S. 884/06 (en cuanto dispone que “las personas que estuvieren percibiendo una pensión sólo adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida”), por la cual el peticionante pretendía el restablecimiento de la situación legal y la remoción de todos los obstáculos y normas que cercenen su derecho a obtener su jubilación en los términos de la ley 25.994.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95091

01.03.07

“GARCÍA, LUISA ELENA c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros/Incidente”

(F.-L.-P.L.)

JUBILACIÓN ORDINARIA

Fecha de cese. Requisitos. Ley aplicable.

Resulta improcedente la pretensión de que se aplique la ley 18.037, si el peticionante no cumplió los requisitos exigidos por el art. 28 de la citada ley para acceder a la jubilación ordinaria durante su vigencia, que -en virtud de lo dispuesto por el art. 168 y concordantes de la ley 24.241- se extendió hasta el 14.07.94, fecha de entrada en vigencia del S.I.J.P. Ello así porque la mentada disposición exigía la acreditación de 30 años de servicios con aportes y, en el caso de tratarse de un varón, una edad mínima de 60 años. Por ello, si bien el actor al momento del cese acreditaba servicios en exceso (en el caso, más de 43 años y 7 meses) pero a esa fecha sólo contaba con 58 años de edad, de modo que tampoco se verifica el recaudo previsto por el art. 27 de la aludida ley 18.037, no cabe sustraer la cuestión de autos del régimen instituido por el art. 1 de la ley 24.241, aún cuando la mayor parte de la vida laboral del demandante y consiguiente ingreso de aportes y contribuciones, se cumplieron bajo la vigencia de la ley 18.037.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116307

26.03.07

“BARBERIS, ENRIQUE c/ E.N. – A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ

Incapacidad a la fecha de ingreso. Ley 18.037, art. 33.

Habiéndose expedido el Cuerpo Médico Forense en el sentido de que la peticionante se encontraba incapacitada -a los fines previsionales- a la fecha de inicio y cese de la actividad, y habida cuenta que dicho dictamen, atento su calidad y fundamentación científica, constituye prueba suficiente en los términos del art. 477 del C.P.C.C., conforme lo dispuesto por el art. 33 de la ley 18.037 corresponde revocar el pronunciamiento del “a quo” que condenó al organismo a otorgar el beneficio solicitado. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 114796

07.11.06

“SOPLAN, CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez”

(L.-F.-P.L.)

Incapacidad a la fecha de ingreso. Ley 18.037, art. 33.

Ha de ser tenido por válido y determinante de la verdad jurídica objetiva, el informe emanado del Cuerpo Médico Forense que concluyó que la peticionante se encontraba incapacitada, a los fines previsionales, cuando ingresó a su primer empleo con 50 años de edad cumplidos. Ello así, habida cuenta de la seriedad del organismo del que emana, su reconocida imparcialidad y los amplios fundamentos en que se basa, máxime teniendo en cuenta que aquellos no fueron objeto de observación alguna (arts. 472, 473 y 477 del C.P.C.C.). En consecuencia, por aplicación del art. 33 de la ley 18.037, corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia que condenó al organismo a otorgar la prestación solicitada. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 114796

07.11.06

“SOPLAN, CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez”

(L.-F.-P.L.)

Retiro definitivo. Res. Conj. S.A.F.J.P. N° 23/04 – S.S.N. N° 29.796, art. 31.

Competencia.

El fuero de la Seguridad Social es incompetente para entender en una acción por la que se pretende despejar la incertidumbre generada respecto de las obligaciones contractuales y legales emanadas de lo dispuesto por el art. 31 de la Res. Conj. S.A.F.J.P. N° 23/04 – S.S.N. N° 29.796. Ello así, por no tratarse de un reclamo vinculado a la existencia entre un afiliado y la administradora de sus fondos previsionales, sino que la incertidumbre jurídica que se busca despejar tiene como fuente la existencia del contrato de seguro que fija la relación convencional y legal entre la A.F.J.P. y una Compañía de Seguros de Retiro, cuya dilucidación compete a los jueces comerciales (art. 8, inc. 6 del Código de Comercio).

C.F.S.S., Sala II

sent. into. 64034

01.12.06

“PROFESIÓN + AUGÉ A.F.J.P. c/ Galicia Cía. De Seguridad S.A. s/Acción meramente declarativa”

(F.-L.-H.)

Taxista. Incapacidad inferior al mínimo legal.

Las particularidades de la actividad desarrollada por el peticionante (taxista), su edad, y lo manifestado por el perito en orden a las limitaciones y capacidad restante que presenta, llevan a la conclusión de que reúne las condiciones exigidas por el inc. a) del art. 48 de la ley 24.241 para acceder al beneficio de retiro por invalidez, pese a no alcanzar el porcentaje requerido por la normativa (en el caso, 51,75%).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116842

23.05.07

“RILO, JUAN JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Retiro por invalidez”

(P.L.-L.-F.)

APORTANTE REGULAR E IRREGULAR

Años de servicios y aportes. Ley 24.241. Excesivo rigor formal.

Surgiendo de las constancias de autos que el titular, a la fecha del cese, reunía en exceso los años de servicios y aportes requeridos por la normativa vigente a ese entonces para ser considerado aportante regular con derecho, conforme lo dispuesto por el tercer párrafo del primer apartado del art. 1 del Dec. 460/99, según el cual “cuando los afiliados en relación de dependencia o autónomos acrediten el mínimo de años de servicio exigidos en el régimen común o diferencial en que se encuentren incluidos para acceder a la jubilación ordinaria, serán considerados en todos los casos aportantes regulares siempre que acrediten el ingreso de las cotizaciones correspondientes”; y encontrándose debidamente comprobado -sin haber merecido objeción por parte del organismo- este último extremo, con la salvedad que seis meses fueron cotizados fuera de plazo, ha de concluirse que, aún en la peor de las hipótesis para el afiliado -cual sería la de excluir del cómputo de los servicios con aportes el semestre apuntado-, igualmente reunía más del mínimo de años de servicios exigidos por la ley 24.241 para acceder a la jubilación ordinaria (entendiendo por tal la correspondiente a la contingencia de vejez). En tales condiciones, resulta de un extremo rigorismo formal, incompatible con la naturaleza alimentaria del derecho en juego, la postura asumida por el organismo que conduce a menguar la calificación de aportante del trabajador por el ingreso fuera de plazo -bien que con los recargos e intereses pertinentes- de las cotizaciones correspondientes a seis meses.

C.F.S.S., Sala III

sent. 114819

13.11.06

“PEDERSOLI, JOSÉ PEDRO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias”

(F.-L.-P.L.)

Años de servicios y aportes. Ley 24.241, art. 95. Dec. 460/99.

Surgiendo de las constancias de autos que el afiliado -al momento de la solicitud del beneficio- contaba con más de la mitad del mínimo de años de servicios con aportes exigido por la ley vigente para acceder a la PBU, aún cuando no cumplía con 12 meses de cotizaciones regulares dentro de los 60 previos para ser considerado como aportante irregular con derecho, corresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” que dejó sin efecto la resolución administrativa que rechazó la prestación con fundamento en que el titular no reunía la condición de aportante regular ni aportante irregular con derecho prevista por el art. 95 de la ley 24.241 -reglamentada por el Dec. 460/99-, y ordenó a la A.F.J.P. y a la A.N.Se.S. a acordar el beneficio. Ello así, porque la irrazonabilidad de la condición insatisfecha se muestra palmaria si se tiene en cuenta que priva al trabajador de acceder al retiro pretendido, lo que convertiría a las cotizaciones realizadas con motivo de su actividad dependiente y autónoma (en el caso, por casi 15 años) en un impuesto al trabajo sin contraprestación alguna por el Estado, con total desprecio de su deber de otorgar los “beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable” (art. 14 nuevo de la C.N.). (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115120

29.11.06

“CASTRO, HORACIO NÉSTOR c/ A.N.Se.S. y otros s/Prestaciones varias”

(P.L.-F.)

Plazo. Cómputo. Fecha. Ley 24.241, art. 95. Decretos 1120/94, 136/97 y 460/99.

Resulta acertado afirmar que los Decretos 1120/94, 136/94 y 460/99 no han agotado todas las situaciones susceptibles de configurarse en torno al art. 95, inc. a) ap. 1 y 2 que reglamentan, de modo que corresponde al juzgador establecer en cada caso las soluciones que conjuguen la verdad jurídica objetiva con el principio de justicia que debe presidir la decisión particular correspondiente al litigio en análisis. Y esta es, en el caso, considerar que el cómputo del plazo de la regularidad en los aportes ha de efectuarse a partir del momento en que el trabajador se encontró incapacitado para prestar servicios, situación que se mantuvo inalterada -más allá de su progresivo y lento agravamiento- hasta la fecha en que se produjo la extinción de la relación laboral.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116367

09.04.07

“JUÁREZ DE CALOSO, MARÍA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez”

(F.-P.L.-L.)

Plazo. Cómputo. Fecha. Ley 24.241, art. 95. Decretos 1120/94, 136/97 y 460/99.

Con arreglo a un principio reiterado de hermenéutica, los jueces deben actuar con suma cautela cuando deciden cuestiones que conducen a la denegación de prestaciones de carácter alimentario, pues en la interpretación de las leyes previsionales el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que la inspiran. De allí que “cuando se trate de créditos de naturaleza previsional, su contenido alimentario exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquéllos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria ...” (cfr. C.S.J.N., sent. del 01.10.96, “Hussar, Otto”). En consecuencia, teniendo en cuenta esas reglas, y en atención a que a la fecha del cese el trabajador se hallaba incapacitado y no fue controvertido que reunía el requisito de aportes requerido por la normativa vigente (art. 95 de la ley 24.241 y Dec. Reg. 460/99), debe reconocérsele el derecho a la prestación pretendida (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 16.11.99, “Cumi, Roberto”; ídem, sent. del 28.12.99, “Riz, Silvio Fabián”).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116367

09.04.07

“JUÁREZ DE CALOSO, MARÍA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez”

(F.-P.L.-L.)

Plazo. Cómputo. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Toda vez que los Decs. 1120/94, 136/97 y 460/99 no han agotado todas las situaciones susceptibles de configurarse en torno al art. 95, inc. a), ap. 1 y 2 de la ley 24.241 que reglamentan, corresponde computar la regularidad a partir de la fecha en que el trabajador incapacitado cesó sus aportes como autónomo; de modo que compete al juzgador establecer en cada caso las soluciones que conjuguen la verdad jurídica objetiva con el principio de justicia que debe presidir la decisión particular correspondiente al litigio en análisis. Por ello -en el caso- el cómputo del plazo de la regularidad de los aportes ha de efectuarse a partir de la comprobación de la incapacidad previsional del trabajador, y no desde la solicitud de la prestación, como pretende el organismo administrativo. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115674

26.12.06

“SCARIMBOLO, JOSÉ JUAN c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez”

(P.L.-L.-F.)

Plazo. Cómputo. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Teniendo en cuenta que la afiliación obligatoria exigida por el art. 2 de la ley 24.241 de un trabajador varón comienza a los 18 años y se extiende hasta los 65 años -por ser esa la edad mínima exigida para obtener la PBU-, se infiere que la vida económica activa prevista por la ley se extiende por un total de 47 años. En el caso de autos, el peticionante había transitado algo más de 27 años de aquélla, restándole el transcurso de otros 20 años para alcanzar la condición de vejez legalmente fijada para acceder a la PBU (art. 19, ley 24.241). Con esos datos, y por aplicación de la regla de tres simple, se tiene que en los 27 años que van desde que cumplió los 18 años y hasta que se incapacitó (a los 45 años), aportó por espacio de 20 años, es decir, a razón de 0,74 por cada año. Si se multiplica ese guarismo por los 20 años faltantes para llegar a los 65 años de edad, se obtienen 14 años y 8 meses más de servicios con aportes, que sumados a los 20 ya ingresados, totalizan más de 35 años de servicios con aportes (la fórmula es la siguiente: 20 de aportes realizados multiplicado por 20 años de vida laboral activa -hasta cumplir 65 años- dividido por 27 años de vida laboral ya cumplida -hasta los 45 años, cuando se incapacitó-). El cálculo precedente, formulado sobre la hipótesis de que el trabajador hubiera observado a partir del momento que se incapacitó, la misma pauta de cotización que tuvo en el pasado, demuestra que a los 65 años de edad habría excedido largamente el mínimo de 30 años de servicios con aportes requeridos para acceder a las prestaciones de vejez que acuerda el S.I.J.P. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115674

26.12.06

“SCARIMBOLO, JOSÉ JUAN c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez”
(P.L.-L.-F.)

Plazo. Cómputo. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Si la incapacidad del demandante -cuya existencia fue debidamente demostrada- le impidió continuar en actividad, haciéndole imposible seguir cumpliendo con el ingreso de las cotizaciones para poder ser encuadrado como aportante regular en los términos dispuestos por el art. 1 del Dec. 460/99, ha de concluirse que las exigencias de aportación de la referida normativa para acceder a la condición pretendida resulta incompatible con las características de la contingencia cubierta, pues “la regularidad en el cumplimiento de las obligaciones previsionales debe ser valorada sobre lapsos de tiempo trabajados” hasta que se produjo la contingencia (cfr. C.S.J.N., sent. del 07.03.06, “Tarditti, Marta Elena”); y desde ese punto de vista, la conducta del trabajador no merece reproche alguno. En esas condiciones, rechazar la pretensión del afiliado de ser calificado como aportante regular, llevaría a retacear de sus efectos -parcial e indebidamente- a las cotizaciones realizadas por más de dos décadas convirtiéndolas en un impuesto al trabajo, otorgándole una prestación menguada (50% en lugar del 70% del ingreso base), con menoscabo del deber de otorgar los “beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable” -art. 14 bis C.N.- (en el caso, el “a quo” lo calificó como aportante irregular con derecho de conformidad con el art. 95 de la ley 24.241, reglamentado por el ap. 2 del art. 1 del Dec. 460/99; mientras que el actor, a fin de mejorar su encuadramiento a la condición de aportante regular, insistió en la inconstitucionalidad de la normativa referida, alegando “la excesiva cantidad de aportes efectuados ... pese a su corta edad” y que “el cese de aportes se produjo por la enfermedad padecida y la imposibilidad absoluta de desarrollar cualquier actividad conforme a su capacitación”). Además, dicha situación contrasta con el trato dispensado por el punto 5 del art. 1 del referido Dec. 460/99, pues un trabajador con menos de 36 meses de afiliación y de servicios con aportes podría acceder a la condición de aportante regular. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115674

26.12.06

“SCARIMBOLO, JOSÉ JUAN c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez”
(P.L.-L.-F.)

Plazo. Cómputo. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de reconocer que el Dec. 460/99 ha venido a dar solución a diversas situaciones de injusticia a las que conducían los anteriores decretos reglamentarios del art. 95 de la ley 24.241(1120/94 y 136/96), lo cierto es que su aplicación ha de ser descalificada a fin de evitar la flagrante violación de elementales derechos constitucionales amparados en los arts. 14 nuevo, tercera parte, 16 y 17, y en resguardo del enunciado preliminar de promover el bienestar general, como última ratio del orden jurídico al que debe recurrir el Tribunal (cfr. Fallos 260:153; 286:76; 294:383; 295:455 y 850; 299:393; 300:187; 301:962; 302:457; 848 y 1049, entre otros). En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad -en el caso- de la reglamentación del referido art. 95 de la ley 24.241 contenida en el Dec. 460/99, en cuanto impediría al afiliado calificar como aportante regular con derecho a un retiro por invalidez equivalente al 70% y reconocerle expresamente ese carácter. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115674

26.12.06

“SCARIMBOLO, JOSÉ JUAN c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez”
(P.L.-L.-F.)

LEGISLADORES

Haberes previsionales. Topes. Ley 24.241, art. 9. Inaplicabilidad.

De la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el considerando 32 -y concordantes- del fallo “Chocobar” (sent. del 27.12.96), se colige que el art. 160 de la ley 24.241, en cuanto dispone que “... la movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del S.I.J.P. continuará practicándose de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrar en vigor la presente ley ...”, debe interpretarse como dirigido únicamente a las prestaciones que no estaban comprendidas en el régimen general de jubilaciones y pensiones y, por ello, sujetas a estatutos especiales como el del caso de autos, que implementaban un sistema distinto para la movilidad de los haberes. En concordancia con ello, resulta oportuno destacar que la reglamentación del citado art. 160 (Dec. 2433/93) mantuvo la vigencia de “... las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 22.682, 23.895, 24.016, 24.018 y 24.019 y cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037”. En consecuencia, ante la especificidad del régimen por el que obtuvo el beneficio el titular en su condición de ex legislador nacional (leyes 18.464 y 21.121), resulta inaplicable lo dispuesto por el art. 9 de la ley 24.241.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95236

16.03.07

“GIMÉNEZ, NICOLÁS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-L.-P.L.)

Reducción del haber. Ley 25.239, art. 25. Regímenes especiales. Caso “Arrúes”.

El Tribunal ha sostenido que las prestaciones otorgadas al amparo de regímenes especiales (en el caso, legisladores) no resultaban alcanzadas por lo dispuesto por el art. 9 de la ley 24.463 -modificado por el art. 25 de la ley 25.239-. Al respecto, ha de tenerse presente la doctrina sentada por la C.S.J.N. en la causa “Arrúes, Abraham David Segismundo” (sent. del 30.05.06), según la cual, el régimen especial que comprendía al demandante, derogado por la ley 23.966, recobró su vigencia por la ley 24.018 que sólo limitó la cuantía de la prestación al 70% por espacio de cinco años (art. 43), por lo que la movilidad del mismo se mantuvo al margen de las leyes 24.241 y 24.463. Pero esa situación se vio modificada por la ley 25.668, promulgada por el Dec. 2322/02, “que eliminó de la ley 24.018 el estatuto para los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de la Nación y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 01 de diciembre de 2002 (cfr. art. 8 de la ley 24.018, Fallos 322:752; 324:1177; “Garabentos, Horacio Orfilio”, sent. del 25.08.05). Por ello, en virtud del temperamento definido por el Alto Tribunal, corresponde hacer lugar al reclamo de la no aplicación del descuento operado en virtud del art. 9 de la ley 24.463, modificado por art. 25 de la ley 25.239, sólo hasta los haberes de noviembre de 2002, inclusive.

C.F.S.S., Sala III

sent. 114749

02.11.06

“ALLEGRONE, NORMA EVA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-P.L.-L.)

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES

Haberes previsionales. Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018.

Atento que del Acta Complementaria del Convenio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Tucumán, efectuada el 01.06.06 entre el Presidente de la Nación Argentina y el Sr. Gobernador, se infiere que los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia referida “podrán obtener el beneficio jubilatorio según las normas y requisitos tipificados en los arts. 8 a 11 y 26 a 33” de la ley 24.018” (art. 1) y que “los saldos de las cuentas de capitalización individual de los magistrados ... que registren aportes en el régimen de capitalización serán transferidos al régimen de reparto mediante el procedimiento de traspasos especiales” (art. 3), corresponde revocar la decisión del “a quo” que rechazó la acción declarativa por la que el titular solicitó se dejare esta-

blecido que el régimen jubilatorio aplicable era el contemplado en la referida ley - cfr. en igual sentido, C.F.S.S., Sala I, sent. del 13.06.06, “Mendilaharzu, Marcelo”- (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115045

22.11.06

“CASTILLO, ANA LÍA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa”
(P.L.-L.-F.)

Haberes previsionales. Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018.

No existiendo prueba alguna de que el accionante se hubiere desempeñado en el Poder Judicial de la Nación, sino que, por el contrario, la certificación acompañada a su reclamo da cuenta de su actividad en el Poder Judicial provincial (en el caso, de Tucumán), resulta improcedente la argumentación esgrimida por el interesado, según la cual la reciprocidad admitida por el art. 9 de la ley 24.018 para el cómputo de aportes en uno o más regímenes permite concluir que, una vez producido el traspaso del sistema local a la Nación, automáticamente queda incluido -por su condición de magistrado provincial- en la referida ley 24.018. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115045

22.11.06

“CASTILLO, ANA LÍA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa”
(P.L.-L.-F.)

Haberes previsionales. Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018.

La aplicación del régimen de reciprocidad para el cómputo de servicios con aportes a que habilita el art. 9 de la ley 24.018, no permite concluir -sin más- que ello importa la inclusión automática y plena de los magistrados y funcionarios provinciales en el régimen nacional especial, habilitándolos a acceder a sus prestaciones sin haber cumplido los requisitos -también especiales- previstos por la misma normativa. Ello así, porque la posibilidad que abre la mentada disposición en orden a computar servicios prestados en el Poder Judicial o en Ministerio Público “de las provincias adheridas al régimen de reciprocidad jubilatoria o en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas” para que quienes se encuentran comprendidos en su ámbito de aplicación -que abarca “exclusivamente a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacionales de Investigaciones Administrativas que desempeñen los cargos comprendidos en el Anexo I del escalafón para la Justicia Nacional ...” (cfr. art. 8)- puedan completar los recaudos exigidos para acceder a la prestación que otorga la ley 24.018, sólo tiene el alcance limitado que se infiere de sus propios términos. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115045

22.11.06

“CASTILLO, ANA LÍA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa”
(P.L.-L.-F.)

Haberes previsionales. Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018.

Al momento de resolver, el Tribunal no debe prescindir de circunstancias sobrevinientes (en el caso, el Acta Complementaria -modificatoria- del Convenio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Tucumán, suscripta en el marco del Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de Previsión Social al ámbito federal) que guardan relación estrecha con la cuestión litigiosa, “de manera de permitir que los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán se acojan a los beneficios jubilatorios regidos por la ley N° 24.018, en los arts. 8 a 17 y 26 a 33”. En consecuencia, ha de concluirse que a partir de la celebración del acuerdo modificatorio, la solicitud de encuadramiento dentro de la normativa de la ley 24.018 formulada por el peticionante se ha tornado abstracta, quedando habilitado el actor a formular su pedido ante A.N.Se.S. en los términos previstos en la cláusula segunda del Acta Complementaria mencionada. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115045

22.11.06

“CASTILLO, ANA LÍA c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa”
(P.L.-L.-F.)

Haberes previsionales. Jueces provinciales. Intangibilidad de la remuneración. Ley 24.463, art. 9. Inaplicabilidad.

La vigencia del principio de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados no puede ser desconocida en el ámbito provincial, ya que no es posible discriminar entre jueces que desarrollan su labor en él de aquellos que lo hacen en el ámbito nacional, pues se vulneraría el principio de igualdad al establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Ello así, tratándose -en el caso de autos- de una pensión derivada del beneficio jubilatorio de quien se desempeñara como magistrado, otorgado de conformidad al régimen especial provincial pertinente, y teniendo en cuenta lo resuelto por la Sala in re “Melo Ferrer, Nereo Ignacio” (sent. del 11.03.03) en el sentido que el art. 9 de la ley 24.463 no resulta aplicable al régimen especial de los magistrados, y asimismo que, conforme lo expuesto por la C.S.J.N. en autos “Gaibisso, César A. y otros” (sent. del 10.04.01), el Tribunal entendió en numerosas oportunidades que el régimen de los magistrados es un sistema especial, propio y autónomo, que no se ha visto alcanzado por las disposiciones de la ley 24.241 ni su modificatoria -ley 24.463-, debe concluirse que no se advierte razón alguna para que la referida interpretación no sea de aplicación a los magistrados provinciales.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68418

30.11.06

“SERRAN DE MARTÍNEZ, SELVA ANGÉLICA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarisimos”
(M.-Ch.-D)

Haberes previsionales. Jueces provinciales. Ley 24.463. Inaplicabilidad.

El objetivo principal de la ley 24.463 fue reformar el sistema integral de jubilaciones y pensiones establecido en base a la ley 24.241, pero no afectar los regímenes especiales y específicos jubilatorios (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 28.02.03, “Martino, Arnaldo Domingo y otros”; ídem, sent. del 21.04.03, “Gallo, Victorio y otros”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119855

06.12.06

“DOMÍNGUEZ, JOSÉ ENRIQUE c/ E.N. – A.N.Se.S. s/Medidas cautelares”
(H.-F.)

Haberes previsionales. Jueces provinciales. Ley 24.463. Inaplicabilidad.

Habiendo el titular obtenido su beneficio al amparo de una ley provincial en su condición de Juez de Cámara, devienen inaplicables las directivas de la ley 24.463. Ello así, porque la mencionada normativa no comprende en su ámbito subjetivo a las personas cuyo status continúa reglado por disposiciones especiales vigentes al momento del cese en las funciones (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.04.01, “Gaibisso, César y otros”). Además, no puede soslayarse que el actor se encuentra tutelado -en su condición de magistrado- por el principio de intangibilidad de las remuneraciones contemplado en el art. 110 de la C.N., el que se extiende a los sujetos en situación de retiro, y comprende tanto a los integrantes de la Justicia Nacional como a los de las respectivas jurisdicciones provinciales (cfr. C.S.J.N. sent. del 30.06.93, “Argüello Varela, Jorge”; sent. del 11.12.90, “Vilela, Julio” y la ya citada “Gaibisso”, entre otras).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119855

06.12.06

“DOMÍNGUEZ, JOSÉ ENRIQUE c/ E.N. – A.N.Se.S. s/Medidas cautelares”
(H.-F.)

Ley 24.018, art. 9. Interpretación.

La exégesis de la ley 24.018 requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigna no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor formal de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción y traduzca una renuncia a la verdad jurídica objetiva. En razón de ello, no cabe interpretar la frase “hayan ejercido” (art. 9, ley referida) de otra forma que no sea como la referencia a los últimos 10 años de servicios no de ac-

tividad, sino de servicios prestados al Poder Judicial.
C.F.S.S., Sala I
sent. 120249
26.12.06
“TULIÁN, HORACIO LUIS c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias”
(Ch.-M.-D.)

Perito médico. Acumulación de prestaciones. Caso “Chaca”.

Las prestaciones previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad no están incluidas en el régimen de reciprocidad jubilatoria, “por lo que se justifica admitir la acumulación de los haberes hasta el tope legal establecido, cuando se tiene derecho a un retiro militar y a una jubilación civil en razón de haber acreditado los requisitos exigidos respectivamente por cada uno de los sistemas, como única manera de respetar el enunciado de jerarquía constitucional que ordena resguardar la integridad del haber de pasividad a fin de no lesionar el derecho de propiedad de los interesados (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.10.96, “Chaca, Eduardo Máximo”). Sentado ello, y teniendo en cuenta que el titular goza de un haber de retiro obtenido en el marco de la ley 21.965 y que se habría desempeñado como Perito Médico en el Poder Judicial de la Nación, no encuadrándose esta función dentro del régimen de incompatibilidades dispuesta en el art. 5 de la ley 24.018 - que comprende exclusivamente al presidente, vicepresidente y los jueces de la C.S.J.N.-, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que declaró la inaplicabilidad de la ley 22.477 y ordenó al organismo otorgar el beneficio solicitado en caso de que el actor reúna la totalidad de los recaudos establecidos en la referida ley 24.018.

C.F.S.S., Sala I
sent. 121699
29.06.07
“RODRÍGUEZ GIRAULT, ALBERTO MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias”
(D.-M.-Ch.)

Haberes previsionales. Prosecretarios Administrativos. Suplementos. Acordadas 75/93 y 37/94. Carácter “bonificable”.

No cabe admitir el carácter “bonificable” del suplemento creado por el art. 3 de la Acordada 75/93, ya que ello significaría reconocer la pretensión por parte de los Prosecretarios Administrativos de percibir la misma remuneración de los Prosecretarios Jefes, y no la diferencia establecida entre ambos cargos, lo que conduciría al absurdo de interpretar que la finalidad de la referida Acordada y de la 37/94 no fue la concesión de un suplemento a los Prosecretarios Administrativos con determinada antigüedad, sino su promoción automática por el mero transcurso del tiempo (cfr. C.S.J.N., sent. del 13.05.03, “Martínez, Ana Daniela y otros”). Por lo tanto, al estar percibiendo los prosecretarios en actividad con 10 años de antigüedad en el cargo dicho suplemento como remunerativo y no “bonificable”, no puede extenderse indebidamente a la liquidación de los jubilados, que de este modo pasarían a percibir un total remunerativo superior a los activos. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. 116026
01.03.07
“LAPIDO, EDUARDO Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(P.L.-F.-L.)

Haberes previsionales. Prosecretarios Administrativos. Suplementos. Acordadas 75/93 y 37/94. Carácter “bonificable”.

De las Acordadas 75/93 y 37/94 se desprende que las mismas apuntan a brindar un reconocimiento a los Prosecretarios Administrativos que reúnan determinados requisitos, más no su ascenso automático a la categoría siguiente, lo que conllevaría una alteración de la planta de personal permanente, sin su correlativa partida presupuestaria. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. 116026
01.03.07
“LAPIDO, EDUARDO Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(P.L.-F.-L.)

MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA EX

Acumulación de prestaciones. Procedencia. Ordenanza 31.382.

Si bien es cierto que la posibilidad de una acumulación de prestaciones exige la autorización expresa del legislador por constituir una excepción al principio general, habiéndose jubilado el titular en el ámbito municipal bajo las disposiciones de la Ordenanza 31.382 -cuyos arts. 4 y 5 autorizaban sin restricciones taxativas la admisión de la sumatoria de los otros regímenes (en el caso, servicios extramunicipales dependientes y autónomos) para el recálculo del haber-, y surgiendo que, además, reunía todas las condiciones necesarias en esos sistemas para obtener dichos beneficios, ha de concluirse que ello es suficiente para hacer lugar a la pretensión, y ordenar el recálculo del nuevo haber, incluyendo las disposiciones contenidas en la ley 18.037 y 18.038.

C.F.S.S., Sala II

sent. 119857

06.12.06

“VILA, ISABEL SALA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(H.-F.-)

Haberes previsionales. Movilidad. Dec. 1044/83. Período posterior a diciembre de 2002.

El legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente; los jueces, investigando la intención de aquél podrán, a su vez, atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio de constitucionalidad de la inviolabilidad de la propiedad (Fallos 138:47; 152:268; 155:156; 167:5; 172:21, entre otros). De ello se sigue que la doctrina que sostiene que no existe derecho adquirido frente a la mutación de la legislación previsional, alcanza sólo a las personas que aún se encuentran en actividad, pero no a los que ya han cesado en la prestación de sus servicios al momento de entrar en vigencia una nueva ley y menos aún, a aquellos que ya se encuentran percibiendo un beneficio. (Disidencia de Dr. Herrero)

C.F.S.S., Sala II

sent. 120036

09.02.07

“LUPPI, SUSANA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes – Medida cautelar”

(H.-F.-D.)

Haberes previsionales. Movilidad. Dec. 1044/83. Período posterior a diciembre de 2002.

La aplicación retroactiva de una ley o un decreto a situaciones de hecho configuradas con anterioridad a su promulgación -en el caso, el organismo pretende se apliquen las disposiciones de la ley 24.463- se aparta claramente de lo dispuesto por los arts. 14 bis, 17 y 18 de la C.N. En consecuencia, acreditado en autos que el titular obtuvo el beneficio al amparo del Dec. 1044/83, que fijaba un haber del 82% de la remuneración asignada por todo concepto al cago en actividad, la movilidad de la prestación del accionante deberá fijarse de conformidad con la evolución de las remuneraciones de quienes se encuentran en actividad, siempre que el incremento dispuesto sea de naturaleza remunerativa. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120036

09.02.07

“LUPPI, SUSANA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes – Medida cautelar”

(H.-F.-D.)

Haberes previsionales. Movilidad. Dec. 1044/83. Período posterior a diciembre de 2002.

En la causa “Arrúes, Abraham David Segismundo” (sent. del 30.05.06) la C.S.J.N. sostuvo que el régimen especial del Dec. 1044/83 no fue alcanzado por las reformas introducidas por la ley 24.463 al S.I.J.P. (ley 24.241), y sólo ha sido derogado por la ley 25.688 y su promulgación parcial por el Dec. 2322/03, que eliminó de la ley 24.018 el estatuto para los funcionarios de los poderes ejecutivo

y legislativo de la Nación y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 01 de diciembre de 2002 (conf. art. 8, ley citada; doctrina de Fallos 322:752; 124:1177 -“Craviotto” y “Gaibisso”- y causa “Garabentos, Horacio Orfili”, sent. del 25.08.05). En consecuencia, corresponde reconocer al peticionante el derecho a percibir sus haberes mensuales reajustados según las variaciones del cargo en actividad hasta que fue suprimido por la última ley citada el régimen previsional que le deparaba una movilidad diferenciada del resto de los jubilados, y ordenar que el reajuste de los haberes previsionales se siga practicando según el método fijado en el art. 22 de la ley 24.018 hasta el 01 de diciembre de 2002. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120036

09.02.07

“LUPPI, SUSANA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes – Medida cautelar”

(H.-F.-D.)

Haberes previsionales. Movilidad. Dec. 1044/83. Período posterior a diciembre de 2002.

Respecto a la movilidad del haber previsional posterior al 01 de diciembre de 2002, la C.S.J.N. ratificó la atribución del Congreso de disponer las pautas adecuadas para hacerla efectiva conforme el principio que consagra el art. 14 bis de la C.N. Por ello, reconocido a quien obtuvo el beneficio conforme con el Dec. 1044/83 el derecho al reajuste del haber hasta el 01 de diciembre de 2002, para el período posterior a dicha fecha resulta oportuno analizar los argumentos vertidos por el Tribunal en las causas “López, Consuelo” y “Díaz, María Esther” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. -ambas- del 07.09.06) respecto a la situación que se presenta ante la falta de definición del Congreso sobre parámetros de movilidad concretos; cobrando especial relevancia los fundamentos vertidos por la C.S.J.N. en la causa “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06) al analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 7.2 de la ley 24.463. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120036

09.02.07

“LUPPI, SUSANA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes – Medida cautelar”

(H.-F.-D.)

Haberes previsionales. Movilidad. Dec. 1044/83. Período posterior a diciembre de 2002.

La fuerza de los fundamentos del fallo “Badaro, Adolfo Valentín” (cfr. C.S.J.N., sent. del 08.08.06) prelude el camino que visualiza la integridad del derecho a la movilidad del haber previsional. Empero, el Alto Tribunal, en el entendimiento de que la Justicia debe mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, difiere el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo que resulte razonable para el dictado de las disposiciones pertinente (ver Considerandos 18 y 19, fallo referido). Es decir, sin renunciar a tal pronunciamiento, “otorga” lo que podría decirse, un período de espera para que se cumpla la manda constitucional; cumplimiento que no sólo debe ser rápido, sino también eficaz y razonable. De ese modo, la alternativa de un parámetro de movilidad específico fijado por la justicia queda, en esta etapa del proceso, por lo menos, postergado. Dicho criterio ha de ser aplicado a los casos actuales pendientes de resolución, ya que sostener a ultranza una doctrina diferente sólo llevaría, en la práctica, a un dispendio procesal innecesario, con evidente detrimento del justiciable que se quiere proteger: el jubilado y el pensionado. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120036

09.02.07

“LUPPI, SUSANA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes – Medida cautelar”

(H.-F.-D.)

Prestaciones. Edad. Normativa aplicable. Dec. 1645/78.

Aún si el titular cumplió la edad requerida para obtener su beneficio cuando ya se hallaba vigente el Dec. 82/94, debe ser encuadrado en el ámbito del Dec. 1645/78 y no dentro de la ley 24.241 si su cese laboral se produjo cuando aún no se había realizado el traspaso del sistema previsional municipal al ámbito nacional. Abona esta solución el principio general vigente en el orden previsional, según el cual los derechos de los beneficiarios se rigen, en el caso de las jubilacio-

nes, por la ley vigente a la fecha en que se produce la desvinculación laboral.
C.F.S.S., Sala III
sent. 116080
09.03.07
"IOTTI, ROBERTO MARIO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias"
(L.-P.L.-F.)

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

FONDO COMPENSADOR

Competencia.

No cabe hesitación alguna en afirmar la competencia de la C.F.S.S. para conocer del recurso de apelación deducido, en atención a la indudable naturaleza previsional que reviste el reclamo articulado por el peticionante tendiente a obtener el pago de la suma que pretende en virtud del complemento de jubilación que, según su decir, le adeuda el Fondo Compensador al que aportó durante su vida activa. Dicha solución se compadece con el temperamento discernido sobre la habilitación del fuero federal de seguridad social para conocer en lo atinente a los fondos compensadores o cajas complementarias, que comprende -naturalmente- tanto a la de sus juzgados de primera instancia en la Capital Federal como a los Federales del Interior del país que conocen en materia de Seguridad Social, cuanto a esta Cámara, que ha sido reiteradamente reconocida por las tres Salas del Tribunal.

C.F.S.S., Sala III
sent. 114933

16.11.06

"VILLA, JOSÉ RAMÓN c/ Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza s/Cobro de pesos"
(F.-P.L.-L.)

Prescripción.

Asiste razón a la accionada que plantea la defensa de prescripción bienal respecto del pago del complemento de jubilación a cargo del Fondo Compensador. Ello así, porque configura un reclamo por reajuste de haberes al que corresponde aplicar lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 82 de la ley 18.037 (ahora 168 de la ley 24.241).

C.F.S.S., Sala III
sent. 114933

16.11.06

"VILLA, JOSÉ RAMÓN c/ Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza s/Cobro de pesos"
(F.-P.L.-L.)

Régimen complementario notarial. Ley 21.205.

El titular, al optar voluntariamente por la solicitud de un beneficio previsional en el ámbito provincial, se colocó fuera del marco de cobertura previsto por el Régimen Complementario de Jubilaciones y Pensiones y Seguridad Social para Escribanos de la Capital Federal implementado por la ley 22.105, aún cuando se encontraba afiliado a la entidad demandada. Por esa razón, no podía desconocer que su situación le impediría efectuar la solicitud del complemento reconocido como prestación, toda vez que se encontraba excluido expresamente como beneficiario (inc. a del art. 5 de la referida ley 22.105), sin que ello importe el acceso al resto de las prestaciones reconocidas en el sistema a las que, eventualmente, pudo tener derecho en su calidad de afiliado a la caja complementaria (incs. b y c, art. 4 de la ley citada). (Del dictamen Fiscal al que adhiere el Dr. Laclau, por la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. 115521

26.12.06

"MARTINELLI, CARLOS LUIS c/ Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social s/Prestaciones varias"
(L.-P.L.-F.)

Régimen complementario notarial. Ley 21.205.

El funcionamiento de las cajas complementarias encuentra su sustento en la seguridad social. A su vez, los órganos previsionales defienden a la comunidad que conforma sus beneficiarios y al funcionamiento regular del sistema de jubilaciones y pensiones. Entonces, si el sistema en sí mismo encuentra una de sus bases en el principio de solidaridad social no es irrazonable, en consecuencia, que con esa solidaridad deban contribuir aún los miembros con quienes el órgano no tiene obligación de reconocer beneficio alguno. Al respecto, la propia C.S.J.N. ha expresado que la obligación de aportar a un régimen jubilatorio rige aún cuando el afiliado eventualmente no llegare a gozar de ninguno de los beneficios del régimen previsional (D.T. 24-347). En síntesis, como señala Fernández Madrid (“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Tº I, pág. 151), los aportes no pertenecen a quien los efectúa, ingresan al sistema y quedan en él con destino a la cobertura de las contingencias para las que han sido previstos, aún cuando la persona que los abona no tenga un derecho -siquiera en expectativa- a percibir beneficio alguno. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente, por la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115521

26.12.06

“MARTINELLI, CARLOS LUIS c/ Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social s/Prestaciones varias”

(L.-P.L.-F.)

Régimen complementario notarial. Ley 21.205.

Toda vez que el peticionante ya es titular de un beneficio previsional que le fuera otorgado al amparo de una ley provincial, ha de revocarse la sentencia del “a quo” que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, incs. b) y c) y 5, incs. a) y c) de la ley 21.205, por no encontrarse vulnerados -en la especie- los derechos de propiedad e igualdad consagrados en los arts. 16 y 17 de la C.N., como así tampoco el derecho de acceder al beneficio de la seguridad social plasmado en el art. 14 bis de nuestra Carta Magna. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente, por la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115521

26.12.06

“MARTINELLI, CARLOS LUIS c/ Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social s/Prestaciones varias”

(L.-P.L.-F.)

Régimen complementario notarial. Ley 21.205.

Asiste razón al reclamante, quien continuó su actividad como fedatario en el ámbito de la Capital Federal luego de acordada la jubilación provincial y, como afiliado obligatorio a la Caja Notarial Complementaria de la Seguridad Social del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, siguió cumpliendo su deber de aportación para con ella -en el caso por 26 años- hasta que cumplió la edad exigida por la ley para formular el pedido que le fue desestimado. Al respecto, resultan de aplicación las mismas razones que llevaron al Tribunal a declarar la inconstitucionalidad del inc. c) del art. 5 de la ley 21.205 (texto según ley 23.378), que impone el requisito de antigüedad mínima en la afiliación para obtener la jubilación complementaria por invalidez (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 27.04.90, “Molina, Ramón Octavio”), toda vez que, al igual que en dicho precedente, la denegación del beneficio viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la C.N., afectando el derecho a la seguridad social, de igualdad ante la ley, de propiedad y de defensa. Ello así, habida cuenta que la exclusión del derecho al complemento del peticionante -no obstante haber cumplido la edad y los años de aportes exigidos durante tan extenso período- por el hecho de tratarse de un jubilado provincial, conduce a la privación del beneficio a quien contribuyó forzosamente al sistema por un número importante de años, convirtiendo a sus cotizaciones en un impuesto al trabajo que no encuentra sustento legal alguno, y tampoco en la retórica invocación de la solidaridad, piedra angular del derecho de la seguridad social, cuyas prestaciones han de ser brindadas con carácter integral e irrenunciable por mandato constitucional. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115521

26.12.06

“MARTINELLI, CARLOS LUIS c/ Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social s/Prestaciones varias”

(L.-P.L.-F.)

Trabajadores de Luz y Fuerza. C.C.T. N° 36/75.

Conforme lo establecido por los arts. 1 y 20 de la Reglamentación Transitoria de la Caja de Fondo Adicional Especial para Beneficios Previsionales Solidarios de los Sindicatos Adheridos a la F.A.T.L. y F., corresponde desestimar la solicitud del peticionante de que se le otorgara el beneficio previsional complementario establecido en el art. 9 de la C.C.T. 36/75 aún cuando oportunamente haya efectuado aportes para el Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones creado por la normativa citada, si durante los últimos años -previos al cese laboral- se desempeñó como personal fuera del convenio, y por ende, cesó de ingresar los aportes referidos.

C.F.S.S., Sala II

sent. Int. 66419

05.03.07

“GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ c/ Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza s/ Inconstitucionalidades varias”

(H.-D.-F.)

PENSIÓN

APORTANTE REGULAR E IRREGULAR

Años de servicios y aportes. Dec. 460/99.

Corresponde declarar desierto el recurso cuando la presentación no ataca el argumento central expuesto en la sentencia apelada (en el caso, se consideró que las exigencias establecidas por el Dec. 460/99 exceden lo dispuesto en el art. 95 de la ley 24.241 y conducen a situaciones injustas como la de autos, donde el causante efectuó aportes en debida forma de modo continuo durante dieciséis meses anteriores al deceso) y, en consecuencia, no satisface los requisitos exigidos por el art. 256 del C.P.C.C. en tanto no constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera erróneas, limitándose a reseñar la normativa que rige el caso y los antecedentes que obran en el expediente administrativo, pero omitiendo expresar los fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa a sus pretensiones (cfr. C.N.A.Civ., Sala E, S. 38.884, L.L. 1996-D-863). (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94127

22.11.06

“ROLDÁN, MARISA ANDREA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(L.-P.L.-F.)

Años de servicios y aportes. Dec. 460/99.

Las particularidades del caso en análisis muestran semejanza (en punto al total de años de servicios con aportes y a los registrados dentro de los 36 meses previos a la contingencia -aunque inversamente proporcionales-) con las tenidas en cuenta por el Alto Tribunal en el fallo “Tarditti, Marta Elena” (sent. del 07.03.06), ya que en autos fueron comprobados más de 6 años y 7 meses de servicios con aportes -bastante menos que los más de 20 años en esas condiciones que fueron demostrados en el citado precedente pero, en cambio, durante los últimos 36 meses anteriores a la muerte del trabajador, éste registró algo más de 16 meses de servicios con aportes, muchos más que los probados por Tarditti-. Por ello, más allá de toda otra consideración que pudiera formularse, lo cierto es que la situación apuntada torna aplicable el criterio expuesto en el leading case citado, en virtud del cual la circunstancia de que el asalariado no hubiese efectuado aportes -al menos- durante 18 meses dentro de los 36 meses previos al acaecimiento de la contingencia, “... no obsta al reclamo pues la protección previsional que debe ser otorgada deriva de la muerte del afiliado durante la relación laboral y no se halla sujeta a condiciones de satisfacción imposible por haberse producido su fallecimiento antes de que se cumpliera el tiempo de actividad a que se refiere el pronunciamiento apelado (arg. doctrina de Fallos 323:1281, considerandos 7, 8 y 9 y sus citas, reiteradas en la causa “Rojas, Martina”, sent. del 07.06.05)”. Refuerza dicha conclusión el hecho que el organismo no haya invocado ni demos-

trado circunstancia alguna que permita sospechar una indebida captación del beneficio. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94127

22.11.06

“ROLDÁN, MARISA ANDREA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(L.-P.L.-F.)

Años de servicios y aportes. Incapacidad del causante. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Las sucesivas reformas del art. 95 de la ley 24.241 y sus reglamentaciones, pretendieron hacerse cargo de las consecuencias disvaliosas que la aplicación de dicha normativa entrañaba, sin lograr el resultado buscado. Por ello, el juzgador ha de evaluar esos casos con extrema prudencia, habida cuenta de la naturaleza del beneficio pretendido, de la incapacidad que aqueja al peticionante y de la acentuada crisis laboral que sufre nuestra sociedad, dentro de la cual un porcentaje enorme de sus integrantes no logra acceder a un trabajo remunerado que asegure su sustento; situación que se torna mucho más crítica cuando nos hallamos ante personas que exhiben una capacidad laboral disminuida. De allí que deba concluirse que quien aportó al sistema previsional en forma prolongada, y que durante la última fase de su vida activa no pudo efectuar con regularidad sus aportes a raíz de una incapacidad que lo inhabilitaba laboralmente, exhibe una situación que no puede ser soslayada por el juzgador, debiendo declararse en esos casos la inconstitucionalidad de del art. 95 de la ley 24.241 y de las reglamentaciones contenidas en los Decs. 1120/94, 136/97 y 460/99, haciendo lugar a la prestación solicitada. (Del voto del Dr. Laclau al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115122

29.11.06

“PLATNER, HAUDEE ANIBAL c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(L.-P.L.-F.)

Años de servicios y aportes. Incapacidad del causante. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Surgiendo de las constancias de autos que el titular, a la fecha del fallecimiento, reunía en exceso los años de servicios y aportes requeridos por la normativa vigente a ese entonces para ser considerado aportante regular con derecho, conforme lo dispuesto por el tercer párrafo del primer apartado del art. 1 del Dec. 460/99, según el cual “cuando los afiliados en relación de dependencia o autónomos acrediten el mínimo de años de servicio exigidos en el régimen común o diferencial en que se encuentren incluidos para acceder a la jubilación ordinaria, serán considerados en todos los casos aportantes regulares siempre que acrediten el ingreso de las cotizaciones correspondientes” (en el caso, casi 28 años), extremo este último que no fue objeto de controversia, no ha de prosperar el agravio del organismo en cuanto pretende desconocer el carácter de aportante regular del difunto. Sin perjuicio de ello, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 del Dec. 460/99, por inoficioso. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115122

29.11.06

“PLATNER, HAUDEE ANIBAL c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(L.-P.L.-F.)

Años de servicios y aportes. Ley 24.241, art. 95 y decretos reglamentarios.

Si al momento del fallecimiento el causante computaba más de la mitad del mínimo de años de servicios con aportes exigido por la legislación vigente, aunque no registraba dentro de los 60 meses previos al fallecimiento, 12 meses de cotizaciones regulares, tal como lo exige el Dec. 460/99 para ser considerado aportante irregular con derecho, corresponde reconocerle dicho carácter. Ello así, porque la irrazonabilidad de la condición insatisfecha se muestra palmaria, si se tiene en cuenta que priva a los causahabientes de acceder a la pensión pretendida, situación que contrasta con el trato dispensado por el punto 5 del referido art. 1 del Dec. 460/99, pues un trabajador con menos de 36 meses de afiliación y de servicios con aportes podría acceder a la condición de aportante regular. En las condiciones descriptas, denegar la pretensión convertiría a las cotizaciones realizadas con motivo del desempeño laboral del causante (en el caso, por casi dos

décadas) en un impuesto al trabajo sin contraprestación alguna por el Estado, con total desprecio de su deber de otorgar los “beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable” (art. 14 nuevo de la C.N.). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 114788

07.11.06

“MORALES, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”.

(L.-F.-P.L.)

Años de servicios y aportes. Ley 24.241, art. 95 y decretos reglamentarios.

Ante la existencia de una abultada deuda originada en la omisión de aportar, y siendo el sistema público de previsión de naturaleza contributiva y solidaria, toda vez que sus fondos derivan -principalmente- de los aportes que los trabajadores ingresan durante su vida activa, no procede valerse de la doctrina sustentada en diversos precedentes, según la cual lo prescripto en el art. 95 de la ley 24.241 y legislación complementaria no resulta de aplicación a aquellos casos en los cuales el causante o el beneficiario hubiesen aportado durante un extenso período de su vida laboral, quedando imposibilitados de hacerlo en los últimos años, en razón de existir una incapacidad comprobada. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 114788

07.11.06

“MORALES, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”.

(L.-F.-P.L.)

Años de servicios y aportes. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Las sucesivas reformas del art. 95 de la ley 24.241 y sus reglamentaciones, pretendieron hacerse cargo de las consecuencias disvaliosas que la aplicación de dicha normativa entrañaba, sin lograr el resultado buscado. Por ello, el juzgador ha de evaluar esos casos con extrema prudencia, habida cuenta de la naturaleza del beneficio pretendido, de la incapacidad que aqueja al peticionante y de la acentuada crisis laboral que sufre nuestra sociedad, dentro de la cual un porcentaje enorme de sus integrantes no logra acceder a un trabajo remunerado que asegure su sustento; situación que se torna mucho más crítica cuando nos hallamos ante personas que exhiben una capacidad laboral disminuida. De allí que deba concluirse que quien aportó al sistema previsional en forma prolongada, y que durante la última fase de su vida activa no pudo efectuar con regularidad sus aportes a raíz de una incapacidad que lo inhabilitaba laboralmente, exhibe una situación que no puede ser soslayada por el juzgador, debiendo declararse en esos casos la inconstitucionalidad de del art. 95 de la ley 24.241 y de las reglamentaciones contenidas en los Decs. 1120/94, 136/97 y 460/99, haciendo lugar a la prestación solicitada. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Laclau. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115228

11.12.06

“OSACAR, MABEL SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”.

(L.-P.L.-F.)

Años de servicios y aportes. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Surgiendo de las constancias de autos que se cancelaron las obligaciones que, como trabajador autónomo registraba el causante y, atento lo prescripto por el apartado 3 del art. 95 de la ley 24.241, reglamentado por el Dec. 460/99, corresponde declarar el carácter de regular del de cujus en tanto a la fecha del fallecimiento contaba con más de quince años de aportes y se registran los doce meses de ingresos exigidos por la normativa citada. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115228

11.12.06

“OSACAR, MABEL SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”.

(L.-P.L.-F.)

Años de servicios y aportes. Ley 24.241, art. 95. Decretos reglamentarios. Planteo de inconstitucionalidad.

Si a la fecha de su deceso el trabajador reunía en exceso los años de servicios y aportes requeridos por la normativa vigente para ser considerado aportante irregular con derecho (en el caso, más de 25 años) conforme lo previsto en el tercer apartado del art. 1 del Dec. 460/99, pues computaba largamente más de la mitad del mínimo de años de servicios con aportes exigidos en la legislación vigente por aplicación de la escala prevista por el art. 38, al que remite el art. 19 de la ley 24.241, aunque no registraba dentro de los 60 meses previos al fallecimiento, 12 meses de cotizaciones regulares (situación que la actora intentó sanear con el esfuerzo de aportación post mortem del causante realizada), resulta de un extremo rigorismo formal, incompatible con la naturaleza alimentaria del derecho en juego, la postura asumida por el organismo que conduce a menguar la calificación de aportante del trabajador por el ingreso fuera de plazo -si bien que con los recargos e intereses pertinentes- de las cotizaciones a un año y un mes. La irrazonabilidad de la condición insatisfecha se muestra palmaria, si se tiene en cuenta que priva a los causahabientes de acceder a la pensión pretendida, situación que contrasta con el trato dispensado por el punto 5 del referido art. 1 del Dec. 460/99, pues un trabajador con menos de 36 meses de afiliación y de servicios con aportes podría acceder a la condición de aportante regular. En las condiciones descritas, denegar la pretensión convertiría a las cotizaciones realizadas con motivo del desempeño laboral del causante (en el caso, por más de 16 años) en un impuesto al trabajo sin contraprestación alguna por el Estado, con total desprecio de su deber de otorgar los “beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable” (art. 14 nuevo de la C.N.). En consecuencia corresponde reconocer la condición de aportante irregular con derecho del causante. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115228

11.12.06

“OSACAR, MABEL SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”.

(L.-P.L.-F.)

Años de servicios y aportes. Naturaleza alimentaria. Excesivo rigor formal.

Si a la fecha de su deceso el trabajador reunía en exceso los años de servicios y aportes requeridos por la normativa vigente para ser considerado aportante irregular con derecho conforme lo previsto en el tercer apartado del art. 1 del Dec. 460/99, pues computaba largamente más de la mitad del mínimo de años de servicios con aportes exigidos por la legislación vigente por aplicación de la escala prevista por el art. 38, al que remite el art. 19 de la ley 24.241, resulta de un extremo rigorismo formal, incompatible con la naturaleza alimentaria del derecho en juego, la postura asumida por el organismo calificando al trabajador como aportante irregular sin derecho por no registrar, dentro de los 60 meses previos al fallecimiento, 12 meses de cotizaciones regulares. La irrazonabilidad de la condición insatisfecha se muestra palmaria, si se tiene en cuenta que priva a los causahabientes de acceder a la pensión pretendida, situación que contrasta con el trato dispensado por el punto 5 del referido art. 1 del Dec. 460/99, pues un trabajador con menos de 36 meses de afiliación y de servicios con aportes podría acceder a la condición de aportante regular. En las condiciones descritas, denegar la pretensión convertiría a las cotizaciones realizadas con motivo del desempeño laboral del causante (en el caso, por más de 16 años) en un impuesto al trabajo sin contraprestación alguna por el Estado, con total desprecio de su deber de otorgar los “beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable” (art. 14 nuevo de la C.N.).

C.F.S.S., Sala III

sent. 114849

13.11.06

“RÍOS FORTUNA, MARTINA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”.

(F.-P.L.-L.)

Ley 24.241, art. 95. Reglamentación. Dec. 460/99.

El Dec. 460/99 (ver art. 1, ap. 1, 2 y 3), como tampoco las anteriores reglamentaciones (Decretos 1120/94 y 136/97), han agotado todas las situaciones susceptibles de configurarse en orden a lo dispuesto en el art. 95, incs. a) -ap. 1 y 2-, de modo que la jurisprudencia ha debido establecer soluciones que conjuguen la verdad jurídica y objetiva con el principio de justicia que debe presidir la decisión del caso particular. Ello así, corresponde remitirse a la doctrina de la C.S.J.N., según la cual la inconsecuencia o la falta de previsión no se supone en el legislador, y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, des-

truyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 297:142; 300:1080; 301:460; sent. del 08.09.92, "Heen Moon Young"); máxime cuando la decisión versa sobre derechos alimentarios de carácter imprescriptible e irrenunciable, y que, como también dicho el Alto Tribunal, en materia de previsión o seguridad social lo esencial es cubrir riesgos de subsistencia o ancianidad (Fallos 267:336; sent. del 31.07.73, "Noriega, María Antonia"), por lo que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con suma cautela (Fallos 256:250; 267:336; 266:299; 269:45, entre otras).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120656

30.03.07

"NEIL, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones"

(M.-D.-Ch.)

Ley 24.241, art. 95. Reglamentación. Dec. 460/99.

La C.S.J.N. se ha expedido en el sentido de que la regularidad de los aportes debe ser valorada sobre los lapsos trabajados y no sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado por muerte del afiliado. Asimismo sostuvo que si la protección previsional que debe ser otorgada deriva de la muerte del afiliado, no puede hallarse sujeta a condiciones de satisfacción imposible por haberse producido el fallecimiento antes de que se cumpliera el tiempo de actividad requerido (cfr. Tarditti, Marta E.", sent. del 07.03.06); máxime cuando el organismo reconoce el ingreso de los aportes por parte del causante durante los períodos mencionados, por lo que, cumplida la obligación solidarista, no puede decirse que el otorgamiento del beneficio solicitado pueda perjudicar a un grupo específico de personas o establecer privilegios o excepciones que excluyan a unos a favor de otros, y menos aún que la falta de aportes en tiempo oportuno constituya una valla para acceder a los beneficios previsionales (Fallos 269:45; 287:466 entre otros, citados por Rodríguez Simón – Jáuregui en "El afiliado regular", RJYP, T° VII, pág. 162 y ss.).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120656

30.03.07

"NEIL, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones"

(M.-D.-Ch.)

Ley 24.241, art. 95. Reglamentación. Dec. 460/99. Intereses.

La no fijación de intereses compromete la garantía de propiedad al disminuir el poder adquisitivo del crédito que se demanda, desvirtuando su finalidad alimentaria, con desmedro también del principio de movilidad de las prestaciones que consagra el art. 14 bis de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.07.85, "Kundt Cortez, Carlos Federico"). Por ello, reconocida la procedencia del beneficio solicitado, tal derecho resultaría menguado si no se admitiera que el pago de los haberes previsionales retroactivos debe hacerse considerándose los intereses devengados hasta la efectiva cancelación total del crédito.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120656

30.03.07

"NEIL, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones"

(M.-D.-Ch.)

Requisitos.

Privar del amparo previsional a la viuda de un trabajador que aportó al sistema durante casi tres décadas, equivale a convertir esas cotizaciones en un impuesto al trabajo sin contraprestación alguna por el Estado que tiene el deber constitucional de otorgar los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable (cf. C.F.S.S., Sala III, sent. del 25.03.98, "Remolí, Hebe Gladys"). Por ello, la ínfima porción de tiempo que le faltaba al causante para cumplir el requisito (en el caso, un año y nueve meses) desaconseja la aplicación textual de la norma, dado que al sopesar los valores en juego se advierte la necesidad de una consideración particularmente cuidadosa. En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" que hizo lugar al reclamo; máxime resultando evidente que no se trata de un supuesto de captación de beneficio, dado el extenso lapso de aportes al sistema.

C.F.S.S., Sala II

sent. 119771

01.12.06

“FARIÑA CERNADAS, MARÍA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”
(L.-F.-H.)

Sistema contributivo. Principio de solidaridad.

Resulta acertado el encuadre al que arribó el “a quo” que, de acuerdo a la naturaleza tuitiva del derecho de la seguridad social y al carácter alimentario del beneficio reclamado -pensión directa-, otorgó la prestación a la actora pese a que el causante no gozaba de la calidad de aportante irregular con derecho en las condiciones previstas por el art. 95 de la ley 24.241 (reglamentado por el Dec. 460/99). Ello así, porque si bien podría admitirse una conclusión negativa para los intereses de la peticionante de acuerdo a la fría legalidad de la decisión adoptada por el organismo, la sentencia ponderó la singular entidad de los derechos que informan la materia que nos ocupa por sobre un excesivo rigorismo formal que hubiera frustrado el acceso al beneficio solicitado. Desde esa perspectiva, no resulta un escollo insalvable a los intereses de la actora la circunstancia que el causante no alcanzare la regularidad en los aportes que exige la normativa, puesto que es evidente que no se configura un supuesto de captación indebida del beneficio si se repara en la existencia del extenso lapso de aportes por aquél efectuados -en el caso, 15 años- cumplimentando, de esa forma, con la obligación de ser solidario con el sistema previsional. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 121250

17.05.07

“CEJAS, CIRA INÉS c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(H.-F.-D.)

Sistema contributivo. Principio de solidaridad.

El régimen contributivo satisface las necesidades a cubrir mediante los recursos que se alleguen al fondo común, de lo cual se sigue la eficacia del mecanismo social que reposa en el ingreso oportuno de ellos. Por lo mismo, reiteradamente el Tribunal ha sostenido que si bien el sistema contributivo, inspirado en un principio de solidaridad social, implica la existencia de derechos, también impone obligaciones, derivándose de ello que quienes incumplen carecen luego de derecho para reclamar la cobertura previsional, pues es necesario preservar el régimen financiero, evitando que aquellos que evaden su obligación de afiliarse o consienten el incumplimiento del pago de sus aportes, pretendan luego el beneficio jubilatorio. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 121250

17.05.07

“CEJAS, CIRA INÉS c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(H.-F.-D.)

Sistema contributivo. Principio de solidaridad.

La integración del acervo social no queda librado a la decisión voluntaria de sus miembros, sino que la obligación de aportar constituye la esencia del sistema. En el régimen de autónomos, donde la exteriorización del trabajo que se efectúa depende de un acto de voluntad, el legislador ha considerado ajustado al logro de obtener el pago de la contribución respectiva -esencial para la subsistencia del sistema- a subordinar el reconocimiento de la prestación a la previa cancelación de los aportes que instituye. Si bien el modo adoptado encuentra su justificación en una razón de orden económico -mantener el equilibrio de egresos e ingresos del fondo en atención al sistema de reparto- existe, además, el principio preliminar de la solidaridad social, que constituye el basamento ético sobre el cual se sustenta toda la filosofía que vincula a la comunidad de intereses y que se traduce en que cada miembro se halla obligado hacia el conjunto societario y su débito sólo se extingue entregando a éste una parte de su esfuerzo productivo. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 121250

17.05.07

“CEJAS, CIRA INÉS c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(H.-F.-D.)

Sistema contributivo. Principio de solidaridad.

Un régimen previsional no se compadece con criterios o fines asistenciales. Este cometido es inmanente a la potestad del Estado en ejercicio de las atribuciones

que le han sido asignadas para ordenar y regular las relaciones sociales, pero no cabe admitirlo, ni menos aún exigirlo, cuando la ley lo ha instituido en el sólo carácter de administrador de un patrimonio. La C.S.J.N. ha señalado que la finalidad tuitiva de las leyes de previsión social no es argumento suficiente para sustentar la protección de quienes se desentendieron de las obligaciones que el sistema les imponía durante su vida útil, lo cual autoriza a rechazar la queja cuando no se demuestra nexo directo entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (cfr. sent. del 05.09.95, "Barrera, Mercedes Francisca"). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 121250

17.05.07

"CEJAS, CIRA INÉS c/ A.N.Se.S. s/Pensiones"

(H.-F.-D.)

Sistema contributivo. Principio de solidaridad.

Si del análisis de las constancias de autos se desprende que el causante desempeñó tareas remuneradas por un total de algo más de catorce años, y que desde la fecha del distracto laboral hasta su fallecimiento -en el caso, ocurrido dieciocho años después- subsistió con actividades ejercidas por cuenta propia sin haber ingresado aportes al sistema previsional, ha de concluirse que no le son aplicables las disposiciones de los Decretos 1120/94 (modificado por Dec. 136/97) y 460/99. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia de grado que reconoció el derecho pensionario de la viuda. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 121250

17.05.07

"CEJAS, CIRA INÉS c/ A.N.Se.S. s/Pensiones"

(H.-F.-D.)

CONCUBINA

Acreditación de la convivencia. Información sumaria. Competencia.

La convivencia denunciada con el objeto de obtener, posteriormente, un beneficio previsional, puede ser acreditada por la peticionante en sede administrativa o judicial. Si lo hiciera ante la primera y no tuviera éxito lo allí resuelto sería recurrible ante el fuero de la Seguridad Social (art. 15, ley 24.463). Ello así, en razón de la materia y a fin de evitar una verdadera denegatoria de justicia, corresponde asumir la competencia para resolver la petición deducida (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 31.07.00, "Del Pino, Matilde Rosario"; ídem, sent. del 13.06.03, "Yapura, María Rosa.; ídem sent. del 12.08.02, "Aguilera, María del Carmen"; Sala III, sent. del 09.10.03, "Solís, Ernesto"). (Del voto de la Dra. Dorado al que adhiere el Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64568

16.03.07

"ANCE, GENOVEVA DEL VALLE s/Información sumaria"

(D.-H.-F.)

Acreditación de la convivencia. Información sumaria. Competencia.

No existiendo la menor duda de que la pretensión de la peticionante atañe de manera directa, central, al derecho de la seguridad social, a poco que se repare en que la acción que se intenta resulta el presupuesto necesario a fin de dar comienzo al trámite de pensión que contempla expresamente el art. 53 de la ley 24.241 que regula el "Régimen Integrado de Jubilaciones y Pensiones", dicho vínculo inescindible resulta decisivo a la hora de establecer la competencia judicial, por lo que no parece razonable que si el interés perseguido es el de comprobar una relación de convivencia en aparente matrimonio a fin de obtener un beneficio de naturaleza previsional, su trámite se desarrolle ante un fuero ajeno a la temática de la Seguridad Social. (Del voto del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64568

16.03.07

"ANCE, GENOVEVA DEL VALLE s/Información sumaria"

(D.-H.-F.)

Acreditación de la convivencia. Información sumaria. Competencia.

No siempre es método recomendable para la interpretación de las normas atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las informa es lo que debe determinarse en procura de una interpretación racional que permita a los jueces superar las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (cfr. Fallos 318:1054). Lo expuesto lleva a concluir que, por aplicación del principio de especialización que rige en materia de competencia, no puede el fuero de la seguridad social preterir una causa en la que se debaten cuestiones sustancialmente previsionales, sin riesgo de incurrir en denegación de justicia, una de las tantas formas de cohibir el derecho a la jurisdicción (cfr. Bidart Campos, Germán J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Tº II, pág. 335).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64568

16.03.07

"ANCE, GENOVEVA DEL VALLE s/Información sumaria"

(D.-H.-F.)

Aparente matrimonio. Matrimonio celebrado en el extranjero. Ley 23.570.

Aunque el matrimonio entre el causante y la actora se haya celebrado en el extranjero, dicho acto revela la intención de los contrayentes de presentarse ante terceros con un status matrimonial, razón por la cual la peticionante se encuentra habilitada para solicitar el beneficio de pensión en los términos de la ley 23.570.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116441

18.04.07

"MARQUEZ, ALICIA MABEL c/ A.N.Se.S. s/Pensiones

(L.-P.L.-F.)

Finalización de la convivencia. Violencia familiar.

Desprendiéndose de las declaraciones testificales que la conclusión de la convivencia en el mismo domicilio se produjo por abandono del causante (quien padecía esquizofrenia), como asimismo que el vínculo afectivo perduró entre aquél y la concubina, pues luego de producida su salida del hogar, continuó visitándola y la actora le brindó cuidados en su enfermedad hasta el fallecimiento, la separación no puede constituir motivo jurídico suficiente para excluir a la supérstite de la pensión pretendida. Ello así, máxime si se tienen en cuenta las acciones previstas -entre otras- en la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, cuya finalidad apunta a la cesación del riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas que, de otro modo, podrían ser irreparables.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115700

26.12.06

"GRECO, DORA RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/Pensiones"

(F.-P.L.-L.)

Prueba. Reapertura.

La prueba testimonial sólo es permitida cuando otros elementos de juicio avalen la existencia del concubinato (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 05.05.92, "Alem, Fermín").

C.F.S.S., Sala II

sent. 120042

09.02.07

"BAEZ, ESTER YOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reapertura administrativa"

(F.-H.-D.)

Prueba. Reapertura.

Aún concediendo -a modo de hipótesis- que la peticionante se domiciliaba en el mismo inmueble que el causante, esa circunstancia, sumada al hecho de haber cuidado de aquél hasta el momento de su fallecimiento e inclusive haber abierto en alguna ocasión una cuenta bancaria a orden indistinta, no implican necesariamente que la convivencia lo haya sido "en aparente matrimonio"; debiendo en consecuencia desestimarse el beneficio de pensión pretendido mediante la solicitud de reapertura, por no revestir la prueba las características necesarias para acreditar dicha circunstancia -art. 5 ley 23.570 y art. 1 Dec. 166/89- (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 10.09.91, "Díaz, Fidela Margarita"; ídem, Sala II, sent. del 24.11.99, "Campodónico, Amanda Antonia")

C.F.S.S., Sala II

sent. 120042

09.02.07

“BAEZ, ESTER YOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reapertura administrativa”
(F.-H.-D.)

CONCURRENCIA

Derecho de acrecer. Procedencia. Ley 24.733.

Si bien la ley 24.733 no estaba vigente al momento del fallecimiento del causante, conforme lo dispuesto por el art. 156 de la ley 24.241 -vigente a la fecha indicada- se deben aplicar supletoriamente las normas de los arts. 41 de la ley 18.037 y 29 de la ley 18.038, que disponen que en caso de extinción del derecho de pensión de alguno de los copartícipes, su parte acrecerá proporcionalmente al de los restantes beneficiarios (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. 26.06.00, “Freitas Filipov, Daniel Arturo”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 119992

20.11.06

“MENDOZA, MIRTA c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones”
(M.-Ch.-D.)

DIVORCIO

Reconciliación. Convivencia en aparente matrimonio.

No cabe abundar en argumentaciones a fin de determinar si puede llamarse viuda a la sobreviviente de un matrimonio disuelto en los términos del art. 215 de la ley 25.515 y las pautas del art. 235 del Código Civil, teniendo en cuenta que, por los efectos legales del divorcio vincular (art. 217 C.C.) sin dejarse a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente (art. 204 in fine del mismo código), no puede considerarse a la peticionante viuda en los términos del inc. a) del art. 53 de la ley 24.241. En ese aspecto, la C.S.J.N. ha sostenido que “no puede ser viuda quien no era cónyuge del causante al producirse el deceso de éste, por lo que la ex esposa divorciada vincularmente del beneficiario fallecido no goza de derecho a pensión” (cfr. disidencia de los Drs. Petracchi y Highton de Nolasco in re “Parets, Adriana Hilda”, sent. del 11.07.06). Sin perjuicio de ello, corresponde reconocer el derecho a la peticionante que sustenta su reclamo en la convivencia en aparente matrimonio con el occiso, cuando de las pruebas de autos se desprende que había retomado la misma con el causante desde un tiempo que excede el período de dos años de convivencia exigido por la legislación vigente.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115909

22.02.07

“LÓPEZ, BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”
(F.-P.L.-L.)

HIJOS

Situación de desamparo.

La C.S.J.N. se ha pronunciado en sentido favorable al otorgamiento del beneficio previsional solicitado cuando lo contrario conduciría a condenar al peticionante al desamparo absoluto, destacando que el ámbito de la seguridad social está regido por normas que se caracterizan por su finalidad tuitiva, uno de cuyos objetos es atender la situación de quienes quedan desamparados cuando fallece el pariente que les proporcionaba los medios para su subsistencia (cfr. “Altobelli, Yolanda Lidia c/ Caja de Previsión Social de la Provincia y Pcia. de Salta”, sent. del 03.11.92).

C.F.S.S., Sala I

sent. 119865

10.11.06

“MOSQUERA, GRACIELA SILVIA c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones”
(D.-Ch.)

SEPARACIÓN DE HECHO

Culpa. Prueba. Ley 17.562.

El Tribunal se ha pronunciado por el rechazo del reclamo del beneficio de pensión en los supuestos en que ha mediado separación de hecho presumiendo que aquella se debió a culpa de ambos cónyuges, a menos que se acredite de modo fehaciente por el cónyuge supérstite la culpabilidad del causante o la asistencia económica recibida, de acuerdo a lo establecido por el art. 1, inc. a) de la ley 17.562 (cfr. entre otros, “Burgos Cabado, Eugenio”, sent. del 11.11.94 y Melinger Haag, Ana”, sent. del 25.03.99). El mismo temperamento fue reiterado en el caso “González, María Elena” (sent. del 21.06.01, en que se tuvo por acreditado que la separación obedeció a “incompatibilidad de caracteres” en base, sustancialmente, a la declaración jurada prestada ante el organismo por la propia demandante. Sin embargo, dicho modo de pensar fue descalificado por la C.S.J.N. al decidir el recurso extraordinario deducido por la actora, por entender “que la presunción en que se fundó el a quo no se aviene con la jurisprudencia de este tribunal que, en reiteradas oportunidades, ha resuelto que debe ser dejada sin efecto la sentencia que deniega el beneficio previsional si no se prueba la culpa de la apelante en la separación de hecho, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1, inc. a) de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionante inocente o cuya culpabilidad no hubiese sido fehacientemente probada” (Fallos 318:1464; 323:1810 y sent. del 16.04.02, “Stoller, Elsa Y.”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 105835

13.02.07

“NAVARRO, DOLORES MERCEDES c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(F.-L.-P.L.)

Culpa. Prueba. Ley 17.562.

El Máximo Tribunal ha sostenido que “resulta conveniente recordar que la C.S.J.N. ha decidido en reiterados precedentes que es necesario demostrar la culpa en las separaciones de hecho, toda vez que el elemento subjetivo es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1, inc. a) de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes al fallecimiento de aquél (Fallos 288:249; 289:148; 303:156; 311:2432; 318:1464; 323:1810 y sent. del 16.04.02, “Stoller, Elsa Y.”). En consecuencia, y sin perjuicio de dejar a salvo la opinión personal, habida cuenta que la prueba producida en autos no arroja luz alguna sobre la cuestión de la separación, corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda y concedió a la peticionante el beneficio de pensión en su calidad de viuda. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 105835

13.02.07

“NAVARRO, DOLORES MERCEDES c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(F.-L.-P.L.)

Culpa. Prueba. Ley 17.562.

El derecho a pensión tiene un claro carácter sustitutivo y, a través de este beneficio, se persigue no dejar en el desamparo al núcleo familiar que dependía económicamente de un jubilado fallecido. No resultaría equitativo que, en el caso de esposos que han decidido concluir su vida en común y no prestarse en el futuro asistencia, fuese el organismo previsional el que, ante el fallecimiento de uno de ellos, debiese distraer recursos del escaso fondo común de los beneficiarios previsionales para brindar un amparo que, en los hechos, no existía antes de fallecer el causante. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 105835

13.02.07

“NAVARRO, DOLORES MERCEDES c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(F.-L.-P.L.)

Culpa. Prueba. Ley 17.562.

Como una excepción, el legislador hizo extensivo el derecho a pensión para el cónyuge que no fuese culpable de la separación. Ahora bien, quien demanda un beneficio tiene a su cargo la prueba del cumplimiento de los requisitos legales pa-

ra obtenerlo. De allí se desprende que la carga de la prueba de la no culpabilidad en la separación conyugal incumbe a quien la alega y no al organismo previsional. Ello sin perjuicio al pronunciamiento en sentido contrario de varios fallos de la C.S.J.N. ya que, en atención al cambio de integración que se ha producido en el Alto Tribunal, el punto merece un nuevo debate y esclarecimiento. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 105835

13.02.07

“NAVARRO, DOLORES MERCEDES c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(F.-L.-P.L.)

Culpa. Prueba. Ley 17.562.

Si quien peticona el beneficio de pensión se encontraba separada del causante a la fecha del deceso de éste y no recibía ayuda económica de ninguna clase proveniente del mismo, ha de acreditar que la separación se produjo por culpa exclusiva de este último, siendo ella inocente. Trátase de un requisito sine que non para hacer procedente la pretensión, de un elemento constitutivo de su derecho, y por consiguiente es a la actora a quien incumbe su prueba. Por otra parte, poner dicha prueba a cargo del organismo previsional significa adjudicar a éste una actividad de orden detectivesco, ajena a las funciones que por ley le han sido encomendadas. Implicaría obligar a los funcionarios de la A.N.Se.S. a efectuar una indagatoria entre los familiares del causante y de la actora, entre quienes fueron amigos y conocidos de ambos, al mismo tiempo que recabar informaciones vecinales y procurar el eventual hallazgo de pruebas documentales de acceso muy problemático. Todo ello a fin de poder esclarecer el presunto derecho a pensión de una persona que, desde años atrás, se hallaba separada del causante sin recibir ayuda económica de éste y a quien, por consiguiente, su fallecimiento no le produjo ninguna merma en sus ingresos ni ninguna dificultad en el mantenimiento del nivel de vida que venía llevando. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 105835

13.02.07

“NAVARRO, DOLORES MERCEDES c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(F.-L.-P.L.)

Ley 17.562. Culpabilidad.

Surgiendo del expediente administrativo que el peticionante declaró bajo juramento que no se encontraba separado de hecho de su cónyuge al tiempo de fallecer ésta, mientras que en autos reconoció que hubo separación derivada de “un affaire con otra mujer” y que no hubo reconciliación, ha de concluirse que se encuentra, evidentemente, comprendido en las causales de exclusión contempladas por la ley 17.562. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Laclau. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115358

14.12.06

“TORRES, MIGUEL EDMUNDO c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-L.-F.)

Ley 17.562. Culpabilidad.

Ante el categórico reconocimiento del peticionante, que expresamente admitió que la causa de la separación del matrimonio se debió a su infidelidad, la inactividad probatoria del organismo resulta irrelevante, pues la culpabilidad en la separación de quien pretende el beneficio quedó reconocida por el propio interesado. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115358

14.12.06

“TORRES, MIGUEL EDMUNDO c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-L.-F.)

Ley 17.562. Culpabilidad.

Como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, la recta interpretación de la ley 17.562 impone al organismo previsional establecer si el peticionante fue el culpable o no de la separación, en la medida que existan causas que justifiquen tal sospecha, mediante la fehaciente demostración de tal recaudo, pero nunca

presumir su existencia y someterla a la exigencia de demostrar su inocencia, desde que tal pronunciamiento se encuentra reñido con las garantías constitucionales de defensa en juicio -art. 18- y con el espíritu de las leyes que intentan aplicarse. (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115358

14.12.06

“TORRES, MIGUEL EDMUNDO c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-L.-F.)

Ley 17.562. Culpabilidad.

La separación de hecho y posterior convivencia con otra persona son insuficientes para determinar la culpabilidad de la titular a los fines de excluirla del derecho a la pensión derivada del fallecimiento de su esposo; máxime habida cuenta de lo dispuesto por la C.S.J.N. (cfr. “Cañete, Angélica”) en el sentido que “la convivencia de hecho con otro hombre, aún antes de la muerte del causante, ha dejado de ser causal de pérdida del derecho pensionario de la viuda frente a la sanción de la ley 23.570”. (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115358

14.12.06

“TORRES, MIGUEL EDMUNDO c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-L.-F.)

VIUDA/O

Acumulación de prestaciones. Tope.

Debe confirmarse el pronunciamiento del “a quo” que, luego de compartir la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re “Hernández, Adelaida Susana” (sent. del 28.05.02), tuvo en cuenta que ni la suma de ambas prestaciones, ni el importe de la segunda pensión por separado, superaban el tope de los tres haberes mínimos de jubilación que establece el art. 2 de la ley 22.611, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Dec. 1199/04 y Res. A.N.Se.S. 281/05.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115034

22.11.06

“ROURA, BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(F.-P.L.-L.)

Sumas indebidamente percibidas por el causante. Recupero. Haberes. Afectación. Improcedencia.

En atención al carácter personalísimo de las prestaciones previsionales (arts. 46, inc. a, de la ley 18.037 y 14, inc. a, de la ley 24.241), la pensión constituye un derecho legal reconocido en cabeza de la causahabiente, es decir, directo y no hereditario, aún cuando su otorgamiento se encuentre condicionado -entre otros requisitos- al fallecimiento del causante. Por ello no cabe admitir su afectación por cargos formulados contra el causante, al menos en tanto no se demuestre su responsabilidad en los hechos que los motivaron (cfr. en igual sentido, C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.10.01, “Nigro de Arizaga, Luisa Cecilia”).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116426

18.04.07

“FERNEZ, ANITA JOSEFA c/ A.N.Se.S. s/Restitución del beneficio – Medida cautelar”

(F.-P.L.-L.)

PRESTACIONES

CARGOS CONTRA EL BENEFICIARIO

Pago indebido. Sumas percibidas y consumidas de buena fe. Error del organismo.

No obstante la autorización contenida en el art. 14, inc. d) de la ley 24.241 para

formular cargos por percepción indebida de jubilaciones sin distingo alguno, dicho precepto debe conciliarse con los principios que establece el Código Civil en materia de repetición cuando existe buena fe -arts. 738, 786 y 1055-, pues no se advierte razón para tratar de manera más gravosa a un deudor de buena fe que ha consumido prestaciones de naturaleza alimentaria que al obligado a restituir por causa de otro tipo de relaciones jurídicas (cfr. C.S.J.N., "Rossello, Josefa Esther", sent. del 23.09.03).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120194

30.11.06

"MANEIRO, NORMA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Restitución de beneficio – Medida cautelar"

(Ch.-M.-D.)

Pago indebido. Sumas percibidas y consumidas de buena fe. Error del organismo.

Corresponde eximir al deudor de buena fe de la devolución de los haberes que percibió en exceso cuando fue el propio organismo el que incurrió en error (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 20.12.02, "Terrado, Pedro").

C.F.S.S., Sala I

sent. 120194

30.11.06

"MANEIRO, NORMA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Restitución de beneficio – Medida cautelar"

(Ch.-M.-D.)

Pago indebido. Sumas percibidas y consumidas de buena fe. Error del organismo.

Lo percibido en más por los titulares no será susceptible de devolución cuando el pago indebido se originó en un error del propio organismo, y fue percibido de buena fe por los beneficiarios (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.12.02, "Fernández, Virgilio"; Sala III, sent. del 13.08.03, "Haxell, Ana María"; Sala I, sent. del 28.02.05, "Montiel Godoy, Juan Bautista").

C.F.S.S., Sala I

sent. 120194

30.11.06

"MANEIRO, NORMA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Restitución de beneficio – Medida cautelar"

(Ch.-M.-D.)

Pago indebido. Sumas percibidas y consumidas de buena fe. Error del organismo.

La atribución que tiene el organismo previsional -aún en supuestos de nulidad absoluta- para suspender, revocar o modificar las resoluciones que otorgan beneficios jubilatorios (art. 48 ley 18.037 y 15 ley 24.241), se halla sujeto a la condición de que dicha nulidad resulte de hechos o actos fehacientemente probados y presupone que se haya dado a los interesados participación adecuada en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados, en resguardo de la garantía de defensa en juicio -art. 18 de la C.N.; art. 1, inc. f, ley 19.549- (cfr. C.S.J.N., sent. del 12.12.96, "Trama, María Alejandra").

C.F.S.S., Sala I

sent. 120194

30.11.06

"MANEIRO, NORMA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Restitución de beneficio – Medida cautelar"

(Ch.-M.-D.)

Pago indebido. Sumas percibidas y consumidas de buena fe. Error del organismo.

El acto administrativo en virtud del cual se otorga el beneficio jubilatorio esta precedido por la actividad del peticionante y del órgano resolutor. El juego armónico de ambas acciones, signado por el hecho que el postulante al beneficio tiene un rol activo en cuanto denuncia servicios y explicita prueba para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, se completa por la actividad del órgano otorgante quien tiene la peculiaridad de instar a que, en caso de dudas o oscuridad, se produzcan nuevas pruebas o se aclaren situaciones (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.03.97, "Daher, Antonio Jorge").

C.F.S.S., Sala I

sent. 120194

30.11.06

“MANEIRO, NORMA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Restitución de beneficio – Medida cautelar”
(Ch.-M.-D.)

CESE EN LA ACTIVIDAD

Trabajadores en relación de dependencia. Reingreso a la actividad. Fecha inicial de pago.

La ley 18.037 no establece una forma determinada para el acto de cese en la ejecución de tareas a propósito de perfeccionar el derecho jubilatorio. Se verifica con la materialización de no prestar tareas remuneradas, circunstancia que se corrobora -en el caso de quienes se hallan en relación de dependencia- con la entrega por parte del empleador de los certificados pertinentes.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120351

08.03.07

“BARBEITO, INÉS c/ A.N.Se.S s/Impugnación fecha inicial de pago”
(F.-D.-H.)

Trabajadores en relación de dependencia. Reingreso a la actividad. Fecha inicial de pago.

La normativa de la ley 18.037 se limita a determinar que quienes cumplen con las exigencias de edad y servicios con aportes deben, previamente, cesar en toda actividad en relación de dependencia para acceder a la prestación (art. 64, inc. a). De allí en más, los servicios prestados con posterioridad deberán considerarse como un reingreso a la actividad, cuyo efecto jurídico sobre la prestación es diverso y se encuentra regulado por en los arts. 64 inc. b), 67 y 68 de la ley citada; circunstancia que no obsta a su otorgamiento, más allá de que el retorno a la actividad se haya producido con anterioridad a la entrada en vigencia del Libro I de la ley 24.241.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120351

08.03.07

“BARBEITO, INÉS c/ A.N.Se.S s/Impugnación fecha inicial de pago”
(F.-D.-H.)

Trabajadores en relación de dependencia. Reingreso a la actividad. Fecha inicial de pago.

Admitido el derecho a obtener la jubilación, es indudable que el pago de haberes debe remitirse al primer cese de actividad, pues la condición de jubilado se retrotrae a ese momento (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.02.67, “Victos, Valentín Alberto”, Fallos 267:8).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120351

08.03.07

“BARBEITO, INÉS c/ A.N.Se.S s/Impugnación fecha inicial de pago”
(F.-D.-H.)

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA

Alcances. Cuestionamiento. Acción de amparo.

Si bien la Constitución Nacional no incluyó como requisito del amparo lo dispuesto en el art. 2, inc. a) de la ley 16.986, en cuanto a la inexistencia de otro medio administrativo más idóneo, ello no implica -aún cuando la reforma constitucional produjo una trascendente innovación a favor del acceso a la justicia por parte de los administrados- que el trámite del amparo se haya ordinario y dejado de ser un instituto de excepción. En consecuencia, desprendiéndose de las constancias de la causa que la cuestión en debate requiere un estudio más complejo que el que resultaría posible efectuar en un proceso de carácter sumarísimo como el amparo, por cuanto impondría -en el caso- entrar a analizar, entre otros aspectos, los alcances de los términos de la transferencia de un sistema de previsión social provincial, al no haberse debatido adecuadamente sobre los aspectos mencionados atento el prieto marco procesal del remedio intentado, debe concluirse que la acción incoada no resulta admisible. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto

de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116502

24.04.07

“AGUILERA, PABLO MANUEL Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(P.L.-L.-F.)

Alcances. Cuestionamiento. Acción de amparo.

En tanto la acción ejercitada encuadra en las previsiones de los arts. 43 de la C.N. y 1 de la ley 16.986, y en su tramitación se han hecho oír las argumentaciones y se han aportado los elementos conducentes a sostenerlas sin que se requiriese mayor amplitud de debate y prueba, corresponde descartar las observaciones formuladas en torno a su admisibilidad (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 06.05.02, “González, Hipólito”; ídem, sent. del 27.05.02, “Malufi Alizar, Agustín”). (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116502

24.04.07

“AGUILERA, PABLO MANUEL Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(P.L.-L.-F.)

Competencia. Justicia federal.

La provincia (en el caso, de Salta), única persona aforada a la instancia originaria de la Corte ha declinado tal privilegio, pues al celebrarse el Convenio de Transferencia con el Estado Nacional se pactó la intervención de la justicia federal con competencia en su territorio, razón por la cual ha operado una prórroga de dicha competencia “ratione personae”, a favor de la justicia de grado (cfr. C.S.J.N., sent. del 13.08.98, “Páez de Correa, Nidia c/ A.N.Se.S.”).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64615

27.03.07

“MOLINA DE RUBIO, MARÍA DEL MILAGRO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Competencia. Justicia federal.

Todos los estados provinciales pueden prorrogar su competencia originaria y exclusiva de la Corte a favor de los tribunales inferiores de la Nación, sólo cuando dicha jurisdicción originaria corresponde en la razón de su persona, constituyendo sólo una prerrogativa y, como tal, factible, por principio, de ser renunciada (cfr. Fallos 315:2157; 321:2170).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64615

27.03.07

“MOLINA DE RUBIO, MARÍA DEL MILAGRO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Competencia. Justicia federal.

En la medida que los supuestos de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de naturaleza excepcional e interpretación restrictiva (Fallos 286:237) no encuadren en la cuestión ventilada en autos, corresponde atenerse a la cláusula del convenio de transferencia que determina la competencia de la justicia federal con asiento en la provincia respectiva.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64615

27.03.07

“MOLINA DE RUBIO, MARÍA DEL MILAGRO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Competencia. Justicia federal.

Un principio directriz que ha fijado el Alto Tribunal Federal en su cometido de ceñirse “a la impostergable necesidad de preservar y fortalecer el rol institucional correspondiente a ésta Corte” (cfr. sent. del 21.03.06, “Barreto, Alberto Damián y otra c/ Pcia. de Bs. Aires”), apartándose del “conocimiento y decisión de asuntos

que por su naturaleza y más allá de su fuente, son ajenos a la trascendente e insustituible atribución institucional de éste tribunal como intérprete final de la Constitución Nacional y custodio último de las garantías superiores reconocidas en la Ley Suprema” (Cons. 5º, párr. 1º, autos citados), lo constituye el apartarse del tratamiento de toda materia que involucre la vigencia del “principio constitucional que consagra la autonomía de los Estados provinciales, de manera de no perturbar su administración interna, porque si todos los actos de sus poderes pudieran ser objeto de una demanda ante la Corte, vendría a ser ella quien gobernase a las provincias” (Cons. 7º).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64615

27.03.07

“MOLINA DE RUBIO, MARÍA DEL MILAGRO c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

Pcia. de Catamarca. Haberes previsionales. Reajuste. Fecha de corte.

Del carácter integral e irrenunciable que el art. 14 bis. de la C.N. reconoce a los derechos de la seguridad social, se infiere que no cabe atribuir causales de caducidad al no ejercicio temporáneo del derecho a reclamar el reajuste del haber (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 04.08.93, “Pérez de Moretti, Asunción” y sus citas), sin perjuicio, claro está, de la aplicación de la prescripción que pudiere corresponder en virtud de lo dispuesto por el art. 82 de la ley 18.037 -ahora art. 168 de la ley 24.241 (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 17.05.04, “Romero, Estela del Carmen”; ídem, Sala III, sent. del 15.12.04, “Scaglia, Edith Edelma María”). En consecuencia, debe confirmarse lo decidido por el “a quo” que condenó hacer efectivo el reajuste por nueva opción de cargos, si de las constancias de autos se desprende que la solicitud se encontraba en trámite a la fecha de corte establecida para la aplicación del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional (en el caso, de la Pcia. de Catamarca), motivo por el cual corresponde aplicar al caso la ley provincial 4.094, que no contiene norma alguna que limite la posibilidad de cambio por nueva opción de cargos para la determinación del haber.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115914

22.02.07

“REINOSO DE LAGORIA, MANUELA DEL CARMEN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Pcia. de Río Negro. Sumas no remunerativas. Res. 607/97 A.N.Se.S. Competencia.

La cuestión atinente a la responsabilidad del Estado Nacional – A.N.Se.S. de continuar abonando el suplemento no remunerativo a los jubilados transferidos de la Pcia. de Río Negro quedó zanjada con el fallo del Alto Tribunal en la causa “Durán, Noemí Magdalena” (sent. del 09.08.01), donde se señaló que mediante el acuerdo firmado el 31.05.96 y ratificado por la ley local 2.988 y el Dec. Nacional 721/96, la Nación tomó a su cargo la obligación de pagar -con el límite fijado en materia de topes por las leyes 24.241 y 24.463- los beneficios otorgados por la caja de la provincia, en las condiciones fijadas por la legislación local que enumera taxativamente el propio convenio (cfr. Cláusula Primera, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, y Cláusula Tercera, párrafos primero, segundo y tercero), entre los cuales no se encuentran incluidas las normas provinciales que reconocieron las sumas no remunerativas aquí discutidas (Dec. 169/93, 1817/93 y 261/93; Res. A.N.Se.S. 607/97).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120031

09.02.07

“SIKICH, NELLY Y OTROS c/ A.N.Se.S. y otro s/Restitución del haber”

(F.-D.-H.)

Pcia. de Río Negro. Sumas no remunerativas. Res. 607/97 A.N.Se.S. Competencia.

Frente a un beneficio otorgado por autoridades locales que no integra el beneficio previsional traspasado a la Nación, no asumido en el marco del Convenio de Transferencia y fuera de sus previsiones, ha de concluirse que no existe interés de la Nación, ni la materia reviste carácter federal que amerite la competencia del fuero de la Seguridad Social ante la pretendida aplicabilidad y exigibilidad de la norma local por parte los vecinos de la provincia que la dictó. Ello así, ya que “la

justicia federal es un fuero de excepción y no dándose causal específica que lo haga surgir en el caso, su conocimiento corresponde a la jurisdicción local” (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.04.01, “Espejo, José Miguel c/ Caja de Seguros de Vida S.A.”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120031

09.02.07

“SIKICH, NELLY Y OTROS c/ A.N.Se.S. y otro s/Restitución del haber”

(F.-D.-H.)

Pcia. de Río Negro. Sumas no remunerativas. Res. 607/97 A.N.Se.S. Competencia.

La naturaleza de las prestaciones de que se ocupa el Convenio de Transferencia y las obligaciones asumidas por la Nación y la Pcia. de Río Negro, sella la suerte del reclamo de la peticionante (jubilada del sistema previsional de esa provincia que fuera transferido al E.N. por la ley 2.988 el 01.05.96) por el cobro de sumas no remunerativas -fundando la falta de pago en la Res. A.N.SE.S. 607/97-, en cuanto a la jurisdicción federal respecto a la provincia; y con ello la competencia del juez federal para analizar e interpretar una norma local, cuya vigencia e imperatividad se debate entre un particular y la provincia de la cual emana y a la que pertenece. En consecuencia, corresponde declarar incompetente a la justicia federal para dirimir la cuestión suscitada.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120031

09.02.07

“SIKICH, NELLY Y OTROS c/ A.N.Se.S. y otro s/Restitución del haber”

(F.-D.-H.)

Pcia. de Salta. Haberes previsionales. Excepciones. Falta de legitimación pasiva.

Atento la naturaleza de los derechos debatidos y a que se encuentran cumplidos los presupuestos básicos, corresponde confirmar la sentencia del “a quo” que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la provincia (en el caso, Salta) ante la solicitud de reajuste del haber de la titular. Ello así, máxime teniendo en cuenta que el propio Convenio de Transferencia dispuso que la Provincia mantendrá a su cargo los juicios pendientes de resolución y aquellos que se inicien con posterioridad pero por causas o títulos anteriores a la fecha de la transferencia, relativos a las obligaciones de pago de jubilaciones y pensiones que se transfieren y asumirá las condenas que en los mismo pudieran dictarse (cláusula décimo cuarta).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69393

13.06.07

“MAURIZZIO, ROSA JOSEFINA c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Pcia. de Salta. Haberes previsionales. Reajuste. Competencia. Justicia Federal.

Si la provincia, única aforada a la instancia originaria de la C.S.J.N., ha celebrado un Convenio de Transferencia en el cual pactó con la Nación la intervención de la justicia federal con competencia en su territorio, se ha operado una prórroga de dicha competencia “ratione personae” a favor de la justicia de grado, por lo que la acción de amparo promovida en los términos de la ley 16.986 -con fundamento en el art. 8, inc. d) de la ley 24.049 de Transferencia de Docentes Nacionales del Área a la Administración Pública Provincial- contra la Pcia. de San Luis y contra el Estado Nacional (A.N.Se.S.), es ajena a la jurisdicción originaria de la Corte y deberá tramitar por ante la justicia federal de la provincia mencionada (cfr. C.S.J.N. sent. del 13.08.98, “Páez de Correa, Nidia” -Fallos 321:2176). Ello así, y atento la cláusula vigésimo primera del Convenio de Transferencia de la Pcia. de Salta, ratificado por ley 6.818, corresponde confirmar la sentencia del “a quo” que no hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la provincia, y se declaró competente para entender en la demanda deducida en los términos del art. 15 de la ley 24.463 contra la A.N.Se.S., por reajuste de haberes.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68926

22.03.07

“PALACIOS, ALBA ÁNGELA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Pcia. de San Luis. Haberes previsionales. Reajuste. Fecha de corte.

Desde la fecha de corte establecida por el Convenio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de San Luis al Estado Nacional (30.09.96) y hasta la actualidad, es la A.N.Se.S. quien tiene a su cargo la aplicación, control y fiscalización de las prestaciones que fueran otorgadas en su oportunidad por el Instituto de Previsión Social de la referida provincia. En consecuencia, respecto de la petición del reajuste del haber formulado por el titular con posterioridad a la fecha indicada, han de subrayarse dos cuestiones: la primera, que el pedido de reajuste sea original, es decir, no se trate en la especie de la continuación de un trámite previo que amerite apreciar la solicitud al amparo de la legislación que con anterioridad a la fecha de corte regía la materia; y segundo, que el propio accionante reconoció la competencia de la A.N.Se.S. para resolver respecto de su petición, puesto que fue en sede de ese organismo dónde hizo efectivo su reclamo. Por ello, la pretensión únicamente puede ser tratada por el órgano previsional nacional a la luz de las previsiones de las leyes 24.241 y 24.463. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116027

01.03.07

“ABACA, JUSTA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.L.-F.-L.)

Pcia. de San Luis. Haberes previsionales. Reajuste. Fecha de corte.

A partir del carácter integral e irrenunciable que el art. 14 bis. de la C.N. reconoce a los derechos de la seguridad social, no cabe atribuir causales de caducidad al no ejercicio temporáneo de los mismos (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 04.08.93, "Pérez de Moretti, Asunción c/ C.N.P.I.C.y.A.C."), sin perjuicio, claro está, de la aplicación de la prescripción que pudiere corresponder en virtud de lo dispuesto por el art. 82 de la ley 18.037 -ahora art. 168 de la ley 24.241 (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 17.05.04, "Romero, Estela del Carmen"; ídem, Sala III, sent. del 15.12.04, "Scaglia, Edith Edelma María"). En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la solicitud de revisión del importe de la prestación, entendiendo que el reclamo formulado en forma posterior a la fecha de corte a que hace referencia el art. 4 del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de San Luis a la Nación, no era óbice para el progreso de la misma. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116027

01.03.07

“ABACA, JUSTA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.L.-F.-L.)

OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO

Pensión. Deuda con las cajas. Retroactivo. Afectación. Porcentaje. Ley 24.241, art. 14, inc. d).

El art. 14, inc. d) de la ley 24.241 contempla, dentro de un límite razonable como es el 20% del haber mensual de las prestaciones, el cobro de las deudas contraídas por los beneficiarios pertenecientes al régimen de reparto con el órgano de gestión (vg. en concepto de aportes omitidos), así como la recuperación de las sumas que los titulares de las prestaciones hubiesen percibido en exceso (cfr. Jaime y Brito Peret, "Régimen previsional. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Ley 24.241"). En consecuencia, debe concluirse que no corresponde que el organismo haya deducido el 100% de la deuda que el causante tenía - como consecuencia de la aplicación de la doctrina del caso "Rei Rosa"- sobre el retroactivo abonado a la viuda, puesto que, al tratarse de haberes, por aplicación de la normativa antes citada únicamente procede su afectación en un porcentual equivalente al 20%. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115940

22.02.07

“MARTÍNEZ, MARÍA FIDELINA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(F.-P.L.-L.)

REGÍMENES ESPECIALES

Haberes previsionales. Reajuste. Ley 22.955. Movilidad posterior al 30.03.05. Ley 24.463, art. 7, ap. 2.

Sin perjuicio de la opinión personal de quien suscribe a favor del mantenimiento del método de adecuación del haber previsto en el régimen especial por el que fue acordado el beneficio (en el caso, ley 22.955), debe confirmarse la solución a la que arribó el “a quo” sobre la aplicación del art. 7, ap. 2 de la ley 24.463 para el cálculo de la movilidad posterior al 30.03.95, en virtud de la doctrina reiterada por el Alto Tribunal en tal sentido (cfr. entre otros, “Brochetta, Rafael Anselmo”, sent. del 08.11.05 y sus citas, Fallos 326:1431 y 4035 -casos “Casella” y “Pildain”-). Empero, ello no ha de privar a quien reclama el derecho a la movilidad de su haber para el período en tratamiento, pues la vigencia de ese principio constitucional -consustancial a la naturaleza de las prestaciones previsionales- se mantuvo inalterada.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116323

26.03.07

“MASCARO, IRIS MARTA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Haberes previsionales. Reajuste. Ley 22.955. Movilidad posterior al 30.03.05. Caso “Badaro”.

Al presente no cabe prescindir de los nuevos lineamientos establecidos por el Supremo Tribunal in re “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06), por los que se dispuso poner en “conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido por la Ley Fundamental” (ver cons. 19), no juzgando apropiado “que el Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa, por la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer” (ver cons. 16); agregando “que la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema de dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la C.N. Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal -Fallos 308:1848-” (ver cons. 18). En consecuencia, corresponde reconocer expresamente el derecho a la movilidad de las prestaciones previsionales devengadas con posterioridad al 30.03.95, con el fundamento, alcances y condiciones indicadas por la C.S.J.N. en el referido caso “Badaro”.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116323

26.03.07

“MASCARO, IRIS MARTA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

Investigadores científicos. Ley 22.929. Vigencia.

Ajustándose lo decidido por el “a quo” al principio que informa el criterio sustentado por esta Cámara (cfr. entre otros, Sala I, sent. del 30.06.99, “Eggimann, Olga Bety y otros”; íd. sent. del 27.12.99, “González, Mario Rubén”), en concordancia con el temperamento adoptado por la C.S.J.N. en los casos “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros”, “Unamuno, Miguel” (ambos del 24.03.00) y “Alias, Manuel y otros” (sent. del 23.03.00), corresponde confirmar la sentencia que declaró como régimen jubilatorio aplicable a los investigadores científicos, el de la ley 22.929, que conserva su plena vigencia. En el sentido apuntado, es decir, por la inalterada vigencia de la ley referida, se ha pronunciado el Alto Tribunal en la causa “Massani de Sese, Zulema Micaela” -sent. del 15.11.05-. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116396

17.04.07

“MACCIONI, HUGO JOSÉ FERNANDO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. y

otros s/Amparos y sumarísimos”
(L.-F.-P.L.)

Investigadores científicos. Haberes previsionales. Reajuste. Ley 22.929. Vigencia.

El Dec. 2433/93, reglamentario de la ley 24.241, dispone que se mantienen en vigencia las movilidades establecidas por una serie de leyes, entre las cuales se encuentra expresamente mencionada la ley 22.929. En ese sentido la C.S.J.N., al fallar en autos “Gemelli, Esther N.” (sent. del 28.07.05), sostuvo que “el régimen jubilatorio de la ley 24.016, correspondiente a los docentes, ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste y se mantiene vigente con todas sus características, entre las que se encuentra la pauta de movilidad”. Posteriormente, el Alto Tribunal declaró aplicable dicha doctrina a un beneficio adquirido al amparo de la ley 22.929 (cfr. sent. del 25.11.05, “Massani de Sese, Zulema Micaela”). (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115416

26.12.06

“DEVOTO, ANDRÉS AGUSTÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(L.-F.-P.L.)

Investigadores científicos. Haberes previsionales. Reajuste. Ley 22.929. Vigencia.

La reglamentación del art. 160 de la ley 24.241 (Dec. 2433/93) mantuvo la vigencia de “... las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 23.682, 23.895, 24.018 y 24.019, y cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037”. En consecuencia, ha de concluirse que la especificidad del régimen legal aplicable al titular (ley 22.929), cuya vigencia -restablecida por el art. 1 de la ley 24.019- no fue alterada por las leyes 24.241 y 24.463 (cfr. C.S.J.N., sent. del 28.06.05, “Massani de Sese, Zulema Micaela”, por el que remitió a los fundamentos de los precedentes “Gemelli, Esther Noemi” y “Siri, Ricardo Juan”, fallados el 28.07.05 y 09.08.05, respectivamente), torna improcedente el planteo sustentado en el art. 7, ap. 2, de la ley conocida como de solidaridad previsional. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115416

26.12.06

“DEVOTO, ANDRÉS AGUSTÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(L.-F.-P.L.)

Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Acción de amparo. Procedencia.

A la luz de los derechos presuntamente afectados, de naturaleza alimentaria y preferente tutela constitucional, la acción de amparo resulta la vía idónea para esclarecer la solicitud de inscripción en el Programa Jefes de Hogar (Dec. 565/02).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119779

01.12.06

“MIRANDA, MARÍA FERNANDA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarísimos”
(L.-F.-H.)

Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Procedencia.

El planteo referido a las limitaciones presupuestarias que establece la Ley de Presupuesto General de la Nación para el financiamiento del programa “Programa Jefes de Hogar”, no resulta suficiente para vedar la inscripción que solicita el amparista, debiendo el Estado Nacional arbitrar los medios suficientes para satisfacer los derechos prestacionales que consagra a través de las medidas que dicta, evitando efectuar discriminaciones a las solicitantes cuando se encuentran en iguales condiciones.

C.F.S.S., Sala II

sent. 119779

01.12.06

“MIRANDA, MARÍA FERNANDA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarísimos”

(L.-F.-H.)

Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Procedencia.

El Dec. 565/02 -prorrogado por imperio del art. 4 de la ley 26.077- que instituyó el Programa Jefas y Jefes de Hogar para ser aplicado mientras subsista la emergencia ocupacional, en ninguna de sus disposiciones refiere la necesidad de inscribirse hasta determinada fecha como condición sine qua non para evitar la pérdida del derecho que concede. Ello así, no resulta aceptable tolerar discriminaciones entre quienes, cumpliendo los recaudos previstos por la norma para acceder al beneficio que instituye, no se hubieran inscripto hasta determinada fecha so peligro de lesionar el principio de igualdad contenido en el art. 16 de nuestra C.N.

C.F.S.S., Sala II

sent. 119779

01.12.06

“MIRANDA, MARÍA FERNANDA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarísimos”

(L.-F.-H.)

Programa Jefes y Jefas de Hogar. Dec. 565/02. Medidas cautelares. Ampliación. Competencia.

El magistrado que hizo lugar a la medida de no innovar oportunamente peticionada y ordenó a la demandada proceder a inscribir a los accionantes en el Programa Jefes y Jefas de Hogar, es competente para entender en la solicitud de ampliación de la medida cautelar mediante la cual el Defensor Oficial peticiona se provean alimentos nutritivos y/o nutrientes para sus representados menores. Ello así, dado el conocimiento que ya tuvo el “a quo” respecto de los hechos, de las circunstancias alegadas por las partes en ambas solicitudes y de la documentación respaldatoria, sumado a la urgencia alegada. Además, de acuerdo con la finalidad de las medidas cautelares, un retardo en el dictado de las mismas ocasionado por los trámites que insumiría el inicio de una nueva acción cautelar, llevaría a frustrar en forma definitiva el derecho cuya verosimilitud se invoca (cfr. C.N.A.Civ. y Com. Fed., sent. del 17.08.00, “Congregación Hijas de San Camilo y otros c/ Federación de Asoc. y Cámaras de Establ. Geriátricos R.A.”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 119914

28.12.06

“RAMOS, LORENA LUJÁN Y OTROS c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Incidente”

(D.-H.)

RIESGOS DEL TRABAJO

Accidente in itinere. Trayecto. Desvío. Asistencia a un familiar. Dec. 491/97.

Corresponde descartar tanto los hechos como las conclusiones de la información probatoria emanada de un estudio al servicio del mercado asegurador, por tratarse de una mera manifestación unilateral, y no haber sido objeto de control en su producción por la contraparte.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120153

16.02.07

“PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557”

(F.-D.-H.)

Accidente in itinere. Trayecto. Desvío. Asistencia a un familiar. Dec. 491/97.

Quien afirma un hecho controvertido como fundamento de su pretensión defensiva asume la obligación de su prueba. Por ello, si el accionado refiere afirmaciones de descargo y explicita una propia versión de los hechos acontecidos, o sea, se ampara en un cuadro fáctico diverso al imputado, será de su cuenta desplegar la actividad demostrativa que contrarreste la presunción legal. Al respecto, señalan Arazi - Fenocchietto “para distribuir la carga de la prueba no se atiende tanto al carácter de actor o demandado, sino a la naturaleza y categoría de los hechos según sea la función que desempeñen respecto de la pretensión o de la defensa. Normalmente, los primeros serán responsabilidad del actor, y los segundos, a

cargo del accionado” (cfr. “Régimen Legal del Código Civil y Comercial de la Nación”, pág. 333).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120153

16.02.07

“PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557”

(F.-D.-H.)

Accidente in itinere. Trayecto. Desvío. Asistencia a un familiar. Dec. 491/97.

No negada la dolencia padecida por la madre del trabajador fallecido - circunstancia que razonablemente evaluada, comporta una sólida justificación del por qué de la presencia del occiso antes de dirigirse a su lugar de trabajo-, ha de concluirse que no impulsaba a éste la mera diversión invocado por la demandada, sino el estado de salud de su progenitora que ha de tenerse por cierto ante la falta de réplica respecto de su veracidad. En consecuencia, una evaluación flexible del acontecimiento, y sobre la base de un criterio analógico en su mensura, debe concluirse que es asimilable al caso la hipótesis legal que refiere el Dec. 491/97, cuando entiende como válida la desviación del trabajador para acudir al encuentro de un familiar.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120153

16.02.07

“PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557”

(F.-D.-H.)

Accidente in itinere. Trayecto. Desvío. Asistencia a un familiar. Dec. 491/97.

Si bien no puede desconocerse que el Dec. 491/97 refiere el caso de un “familiar directo enfermo y no conviviente”, circunstancia que en principio podría dar pie a rebatir que la manda no es de aplicación cuando el trabajador fallecido convivía con sus padres, afirmar dicha interpretación literal es absurdo. La norma busca la apertura de quienes por su relación de consanguinidad o parentesco y que no conviven con el trabajador en su domicilio -pero que no por ello dejan de ser fuente de afecto o preocupación de los sentimientos de éste-, facilite por un mínimo grado de solidaridad humana a comprender como atendible la necesidad de acudir a ese encuentro. Dicha posibilidad es razón suficiente para que el legislador dote de carácter de razonable el ayudar en dicha urgencia respecto de quienes no comporten la vivienda del trabajador. Dicha finalidad, por su naturaleza, no tolera una ponderación restrictiva, mezquina del cúmulo de posibilidades a sucederse y, por lo mismo, no impide concluir que el familiar directo conviviente, si se halla en una situación extrema de salud, no pueda ser objeto de acompañamiento si se encuentra fuera de la residencia habitual por la persona -en el caso, un trabajador- con quien comparte la vivienda, sin que ello signifique que el desvío obligado a que se enfrente éste lo exonere de la protección legal (Ley 24.557, art. 6).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120153

16.02.07

“PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557”

(F.-D.-H.)

Comisiones Médicas. Calidad de parte. Excepciones. Falta de legitimación pasiva.

De conformidad con lo establecido en los arts. 21 y 46 de la Ley 24.557, la función de las comisiones médicas jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central se circunscribe a la determinación de la naturaleza laboral o profesional de la patología, el carácter y grado de la incapacidad, y la determinación del contenido y alcance de las prestaciones. Ello no significa que sean parte con interés en el procedimiento, sino que su intervención se circunscribe a elaborar el respectivo dictamen, para lo cual deben revisar al damnificado y requerirle las pruebas médicas así como ordenar los estudios pertinentes. En virtud de ello, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la Superintendencia de Administradoras de Fondo de Jubilaciones y Pensiones respecto de la Comisiones Médicas.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 69146

27.04.07

“BRIZUELA, ANDRÉS GUILLERMO c/ Boston Cía. Argentina de Seguros s/ Ley 24.557”

(M.-Ch.-D.)

Fallecimiento del trabajador. Indemnización. Pago único. Ley 24.557, art. 14, inc. b). Inconstitucionalidad.

Los damnificados indirectos por la muerte de un trabajador, víctima de un infortunio laboral, tienen 'iure proprio', legitimación activa para demandar al empleador y/o a la ART la reparación del daño sufrido.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120882

25.04.07

"MOLINA, NILDA PILAR c/ UNIDOS A.F.J.P. s/Cobro de pesos"

(D.-Ch.-M.)

Fallecimiento del trabajador. Indemnización. Pago único. Ley 24.557, art. 14, inc. b). Inconstitucionalidad.

El capital en discusión es propio de la víctima, y consecuentemente de sus herederos, careciendo la A.F.J.P. de causa legítima para privar a la heredera del pago de la prestación total. Ello así, porque con el pago mediante renta, se le impondría una espera que redundaría en un beneficio a favor del deudor.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120882

25.04.07

"MOLINA, NILDA PILAR c/ UNIDOS A.F.J.P. s/Cobro de pesos"

(D.-Ch.-M.)

Fallecimiento del trabajador. Indemnización. Pago único. Ley 24.557, art. 14, inc. b). Inconstitucionalidad.

La C.S.J.N. sostuvo en el fallo "Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A." (sent. del 26.10.04) que "... no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para concluir que el medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los 'objetivos' legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las 'efectivas necesidades que experimentan los damnificados'" ... "la inversión del capital en forma directa por el interesado puede servir al mejor desenvolvimiento económico del mismo ..."

C.F.S.S., Sala I

sent. 120882

25.04.07

"MOLINA, NILDA PILAR c/ UNIDOS A.F.J.P. s/Cobro de pesos"

(D.-Ch.-M.)

Fallecimiento del trabajador. Indemnización. Pago único. Ley 24.557, art. 14, inc. b). Inconstitucionalidad.

El pago de la indemnización mediante el sistema de renta periódica contraría los explícitos propósitos reparadores que motivaron la adopción del sistema.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120882

25.04.07

"MOLINA, NILDA PILAR c/ UNIDOS A.F.J.P. s/Cobro de pesos"

(D.-Ch.-M.)

Fallecimiento del trabajador. Indemnización. Pago único. Ley 24.557, art. 14, inc. b). Inconstitucionalidad.

El pago mediante el sistema de renta mensual aparece como limitada e insuficiente para el resarcimiento de un infortunio laboral cuya consecuencia fue la muerte del trabajador. Por ello, la forma debe ser la de pago único a favor de los derechohabientes, quienes podrán disponer libremente del capital percibido. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 14, inc. b) de la ley 24.557 (conforme Dec. 1278/00).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120882

25.04.07

"MOLINA, NILDA PILAR c/ UNIDOS A.F.J.P. s/Cobro de pesos"

(D.-Ch.-M.)

Ley 24.557. Comisiones Médicas. Facultades.

Las Comisiones Médicas están facultadas para pronunciarse sobre la prescrip-

ción, en la medida que se encuentran habilitadas para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la A.R.T. y el damnificado o sus derechohabientes (cfr. pto. 2 in fine del art. 21 de la ley 24.557), pudiendo valerse para ello de dictámenes jurídicos previos (cfr. pto. 5 del art. referido, agregado por el Dec. 1278/01). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S, Sala III

sent. int. 94268

29.11.06

“ALMIRÓN, LUIS RUBÉN c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557”.

(P.L.-F.-L.)

Ley 24.557. Comisiones Médicas. Facultades.

Las Comisiones constituyen auténticos “órganos dependientes de entidades autárquicas que componen la administración descentralizada, desarrollan funciones públicas -estatales, corresponde agregara ahora- y se expresan a través de actos administrativos de tipo jurisdiccional”, es decir, que configuran, sin duda alguna, “tribunales administrativos ... a los que se les atribuyó por ley una función jurisdiccional (cfr. Ackerman y Maza, “Ley sobre riesgos del trabajo. Aspectos constitucionales y procesales”, pág. 244). En ese orden de ideas, debe concluirse que esas Comisiones están facultadas para pronunciarse sobre las cuestiones atinentes a la naturaleza laboral del accidente y el carácter profesional de la enfermedad, tipo y grado de la incapacidad, a la vez que se encuentran habilitadas para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la A.R.T. y el damnificado o sus derechohabientes (cfr. pto. 2 in fine del art. 21 de la ley 24.557), pudiendo valerse para ello de dictámenes jurídicos previos (cfr. punto 5 del art. 21 citada, agregado por el Dec. 1278/01). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S, Sala III

sent. int. 94268

29.11.06

“ALMIRÓN, LUIS RUBÉN c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557”.

(P.L.-F.-L.)

Ley 24.557. Comisiones Médicas. Facultades.

La omisión de la Comisión Médica Central de analizar el planteo de prescripción efectuado por la A.R.T., por considerar que es un tema ajeno a las facultades de ese organismo, se ajusta a derecho. Ello así, porque el planteo, de neta raigambre jurídica, no se encuentra comprendido dentro de la competencia derivada del título habilitante de un profesional médico. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S, Sala III

sent. int. 94268

29.11.06

“ALMIRÓN, LUIS RUBÉN c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557”.

(P.L.-F.-L.)

Ley 24.557. Reubicación laboral. Competencia.

La intervención de la Comisión Médica, tanto como la de la instancia judicial, por la índole de la acción especial ejercitada, se rige por las disposiciones de la L.R.T., debiéndose ajustar la competencia y el procedimiento a lo establecido por los arts. 21 y 46 punto I de la ley 24.557 y el Dec. 717/96 -modificado por el Dec. 491/97-. En ese contexto, la pretensión del accionante dirigida contra el empleador solicitando reubicación laboral a raíz de las secuelas del infortunio, llevaría a la justicia federal a inmiscuirse en cuestiones propias del contrato de trabajo que vincula a las partes, lo que excede el marco competencial previsto por el referido art. 46 de la L.R.T.

C.F.S.S., Sala III

sent. 116513

24.04.07

“NOVOA, JORGE LUIS c/ Liberty A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557”

(F.-P.L.-L.)

Ley 24.557. Empleador. Intervención en autos. Costas.

Tratándose de un empleador que dio cumplimiento a la obligación de asegurarse en los términos del pto. 3 del art. 2 de la ley 24.557, va de suyo que “la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la L.R.T. estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la S.R.T. y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas ‘aseguradoras de Riesgos

del Trabajo (ART) ...”, conforme lo establecido por la misma ley en el pto. 1 de su art. 26. Por ello, si con fundamento en lo expuesto, fue condenada la A.R.T. -en su condición de aseguradora- a brindar las prestaciones propias del sistema de cobertura de infortunios laborales, ha de concluirse que el empleador no ha de hacerse cargo de las mismas y, en consecuencia, su intervención en autos era inconducente, motivo por el cual, a su respecto, corresponde imponer las costas de ambas instancias por su orden (art. 68 C.P.C.C. y 46, pto. I de la ley 24.557).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116513

24.04.07

“NOVOA, JORGE LUIS c/ Liberty A.R.T. S.A: y otro s/Ley 24.557”

(F.-P.L.-L.)

Ley 24.557. Incapacidad. Enfermedad no incluida en el reclamo originario. Cuerpo Médico Forense.

Resulta atendible la impugnación que la A.R.T. formula del dictamen del Cuerpo Médico Forense que incursionó en un ámbito que excede el de la medida para mejor proveer oportunamente dispuesta por el tribunal (en el caso, orientada a esclarecer si la trabajadora padecía pérdida auditiva), puesto que la enfermedad de origen psicológico no había sido incluida en el reclamo originario, siendo recién introducida en la apelación deducida contra la resolución de la Comisión Médica local. En esas condiciones, descartado que la reclamante sufra de hipoacusia, carece de sustento sostener que la neurosis de angustia guarde relación causal directa con el trabajo. No obsta a ello la conclusión a que arriba el referido C.M.F. respecto a que la invalidez derivada de la patología psiquiátrica produce determinado grado de incapacidad en la peticionante.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115350

14.12.06

“KOLLEMBERGER, ANAHÍ c/ CNA A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557”

(F.-L.-P.L.)

Ley 24.557. Incapacidad laboral. Tabla de evaluación. Dec. 659/96. Planteo de inconstitucionalidad.

Los preceptos del Dec. 659/96 no afectan garantías constitucionales. Ello así, por cuanto al aprobar la “Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales”, garantiza la ponderación de los tres factores que manda incorporar la ley 24.557 y que son: la edad, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. Respecto del “tipo de actividad” toma como indicador más cercano el grado de dificultad que ocasiona al damnificado la realización de sus tareas habituales y, en cuanto a las “posibilidades de reubicación laboral”, se tiene en cuenta su recalificación. Añade la norma en cuestión que la ponderación de estos factores es una tareas que ha de abordarse caso por caso, razón por la cual, se encuentra resguardado el derecho de defensa del interesado. Desde otro punto de vista, las pautas fijadas por el legislador, si bien resultan opinables, son formas objetivas de ponderar otros factores incidentes en la incapacidad. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94675

26.12.06

“GALVÁN, RITA BENICIA c/ Gobierno de Catamarca s/Ley 24.557”

(L.-F.-P.L.)

Ley 24.557. Dec. 1278/00. Incapacidad. Enfermedad profesional.

El art. 6 de la ley 24.557, modificado por el Dec. 1278/00, en su pto. 2, incs. b) y c), contempla la posibilidad de declarar enfermedad profesional a una patología no incluida en el listado previsto en el inc. a) del mismo apartado. Por ello, resulta improcedente el fundamento esgrimido por la Comisión Médica Central para sustentar la calificación de enfermedad inculpable, descartando el carácter de enfermedad profesional afirmando, dogmáticamente, que la misma “no se encuentra incorporada” al listado. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94675

26.12.06

“GALVÁN, RITA BENICIA c/ Gobierno de Catamarca s/Ley 24.557”

(L.-F.-P.L.)

Ley 24.557. Prescripción.

No puede el trabajador una vez conocida la patología, dejar pasar el tiempo para hacer los reclamos necesarios, ya que cuenta para ello con un plazo legal de dos años que comienza a correr desde que este adquiere derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, desde que sufre el accidente y, una vez vencido el plazo, se considera que la acción ha prescrito, o sea que la obligación exigible pasa a convertirse en una obligación natural sin la posibilidad de acudir a los tribunales para su exigencia (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 02.12.03, "Blasco, Vivian Nery c/ Provincia A.R.T."). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Po-clava Lafuente. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S, Sala III

sent. int. 94268

29.11.06

"ALMIRÓN, LUIS RUBÉN c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557".

(P.L.-F.-L.)

Ley 24.557. Prescripción.

Conforme lo normado por los arts. 44 y 43 de la ley 24.557, debe concluirse que la acción entablada por el titular se hallaba prescrita, si al iniciar el trámite habían transcurrido más de dos años desde que se manifestara por primera la contingencia sufrida. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Laclau. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S, Sala III

sent. int. 94268

29.11.06

"ALMIRÓN, LUIS RUBÉN c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557".

(P.L.-F.-L.)

Ley 24.557. Prescripción.

Corresponde rechazar por extemporánea la defensa de prescripción opuesta por la A.R.T. ante la Comisión Médica Central, atento no haber sido planteada en la primera oportunidad procesal que tuvo a su alcance para hacerlo -en el caso, ante la Comisión Médica jurisdiccional, a la que concurrió la aseguradora representada por su médico, que nada dijo acerca de la excepción en tratamiento-. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S, Sala III

sent. int. 94268

29.11.06

"ALMIRÓN, LUIS RUBÉN c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557".

(P.L.-F.-L.)

Medida cautelar. Concesión. Trámite posterior. Competencia.

Teniendo en cuenta que la peticionante inició demanda requiriendo una medida cautelar -la que fue oportunamente concedida y quedó firme-, no procede, en razón del grado, que la C.F.S.S. continúe con su trámite. En tal sentido debe tenerse presente que "... sólo si el actor hubiese acudido a la C.M.C. y obtenido una respuesta negativa, se justificaría la intervención del Tribunal de Alzada como organismo de revisión ..." (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 18.02.99, "Heredia, Jorge Guillermo c/ Provincia A.R.T."). En consecuencia, corresponde devolver las actuaciones al Juzgado de origen a fin de que su titular resuma la competencia oportunamente declinada, y continúe con el trámite de la causa, procediendo a su archivo.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64382

22.02.07

"FULLONE, PATRICIA CELIA c/ CAN A.R.T. S.A. s/Medidas cautelares"

(H.-D.-F.)

Prescripción. Plazo. Cómputo.

No puede el trabajador, una vez conocida la patología, dejar pasar el tiempo para hacer los reclamos necesarios, ya que para ello cuenta con un plazo legal de dos años que comienza a correr desde que adquiere el derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, desde que sufre el accidente y, una vez vencido el plazo, se considera que la acción ha prescrito, o sea, que la obligación exigible pasa a convertirse en una obligación natural sin la posibilidad de acudir a los tribunales para su exigencia (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 02.12.03, "Blasco, Vivian Nery c/ Provincia A.R.T. S.A."). Tal criterio resulta aplicable al caso en análisis, donde el peticionante refiere a dolores articulares que no permitieron diagnosticar su afección hasta que derivó en silicosis, pero que tuvieron principio de

manifestación más de dos años antes de que formulara la denuncia y la solicitud de intervención de la comisión médica. Por ello, habiendo la ART opuesto la defensa oportunamente, corresponde declarar prescripta la acción (art. 44 ley 24.557). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115746

08.02.07

“DARDANS, MIGUEL JOSÉ c/ CNA A.R.T. S.A. s/Ley 24.557”

(P.L.-L.-F.)

Prescripción. Plazo. Cómputo.

Las expresiones que anclaban el punto de partida de la prescripción liberatoria a partir de que la suma debió abonarse, o proveerse asistencia médica y farmacológica o el aparato de prótesis y ortopedia, o de la consolidación del daño, o de la muerte del trabajador o de su cese laboral contenidas en la ley 24.028 -al igual que la que remite a la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada que contiene la L.R.T.-, obligan a establecer su inicio en cada caso concreto a resolver en función de sus particularidades, por cuanto, en lo que respecta a la empleada por la ley 24.557, nada puede exigir la persona afectada y nada le es debido, si no ejerce su derecho mediante el reclamo con arreglo al procedimiento vigente, lo que recién está en condiciones de hacer a partir de su toma de conocimiento de la incapacidad que padece y su posible relación con el trabajo. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115746

08.02.07

“DARDANS, MIGUEL JOSÉ c/ CNA A.R.T. S.A. s/Ley 24.557”

(P.L.-L.-F.)

Prescripción. Plazo. Cómputo.

Tratándose la prescripción de un medio de extinción de la acción, su cómputo ha de comenzar a correr desde que ésta pudo ejercerse, independientemente del derecho o relación jurídica que le dio origen (cfr. Llambías, “Tratado de Derecho Civil”, Tº II, págs. 679/680). En ese sentido, cabe agregar que el actor no estuvo en condiciones de accionar en reclamo de su derecho sino a partir del momento en que el perjuicio sufrido estuvo definitivamente determinado, circunstancia que sólo cabe tener por configurada desde adquirió cabal conocimiento del grado de incapacidad resultante de su enfermedad (cfr. C.N.A.T., Sala III, 31.07.88, “Gómez, L. P. c/ M.C.B.A.”; S.C.J.B.A., sent. del 01.03.94, “Montovani, Alfredo Norberto c/ Somisa”). (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115746

08.02.07

“DARDANS, MIGUEL JOSÉ c/ CNA A.R.T. S.A. s/Ley 24.557”

(P.L.-L.-F.)

Prescripción. Plazo. Cómputo.

Para el cálculo del plazo de prescripción, corresponde arrancar desde aquel hecho que precisamente determina la incapacidad en forma fehaciente (Fallos 306:337), lo que requiere de una apreciación objetiva del grado de incapacidad que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de su invalidez por parte del trabajador, sin que pueda suplirse esta exigencia sobre bases inciertas que no demuestran de manera concluyente que el recurrente dejó transcurrir los plazos legales consciente de las afectaciones que lo aquejaban (Fallos 308:2007). (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115746

08.02.07

“DARDANS, MIGUEL JOSÉ c/ CNA A.R.T. S.A. s/Ley 24.557”

(P.L.-L.-F.)

Prescripción. Plazo. Cómputo.

Para precisar cuando el trabajador adquirió el cabal conocimiento de la invalidez producida por la enfermedad profesional que padece, resultan de utilidad las fundadas consideraciones médicas formuladas por la Comisión Médica Central, máxime si la ART no las rebatió adecuadamente, ni existen evidencias probatorias que las contradigan. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115746
08.02.07
“DARDANS, MIGUEL JOSÉ c/ CNA A.R.T. S.A. s/Ley 24.557”
(P.L.-L.-F.)

SEGURO DE RETIRO

Rescate anticipado. Moneda extranjera. Dec. 214/02. Ley 25.561. Res. S.S.N. Nº 28592. Inconstitucionalidad.

Corresponde confirmar la sentencia de grado que declaró la inconstitucionalidad del Dec. 214/02, de la ley 25.561 y de la Res. S.S.N. Nº 28592, y ordenó a la accionada a abonar al titular la suma correspondiente al rescate anticipado en dólares estadounidenses correspondiente al seguro individual de retiro pactado. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que corresponde el fiel cumplimiento del contrato pactado, pues la prescripción establecida en las normas en crisis violentan inequitativa y sustancialmente el beneficio de Seguridad Social obtenido por aquél, alterando el goce del mismo adquirido al amparo de la legislación vigente al momento de su concertación. En consecuencia, siguiendo vigente la obligación originariamente pactada, y no resultando la situación planteada ajena a aquella que las partes verosíblemente pudieron tener en cuenta al contratar previendo especialmente tal situación, ha de estarse a la aplicación irrestricta de las pautas contractuales, las que resultan ajenas al planteo de imprevisibilidad, pues es aquello mismo que estaban previendo al pactar las obligaciones en moneda extranjera (cfr. C.F.S.S., Sala II, “Cambra, Graciela Mercedes c/ HSBC – New York Life Cía. de Retiro S.A.”; “Pinnola, Juan Carlos c/ HSBC – New York Life Cía. de Retiro S.A.”; “Espínola, Maricel Luján c/ HSBC – New York Life Cía. de Retiro S.A.”, entre otros).

C.F.S.S., Sala II

sent. 120076

15.02.07

“WONS, BERNARDO c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. s/Incidente”
(D.-H.-F.)

SERVICIO EXTERIOR, PERSONAL DEL

Ley 22.731. Acción de amparo. Haberes previsionales. Topes. Ley 24.463, art. 9.

Si el beneficio de jubilación original fue otorgado bajo el amparo de la ley 22.731, que fijaba un haber de pasividad equivalente al 85% del de actividad y sin topes máximos, dicha normativa debe ser respetada por la Administración Pública, toda vez que ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la ley suprema (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.03.94, “Jawetz, Alberto”). Admitir la tesis contraria llevaría a una confiscación del haber de pasividad en grado que sería lesivo de derechos adquiridos, a la vez que atentaría contra la naturaleza especial del régimen en cuestión. En consecuencia, corresponde declarar no aplicable la quita operada por el art. 9 de la ley 24.463 -modificado por el art. 25 de la ley 25.239-, atento la índole del beneficio de que se trata y el hecho de encontrarse acreditada la lesión inferida por aplicación de dicha norma. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115503

26.12.06

“CAPIEL, LILIANA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”
(L.-P.L.-F.)

Ley 22.731. Acción de amparo. Haberes previsionales. Topes. Ley 24.463, art. 9.

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo por la que se pretende obtener la

eximición de la aplicación de los topes y reducciones porcentuales de haberes dispuestos por el art. 9 de la ley 24.463 -modificado por el art. 25 de la ley 25.239-, si ambas partes pudieron expresar adecuadamente sus posturas sobre la cuestión litigiosa a resolver, en pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio y con total respaldo de debido proceso. Ello así, máxime cuando el perjuicio sufrido por quien demanda en virtud de la merma en cuestión, resulta palmariamente acreditado con la constancia de pago acompañada, cuya autenticidad no fue desconocida por el organismo. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115503

26.12.06

“CAPIEL, LILIANA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(L.-P.L.-F.)

Ley 22.731. Acción de amparo. Haberes previsionales. Topes. Ley 24.463, art. 9.
Por sentencia dictada en la causa “Fauvety, Juan Manuel” (10.04.01) el Tribunal declaró no aplicable a una prestación otorgada al amparo de un régimen especial el dispositivo del art. 9 de la ley 24.463. Más recientemente, se sostuvo que “si el beneficio de jubilación original fue otorgado bajo el amparo de la ley 22.731, que fijaba un haber de pasividad equivalente al 85% del de actividad y sin topes máximos, dicha normativa debe ser respetada por la Administración Pública, toda vez que ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la ley suprema (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.03.94, “Jawetz, Alberto”). Admitir la tesis contraria llevaría a una confiscación del haber de pasividad en grado que sería lesivo de derechos adquiridos, a la vez que atentaría contra la naturaleza especial del régimen en cuestión” (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 13.04.04, “Müller, Hans Otto”). La misma doctrina es compartida por la Sala II de la Cámara (cfr. “Bozzola, Antonio Félix y otros”, sent. n° 82624, y “Martino, Arnaldo Domingo y otros”, sent. n° 96357) y avalada por la C.S.J.N. (cfr. Fallos 324:281 -res. del 13.02.01- según la cual no son aplicables al régimen de Magistrados y Funcionarios las leyes 24.463 y 25.239, modificatorias del régimen genera de la ley 24.241; y el fallo recaído en autos “Martínez, Juan”, sent. del 24.04.03). En esas condiciones, corresponde hacer lugar al reclamo por la no aplicación de la quita operada en virtud de la normativa mencionada. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115503

26.12.06

“CAPIEL, LILIANA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(L.-P.L.-F.)

Ley 22.731. Acción de amparo. Haberes previsionales. Topes. Ley 24.463, art. 9.
Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la acción de amparo, si el titular tenía a su disposición la vía procesal prevista por el art. 15 de la ley 24.463, que regula la impugnación judicial de las resoluciones adoptadas por la A.N.Se.S., en la cual podría haber hecho valer sus argumentaciones a fin de obtener el reconocimiento del derecho en el que basa su petición. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 115503

26.12.06

“CAPIEL, LILIANA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(L.-P.L.-F.)

Ley 22.731. Servicios. Destino peligroso o insalubre. Cómputo.

El art. 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación establece un cómputo doble en cuanto al tiempo de servicios y no un aporte diferenciado. Ello encuentra su fundamento en lo expresado por el art. 8 de la ley 22.731 que prescribe que la prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos e insalubre será computado doble a los fines de acreditar el requisito de 15 años continuos o 20 discontinuos en el Servicio Exterior de la Nación exigido en el art. 3, inc. b) párrafo primero (cfr. en igual sentido, C.F.S.S., Sala III, “De la Plaza, Guillermo c/ E.N. – Ministerio Relaciones Exteriores y Culto”)

C.F.S.S., Sala II

sent. 120502

26.03.07

“MARTÍNEZ CASTRO, HÉCTOR ÁNGEL c/ E. N. – Ministerio Relaciones Exteriores y Culto”
(D.-F.-H.)

Ley 22.731. Servicios. Doble cómputo. Aportes.

El doble cómputo de los servicios prestados en las condiciones del régimen especial previsto por el art. 8 de la ley 22.731, en concordancia con los arts. 22 inc. g) y 75 de la ley 20.957, no permiten inferir -per se- que por un mismo y único período de servicios prestados deban duplicarse los aportes. Una interpretación en contrario supondría admitir el establecimiento -tácito o implícito- de un tributo con destino al financiamiento del régimen previsional que, como tal, ha de ser expresamente impuesto por la ley, como acontece en otros regímenes especiales (vbgr. art. 31 de la ley 24.018), lo que en modo alguno se desprende de las disposiciones antes citadas.

C.F.S.S., Sala III

sent. 115812

13.02.07

“CARIDE, FEDERICO VICENTE c/ Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto s/Reajustes Varios”
(F.-P.L.-L.)

SERVICIOS

PRUEBA

Valoración.

Cuando se trata de acreditar la prestación de servicios de antigua data, la falta de prueba documental no puede desvirtuar la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales, máxime cuando éstas corresponden a personas que fueron compañeros de trabajo del peticionante, es decir, que tienen conocimiento directo y personal de sus afirmaciones.

C.F.S.S., Sala I

sent. 119969

10.11.06

“CUELLO, ROBERTO NICOLÁS c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias”
(Ch.-D.)

Valoración.

La valoración que el organismo efectúa sobre las pruebas aportadas con el objeto de acreditar servicios debe realizarse con razonabilidad, para que sus pronunciamientos produzcan efectos jurídicos válidos.

C.F.S.S., Sala I

sent. 119969

10.11.06

“CUELLO, ROBERTO NICOLÁS c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias”
(Ch.-D.)

II- PROCEDIMIENTO

ACCIÓN DE AMPARO

Pago del derecho fijo. CASSABA. Ley 1.181 de la Cdad. de Bs. Aires. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

Es competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal la demanda tendiente a que se decrete la incompetencia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar leyes de alcance nacional o federal, como la 1.181 -de creación de la Caja de Seguridad Social de Abogados de Buenos Aires (CASSABA)-, pues no se trata de controvertir la aplicación de un régimen previsional, sino que se cuestionan las facultades administrativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar leyes dentro de ámbitos que los accionados entienden reservados al Estado Nacional, materia que corresponde netamente al fuero señalado (cfr. dictamen de la Procuración General al que remite el fallo del Superior Tribunal en los autos "Rizzo, Jorge Gabriel y otros c/ E.N. - Ministerio de Trabajo", sent. del 03.05.06).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 63850

08.11.06

"GONZÁLEZ, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN c/ Estado Nacional y otros s/Amparos y sumarísimos"

(H.-F.-L.)

Pago del derecho fijo. CASSABA. Ley 1.181 de la Cdad. de Bs. Aires. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

Advirtiendo que el quicio de la cuestión a resolver se circunscribe a destrabar un conflicto entre dos leyes, una de carácter nacional (24.241) y otra de tipo local como lo es la ley 1.181, creadora de la CASSABA, y sin desconocer que desde fueros diversos se emitieron pronunciamientos sobre el tema referido, corresponde concluir que el objeto de la pretensión no se encuentra ligada a ninguna de las causas mencionadas en el art. 2 de la ley 24.655, y por ello se debe declarar la incompetencia del Fuero de la Seguridad para entender en los actuados.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 63850

08.11.06

"GONZÁLEZ, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN c/ Estado Nacional y otros s/Amparos y sumarísimos"

(H.-F.-L.)

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Régimen de capitalización. A.F.J.P. Títulos de la deuda pública. Dec. 1375/04. Planteo de inconstitucionalidad.

Debe confirmarse la decisión de la anterior instancia que no hizo lugar a la acción de amparo iniciada por el peticionante que, en su carácter de afiliado al régimen de capitalización previsto en el S.I.J.P., pretende obtener la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 1375/04. Ello así, por cuanto no se encuentra acreditado la existencia de un accionar manifiestamente ilegal o arbitrario por parte de la accionada que habilite la vía de amparo intentada, sino, en todo caso, un comportamiento que pone de manifiesto el ejercicio de una atribución constitucional como lo es el dictado de un decreto de necesidad y urgencia motivado en la situación de emergencia declarada por el Poder Legislativo mediante la ley 25.561. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94862

22.02.07

"HANSEN, MARÍA CRISTINA c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/Amparos y sumarísimos"

(F.-P.L.-L.)

ACCIÓN DECLARATIVA

Costas. Ley 24.463, art. 21.

El art. 21 de la ley 24.463 -que se encuentra inserto en el capítulo II, que regula el procedimiento a seguir para la impugnación judicial de resoluciones de A.N.Se.S. previsto en el art. 15 de la misma ley-, constituye una excepción al principio general establecido por el art. 68 del C.P.C.C., cuya interpretación y aplicación ha de regirse por un criterio restrictivo. En consecuencia, la cláusula en cuestión no resulta aplicable a las acciones meramente declarativas, por cuanto se trata de un procedimiento ajeno al previsto por el citado art. 15. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau voto en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116395

17.04.07

“FRÍAS, MARTA ESTHER c/ Poder Ejecutivo Nacional s/Acción meramente declarativa”

(L.-F.-P.L.)

Costas. Ley 24.463, art. 21.

La claridad del texto del art. 21 de la ley 24.463 no deja lugar a dudas que, merced al mismo, se introduce una reforma en la normativa que regía la materia, toda vez que el citado artículo no reconoce excepción alguna al principio de que las costas sean por su orden; resultando evidente que el Legislador ha privilegiado sobre el interés del particular afectado por la demora, el interés de la masa de beneficiarios del sistema previsional en su conjunto, puesto que para el pago de las costas se sustrae una cantidad de dinero del fondo común utilizado para pagar los diversos beneficios que el sistema acuerda. La solución adoptada podrá ser materia de objeciones, pero la misma es propia de una valoración política a la que ha de sujetarse el Magistrado, puesto que ella, dentro de nuestro ordenamiento constitucional, es privativa del Legislador. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 116395

17.04.07

“FRÍAS, MARTA ESTHER c/ Poder Ejecutivo Nacional s/Acción meramente declarativa”

(L.-F.-P.L.)

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Carencia de recursos. Acreditación.

El otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos se halla condicionado a que el peticionario demuestre los extremos que acrediten la situación económica que alega e imposibilitan afrontar las erogaciones judiciales; no siendo exigible la demostración de un estado de indigencia, pero sí de su carencia de recursos suficientes y la imposibilidad de procurárselos (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 07.06.89, “Franzini, Haydée c/ Manzitti”).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64066

01.12.06

“EBERT, MARCELO OSCAR Y OTRO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda”

(L.-H.-F.)

Carencia de recursos. Acreditación.

A fin de conceder el beneficio de litigar sin gastos, entre uno y otro de los extremos económicos se encuentra una enorme gama de habitantes que deben demostrar y crear la convicción en el juez de que, a pesar de no encontrarse en pésimas ni muy buenas condiciones, afrontar los gastos de justicia les significaría realizar una erogación que incidiría desfavorablemente y pesadamente en su situación, a punto tal de tener que abandonar la acción por carencia de recursos necesarios (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 06.04.90, “Cuevas, R. L. c/ Gemmati, C. A. y otros”; ídem, Sala D, sent. del 12.04.91, “D’Oria de Bustos, Violeta A. c/

Zacco, Nicolás”).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64066

01.12.06

“EBERT, MARCELO OSCAR Y OTRO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda”

(L.-H.-F.)

Carencia de recursos. Acreditación.

No puede privarse el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos a quien, prima facie, acredita encuadrarse en los presupuestos contemplados para su procedencia. Esto tiene el fin de evitar la frustración del derecho del justiciable amparado constitucionalmente ... no encuadra una interpretación estricta del beneficio en todo supuesto en que no concurra una indigencia absoluta, pues ello equivaldría a una frustración a priori de las aspiraciones de justicia del interesado (cfr. Omar Luis Díaz Solimine, "Beneficio de litigar sin gastos", pág. 3).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64066

01.12.06

“EBERT, MARCELO OSCAR Y OTRO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda”

(L.-H.-F.)

Carencia de recursos. Acreditación.

La prueba aportada al efecto de obtener el beneficio de litigar sin gastos debe analizarse con amplitud de criterio, sin perderse de vista que la acreditación de los recursos para afrontar las erogaciones del litigio va de la mano con la importancia y exigencia económica involucrada en el mismo. En tal sentido, debe primar la garantía constitucional de defensa en juicio.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64066

01.12.06

“EBERT, MARCELO OSCAR Y OTRO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda”

(L.-H.-F.)

Carencia de recursos. Acreditación.

No es imprescindible producir una prueba acabada que otorgue un grado absoluto de certeza sobre la probanza invocada, sino que basta que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar, razonablemente, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su otorgamiento (cfr. C.S.J.N., sent. del 08.08.00, “Ramos, Graciela Petrona c/ Córdoba, Pcia. de y otros”).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64066

01.12.06

“EBERT, MARCELO OSCAR Y OTRO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda”

(L.-H.-F.)

Competencia.

En virtud de lo establecido en el art. 6, inc. 5 del C.P.C.C., y por razones de economía y conveniencia práctica, resulta aconsejable que el Tribunal que interviene en el proceso principal lo haga también en el incidente de petición del beneficio de litigar sin gastos, en razón de su vinculación directa con aquél. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94674

26.12.06

“SANDOVAL, VÍCTOR c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Gendarmería Nacional s/Beneficio de litigar sin gastos”

(L.-P.L.-F.)

Competencia.

La determinación de la competencia comprende, principalmente, el análisis preliminar del contenido y naturaleza de la pretensión deducida, desde un ángulo de mira objetivo y haciendo mérito de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida, en base a los hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de

acuerdo con el encuadre normativo acordado a la acción por el actor (C.N.A.Civ., Sala A, “Odiutec S.A. c/ Suárez, Juan C.”, sent. del 02.09.96). Por ello, desprendiéndose del escrito de demanda que el accionante solicita la modificación del retiro militar del que goza, y en atención a que los Juzgados Federales de la Seguridad Social creados por la ley 24.655 tienen competencia para conocer en tales asuntos, pues su aptitud jurisdiccional se encuentra ceñida a las “demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” (inc. c del art. 2, ley citada), corresponde remitir la causa al magistrado de primera instancia de éste fuero que intervino en primer término. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94674

26.12.06

“SANDOVAL, VÍCTOR c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Gendarmería Nacional s/Beneficio de litigar sin gastos”
(L.-P.L.-F.)

Tasa de justicia. Improcedencia. Impugnación de deuda.

El ordenamiento de forma ha dejado librada a la valoración del juez, conforme las circunstancias del caso y la época, el determinar cuando ciertas personas carecen de medios suficientes para afrontar el pago de los gastos causídicos que pueda ocasionar un pleito concreto (cfr. Enrique Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado” T. I, pág. 475; Morello-Sosa-Berozonce, “Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. Aires y de la Nación...”, T. II-B, págs. 281/282 y sus citas; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, “Galeano, Adolfo c/ Jefe del Estado Mayor Gral. del Ejército”). En consecuencia, no corresponde hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos solicitado cuando el monto de la tasa a oblar no resulta desproporcionada con la capacidad económica de la recurrente (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.07.01, “Wasserman, León”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 120222

07.12.06

“LABOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(M.-Ch.)

CADUCIDAD DE INSTANCIA

Declaración de oficio. Interpretación. Criterio restrictivo.

El juez en una materia tan delicada como la seguridad social, no puede ni debe presumir de oficio el abandono voluntario o renuncia de la instancia, por lo que una decisión que implique desligarse del proceso debe subordinarse a que esa presunción adquiera veracidad y certeza, llevándolo al convencimiento de que la conducta omisiva del litigante implica un desistimiento tácito del mismo, obstaculizando la marcha regular de la causa e impidiendo al Tribunal abocarse a su definición normal. Ese desinterés sólo se hará palpable, con escaso o nulo margen de duda, ante el incumplimiento de la intimación que a dichos fines debe realizarse. En tales condiciones, y sólo entonces, la caducidad debería ser dictada. Por ello, en atención al criterio restrictivo de interpretación que rige el instituto de marras, y ante las excepcionales circunstancias existentes en autos (de donde surge sin dudas el interés de la parte de proseguir con su trámite, y que el lapso de inactividad procesal que motivara la declaración de oficio de la caducidad fue subsanada con actos procesales posteriores), corresponde revocar la resolución recurrida.

C.F.S.S, Sala II

sent. int. 64080

05.12.06

“PÉREZ, ESTELA NORMA c/ Ministerio de Salud y Acción Social s/Amparo por mora de la administración”
(F.-H.)

Plazo. Suspensión. Acuerdo de partes.

La existencia de un acuerdo entre las partes sobre la suspensión de los términos procesales, torna improcedente la declaración de caducidad de la instancia en

virtud de lo dispuesto por el art. 311 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64294

15.02.07

“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE AGUAS, GASEOSAS Y AFINES c/ Negri Hnos. y Cía. S.A.I.C. s/Ejecución ley 23.660”
(F.-D.-H.)

COMPETENCIA

Indemnización por daños y perjuicios. Incompetencia del fuero de la Seguridad Social.

Si bien la disposición normativa del art. 2 de la ley 24.655 ha sido morigerada tanto doctrinal como jurisprudencialmente, admitiéndose supuestos competenciales que no fueron específicamente considerados por el legislador, no encuadra dentro del marco genérico de competencia del fuero de la Seguridad Social la pretensión del pago de una indemnización por daños y perjuicios derivada del accionar de la A.N.Se.S. sustentada en normas de derecho civil, ya que aún reconociendo su causa en una obligación previsional, escapa a la competencia del fuero en tanto no se funda en normas de seguridad social -C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.09.03, “Zicarelli, Noemí Nora”-. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94601

26.12.06

“LUZZI, JUAN ANTONIO c/ Estado Nacional – A.N.Se.S. s/Daños y perjuicios”
(L.-F.-P.L.)

Planteo de inconstitucionalidad. Leyes provinciales. Incompetencia de la justicia federal.

No corresponde a la justicia federal abocarse al conocimiento de la pretensión por la que se persigue la declaración de inconstitucionalidad del art. 18 del Reglamento de C.A.S.A. (Medicina y Seguridad Social) de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires, en cuanto impone una deducción sobre sus haberes previsionales que considera confiscatoria. Ello así, porque la justicia federal es incompetente para juzgar la validez de las leyes provinciales y de los procedimientos de los funcionarios encargados de su cumplimiento, con la sola excepción de los casos en que una disposición constitucional autorice expresamente el conocimiento o que se trate de una violación de los preceptos de la C.N., de las leyes y tratados sancionados por el Congreso (Fallos 7:373; 102:436; 9:219), máxime cuando la voluntad de las partes no puede conceder a los poderes públicos mayores facultades que las que la Constitución les ha otorgado (Fallos 10:177; 12:7, 233 y 488; 13:161 y 392; 146:49; 47:232; 27:449; 28:78). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68319

23.11.06

“BERGER, JORGE LÁZARO SANTIAGO c/ C.A.S.A.P.B.A. s/Inconstitucionalidades varias”
(M.-Ch.-D.)

COSTAS

Sentencia. Silencio. Imposición al vencido.

Sin desconocer que distintos autores sostienen una postura contraria, razones de jerarquía institucional y economía procesal llevan a adoptar el criterio sentado por el Alto Tribunal al sostener que, ante el silencio de la sentencia en materia de costas, debe entenderse que las mismas se imponen al vencido, pues sólo puede eximirse del principio general, si hay mérito para ello, mediante pronunciamiento expreso acerca de dicho mérito, bajo pena de nulidad (cfr. C.S.J.N., sent. del

30.12.05, "Las Varillas Gas S.A. s/ E.N.")
C.F.S.S., Sala II
sent. int. 64435
05.03.07
"BARRIOS, ESPERANZA c/ E.N. – A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos"
(D.-F.-H.)

DEMANDA

Contestación. Plazo. A.N.Se.S. Organismo descentralizado. Art. 388, 2da. parte, C.P.C.C.

La A.N.Se.S. fue creada por Dec. 2741/91 como organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo a su cargo la administración del Sistema Único de la Seguridad Social, goza de autarquía para el cumplimiento de un fin público e integra el cuerpo político de la Nación. En virtud de ello, puede invocar en su beneficio las prescripciones del art. 338, 2da. parte, del C.P.C.C. en cuanto establece que "cuando la parte demandada fuere la Nación, una Provincia o una Municipalidad, el plazo para comparecer y contestar demanda será de sesenta días".

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 64004
01.12.06
"TORRES TRONCOSO, ILDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(F.-L.-H.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Bonos. Consolidación de deuda. Decreto de necesidad y urgencia 1873/02.

La situación de emergencia económica financiera declarada en nuestro país con la ley 25.561 produjo una alteración en la situación relativa a la deuda pública consolidada no cancelada hasta ese momento, cuando el acreedor había optado por recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses. En efecto, tales créditos quedaron comprendidos en las disposiciones del Decreto de necesidad y urgencia 1873/02 que, por un lado, dispuso convertir a pesos los bonos adeudados en moneda extranjera en las condiciones previstas en el Dec. 471/02, y por otra parte estableció que la cancelación definitiva de las obligaciones se efectuaría mediante la entrega de un nuevo bono de deuda pública previsional en moneda nacional, cuya emisión se dispuso a partir del 02.02.2002, con un plazo de 7 años y 11 meses, cuyo vencimiento operará el 03.01.2010 (cfr. arts. 1, 2 y 7 inc. b del Dec. citado). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 94876
23.02.07
"REBECCHI, OSCAR ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"
(P.L.-F.-L.)

Bonos. Consolidación de deuda. Decreto de necesidad y urgencia 1873/02.

El Alto Tribunal, en una causa en la que se planteaba una temática similar a la debatida en autos, puso de relieve que la ley de consolidación 23.982 no estableció norma alguna que permita exceptuar de la entrega de bonos a las personas de edad avanzada pues, por el contrario, sólo estableció una prioridad de pago para los "acreedores de mayor edad" (cfr. considerando 9 in re "Iachemet, María Luisa c/ Armada Argentina"). Sin embargo, en dicho precedente la Corte Suprema concluyó que la referida ley de consolidación no respeta la exigencia de que la restricción al principio constitucional de la cosa juzgada sea sólo "temporal", de modo de no "degradar su sustancia" si se la aplica a una jubilada de 93 años de edad, pues conforme al desenvolvimiento natural de los hechos, resulta virtualmente imposible que llegue a percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial pasado en autoridad de cosa juzgada. Estas conclusiones permiten afirmar que las circunstancias y normativas del caso de autos (los

créditos del titular que quedaron comprendidos en las disposiciones del Decreto de necesidad y urgencia 1873/02), determinan que el pago mediante bonos de la deuda reclamada ocasiona idéntico perjuicio en desmedro de la cosa juzgada judicial y del derecho de propiedad (art. 17 C.N.). Ello así, por cuanto se trata de un crédito de carácter alimentario reconocido en sede judicial por sentencia definitiva (en el caso, dictada en 1990), cuya ejecución fue iniciada cuatro años más tarde y su cancelación está prevista efectuar sólo a partir del 03.01.2010, vale decir, en un lapso posterior a los 20 años del reconocimiento de la acreencia, y en un momento en que el titular de la causa alcanzaría la edad de 91 años. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94876

23.02.07

“REBECCHI, OSCAR ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(P.L.-F.-L.)

Bonos. Consolidación de deuda. Decreto de necesidad y urgencia 1873/02.

No cabe admitir la aplicación de la normativa cuestionada por el titular (Decreto de necesidad y urgencia 1873/02), toda vez que un criterio contrario importaría consagrar una verdadera denegación de justicia y una afectación de los derechos a la seguridad social a los que la Carga Magna le reconoció carácter de integral e irrenunciables (art. 14 bis), máxime cuando desde antiguo, los beneficios previsionales fueron asimilados al derecho alimentario en razón de la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria (cfr. C.S.J.N., sent. del 29.03.05, “Itzcovich, Mabel”). Además, dicha línea de pensamiento guarda coherencia con la propia normativa legal que determinó la exclusión de la consolidación prevista en la ley 25.344 para aquellas personas que hubiesen cumplido 80 años al momento de que se hubiese reconocido un crédito a su favor (art. 8 Dec. 1116/00), y que el propio organismo recogió en su normativa reglamentaria de esa especie de acreencias (cfr. Res. A.N.Se.S. 562/02). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94876

23.02.07

“REBECCHI, OSCAR ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(P.L.-F.-L.)

Consolidación de deuda. Exclusión. Edad. Ley 26.078, art. 29. Resoluciones 1061/01, 562/02 y 12/04.

Las disposiciones que rigen la exclusión del régimen de consolidación de deuda para quienes hayan cumplido 80 años de edad, establecen que deberán contar con dicha edad “al momento de serle reconocido por pronunciamiento firme su crédito” (cfr. art. 29 ley 26.078; art. 1 Res. 1061/01; art. 1, Res. 562/02 y Res. 12/04). Esto último no surge de la sentencia de reajuste -en la cual sólo se reconoce el derecho al mismo y se dan las pautas para practicar la liquidación del haber inicial y las correspondientes retroactividades-, sino de la que aprueba la liquidación mencionada. En consecuencia, desprendiéndose de las constancias de autos que la titular contaba con más de 80 años de edad al momento de quedar firme la liquidación referida, corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que la excluyó del régimen de consolidación.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68674

16.02.07

“PADUAN, CARDENIO GENEROSO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(Ch.-M.-D.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

Lo decidido en la causa “Della Savia, Haydee Iolanda” (sent. del 22.08.06), donde el suscripto sostuvo que era inaplicable la ley 25.827 a aquellos supuestos que cuentan con una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada con anterioridad al 31.12.01 y cuya ejecución se persigue, validando así la imperatividad de la cosa juzgada, en nada se modifica si la decisión judicial que se ejecuta es resultado de pronunciamientos de diversas instancias judiciales, alguno de los cuales fue posterior a la fecha señalada por la norma en cuestión. Ello así, porque la fecha de sentencia, en este tipo de juicios, no determina el nacimiento de la obligación de pago y como se cancelará, sino que, por el contrario, define con precisión desde cuando está en mora y, por tal, fija desde qué momento ha de

calcularse el capital y sus accesorios. En ese orden, la sentencia marca también el derecho aplicable a la situación, a la cual se someten las partes. De allí que toda normativa que persiga, en razón de un proceso de reestructuración de la deuda, alterar una vez más, el estado de cosas originariamente previsto, y ello por decisión del propio deudor -en el caso, el Estado Nacional-, es irrazonable y arbitraria. (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

El origen del crédito reconocido al titular por la sentencia que se ejecuta (derecho al reajuste del haber previsional) no nace con la misma, sino que el decisorio judicial es corolario de un largo proceso, muy anterior a la fecha de corte que señala la ley 25.827. Por ello, encontrándose el Estado en mora en el cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, decisión cuya ejecución debió ser acatada con arreglo a las normas de emergencia dictadas en su oportunidad, ha de concluirse que las modificaciones legislativas respecto a pautas de cumplimiento, resultan irrazonables. (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

La contingencia de una sentencia judicial declarativa no puede ser condicionante de la metodología de pago, más aún cuando el derecho tiene su fuente y origen en situaciones de larga data. En consecuencia, en tanto el organismo entienda aplicable al caso las disposiciones de la ley 25.827, no cabe sino declarar la inconstitucionalidad de sus arts. 64, 2do. párrafo y 66, inc. b). (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

La interpretación de la ley consiste en verificar el sentido de la norma interpretada, de modo que se le de pleno efecto a la intención del Legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 255:1925; 297:142; L.L. 1977-C-455). (Del voto de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

El Alto Tribunal ha impuesto a los jueces en el proceso de leal aplicación de la ley, formular una razonable y discreta interpretación de las normas, armonizándolas entre sí (Fallos 256M732; 253:267), puesto que si bien en dicha indagación no cabe prescindir de la palabra de la ley, tampoco cabe atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere (Fallos 244:129; 241:227; L.L. 203-101; 94-191). Ello es así, en la medida que no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho, en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzcan a resultados concretos que no armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica, incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función es-

pecífica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de uno y otros no se compadece con la misión de administrar justicia (cfr. doctrina de Fallos 312:111 y sus citas). (Del voto de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

De lo dispuesto por los arts. 64, segundo párrafo, y 66, inc. b) de la ley 25.827, se puede inferir que constituyen un dispositivo que no sólo no armoniza con el resto del ordenamiento jurídico al que está destinado a insertar, sino que produce un grave efecto distorsivo en su armonía, toda vez que de aceptarse su virtualidad jurídica quedaría neutralizada la eficacia de los derechos reconocidos al peticionante, a través de la sentencia judicial y de las leyes de emergencia y de la misma ley de presupuesto que reconoce los efectos de los dos artículos señalados. Ello no implica desconocer la crisis económica en la cual estuvo inmersa nuestra República, ni cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medios paliativos por parte del Estado. Pero a su vez tampoco se puede admitir, a primera vista, la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud señalada. Máxime cuando ha existido en un breve período una profusión de normas sobre el tema que, en algunos casos, propender a la fijación de pautas claras ha generado un inédito y prolongado estado de incertidumbre. (Del voto de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

La C.S.J.N. ha expresado en reiteradas oportunidades que el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos 136:161; 313:1513; 517:1462). Asimismo, ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otros (Fallos 243:467), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos 238:76). En esos casos, el Poder Ejecutivo está facultada para promulgar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable y reconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución. No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos 171:79), toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos 238:76). (Del voto de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

El derecho de propiedad, como los demás derechos tutelados por nuestra Carta Magna, se encuentra sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. No obstante, el poder de reglamentación del derecho sustancial no admite consentir la posibilidad de su invalidación, más aún si nos encontramos ante una prestación de carácter previsional, donde el elemento temporal adquiere proporciones considerables dada la edad y características particulares del afiliado reclamante. (Del voto de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”
(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

La restricción que pone el Estado a ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad (Fallos 243:467; 323:1556). En ese sentido, si bien es cierto que acontecimientos extraordinarios habilitan remedios extraordinarios, los mecanismos ideados para suspender la emergencia están sujetos a un límite y este es su razonabilidad, con la consiguiente imposibilidad de alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares. La limitación fijada por las sucesivas normas controvertidas, muestra un ejercicio carente de razonabilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar el trance. Ello es así, ya que tal restricción trae aparejada una violación de los artículos 17 y 18 de la C.N., en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio. (Del voto de la Dra. Dorado).
C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”
(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

En tanto los Bonos de Consolidación de la Deuda Previsional, Tercera Serie, se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) desde el 01.02.02, se le acreditan intereses al 2% anual desde igual fecha, y se amortizan en 48 cuotas mensuales entre febrero de 2006 y enero de 2010, los Bonos de Consolidación de la Deuda Previsional, Cuarta Serie, se ajustan por el C.E.R. y se les agregan intereses al 2% anual, pero sólo desde el 15.03.04, y se amortizan en 72 cuotas mensuales entre abril de 2008 y marzo de 2014. De allí que deba concluirse que quienes perciban sus acreencias en bonos cuarta serie se verán perjudicados en relación a los de la tercera serie, ya que carecerán de compensación alguna por depreciación monetaria y, además, serán privados del uso del capital reconocido, que cubren los intereses reducidos a una tasa del 2% anual, por la conservación constante del capital y por la actualización del C.E.R. durante un lapso determinado; violentándose así las garantías tuteladas en los arts. 14, 16 y 17 de la Carta Magna. (Del voto de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”
(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

Según las disposiciones previstas en los arts. 64, segundo párrafo, y 66 inc. b) de la ley 25.827, la única causa de corte para que el Estado Nacional salde sus deudas dando un trato dispar, es el posterior dictado de la sentencia definitiva condenatoria firme, que tiene carácter declarativo del derecho preexistente. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los referidos artículos, porque su aplicación lesionaría la igualdad garantizada en el art. 16 de la Ley Fundamental ya que el Estado saldaría sus deudas de manera diferente según los beneficiarios hubieran obtenido sentencia firme condenatoria con anterioridad o posterioridad al 31.12.01, sobre el mismo período consolidado. (Del voto de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”
(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

En la causa “Della Savia, Haydee Iolanda” (sent. del 22.08.06), el suscripto propició la confirmación del fallo de la anterior instancia que había tachado de inconstitucional a los arts. 64, 2da. parte y 66 inc. b) de la ley 25.827, en tanto se halló irrazonable la conducta del Estado Nacional que, a pesar del superávit en la recaudación del que gozaba por los ingresos correspondientes a los aportes y contribuciones de la seguridad social previstos para la referida ley 25.827, y escuda-

do en la decisión administrativa 199/04, desvió los fondos cuyo destinatario original era la A.N.Se.S. con el objeto de financiar el pago de la deuda del Ente Bina- cional Yaciretá, revelando tal proceder una notable variación de la emergencia económica que dejó a las normas legales citadas desprovistas de todo sentido ju- rídico y fáctico. (Del voto del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad.

La emisión por parte del Estado Nacional de dos medios de pago de diferente va- lor respecto de la misma deuda consolidada, con sustento en una condición inaceptable -tal es el hecho de que la deuda fuese reconocida en sede adminis- trativa o judicial antes o después del 31 de diciembre de 2001-, resulta claramen- te discriminatorio en perjuicio de un sector de actores que recibe por parte del Es- tado deudor un trato desigual con relación a otro grupo de actores con el cual comparte idéntica situación jurídica, en clara violación a los preceptos de nuestra Carta Magna. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del los arts. 64, párrafo 2do., y 66 inc. b) de la ley 25.827. (Del voto del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65204

05.06.07

“VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(F.-D.-H.)

Ejecución parcial. Art. 499 C.P.C.C.

Corresponde decretar la suspensión del incidente de ejecución si los argumentos aducidos en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja podrían, prima fa- cie, involucrar cuestiones susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48 (cfr. C.S.J.N., sent. del 21.09.04, “Caja de Previsión y Seguro Médico de la Pcia. de Buenos Aires c/ Poder Ejecutivo Nacional”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Chirinos votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68442

30.11.06

“VIRGALA, LEONTINA ERNA c/ Consolidar Cía. de Seguros de Retiros S.A. s/Incidente”

(Ch.-D.-M.)

Haberes previsionales. Movilidad. Sentencia. Cosa juzgada. Cambio jurisprudencial.

Toda vez que la sentencia en ejecución ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no resulta de aplicación la doctrina sentada la por C.S.J.N. (en el caso, el fallo “Cassella”) con posterioridad. Al respecto, el Alto Tribunal sostuvo que el derecho adquirido a obtener mediante la ejecución de una sentencia firme lo que ella de- termine, no puede ser substancialmente alterado por las disposiciones de una ley posterior, por cuanto la sentencia firme es intangible (cfr. C.S.J.N., sent. del 22.12.93, “Hagelin, Ragnar c/ P.E.N.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68829

08.03.07

“ALAZARD, FÉLIX SIMÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”

(D.-M.-Ch.)

Intimación. Incumplimiento del organismo. Llamado de atención.

La A.N.Se.S., como administradora del sistema, debe estar al servicio de los titu- lares de las prestaciones y no convertirse en el sistemático obstáculo del goce de las mismas. Por ello, surgiendo de las constancias de autos que, pese a haber sido intimada en reiteradas oportunidades, luego de transcurridos más de veinte años desde el primer reclamo del titular y nueve de la sentencia que le reconocie- ra definitivamente su derecho, continúa sin dar acabado cumplimiento con la sen- tencia, y en atención a la avanzada edad del peticionante -86 años-, corresponde efectuar un llamado de atención y apercibimiento a los Directores Responsables del Organismo y a los letrados actuantes, con arreglo a las facultades otorgadas por los arts. 35 del Código Penal y 18 del Dec. Ley 1285/58, dado que su conduc- ta importa la reiteración de planteos por completo inadmisibles, estorbando la la-

bor del Tribunal (cfr. Fallos 313:956). En mérito a ello, se justifica que el pronunciamiento se notifique no sólo al letrado apoderado del organismo, sino también, personalmente, al Director Ejecutivo de dicho ente, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 239, 248 y 249 del Código Penal.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68153

30.10.06

“ORO SÁNCHEZ, PEDRO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/ Incidente”

(D.-Ch.)

Liquidación. Bonos. Consolidación de deuda. Opción. Dec. 1873/02.

El derecho del titular a percibir el crédito originado como una deuda del Estado expresada en pesos y no en una suma equivalente en dólares, constituye un derecho adquirido, pero sólo en lo que se refiere al monto en pesos -y no a la forma de pago- (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 17.03.03, “Central Puerto S.A. c/ Secretaría de Energía”). El hecho que hubiere optado oportunamente por bonos valor dólar no podría colocarlo, merced a circunstancias sobrevinientes, en una situación más favorable, ya que su crédito se vería cancelado con una cantidad de pesos que luego de la transformación de los dólares a la cotización vigente en el mercado libre de cambio, resultaría sustancialmente superior al monto que habría recibido originariamente.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68200

08.11.06

“SANTILLÁN, NIEVES ESTELA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional”

(D.-Ch.)

Liquidación. Bonos. Consolidación de deuda. Opción. Dec. 1873/02.

Frente a situaciones en las que se confronta la constitucionalidad de un acto emanado de los otros poderes del Estado, debe tenerse presente que, como principio, la interpretación de la norma y su aplicación al caso debe ser favorable a su validez, privilegiando la solución que mejor respete la respuesta dada a la emergencia por el legislador, siempre que tal interpretación o aplicación no resulte manifiestamente contraria a la Constitución. Ello es así, ya que cabe tener presente que, en principio, el legislador, de quien no es dable presumir la imprevisión o inconsecuencia, reservó para sí el control y resguardo del interés público comprometido en la instrumentación de determinadas políticas de emergencias, y no incumbe a los jueces en el ejercicio regular de sus atribuciones, sustituirse a los otros poderes del Estado en las funciones que le son propias (cfr. C.S.J.N., sent. del 02.12.93, “Cocchia, Jorge”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68200

08.11.06

“SANTILLÁN, NIEVES ESTELA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional”

(D.-Ch.)

Liquidación. Haberes de actividad. Certificación.

Es un despropósito pretender que el actor acompañe certificaciones de los haberes en actividad de cada uno de los meses que integran el período liquidado, habida cuenta que siendo el organismo quien alega la pretensión de un haber mensual que superaría el último haber de actividad, el es quien debe acreditarlo; máxime teniendo en cuenta que en la etapa de conocimiento previo al dictado de la sentencia cuya ejecución se persigue, no produjo prueba alguna tendiente a contradecir las remuneraciones verificadas por el ex empleador, que lucen agregadas al expediente administrativo.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95239

16.03.07

“HEUSSER, OSVALDO FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(F.-P.L.-L.)

Prescripción. Interrupción.

No constituye un acto interruptivo de la prescripción -conforme lo dispuesto por el art. 3989 del Código Civil-, la presentación efectuada en el expediente esgrimien- do una pretensión que difiere del objeto de la sentencia cuya ejecución se persi- gue.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64008

01.12.06

“INURRITEGUI, ALICIA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(F.-L.-H.)

Prescripción. Interrupción.

El pago de parte de la deuda efectuado por el organismo mediante la entrega de Bonos Previsionales (en el caso, Serie I y Serie II), configura un acto interruptivo de la prescripción.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64093

05.12.06

“QUEVEDO, RAMÓN NAPOLEÓN c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(F.-H.)

Prescripción. Plazo aplicable. Cómputo.

A la prescripción de la ejecutoria, no existiendo un texto legal expreso, le es aplicable el plazo de 10 años establecido por el art. 4023 del Código Civil (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 17.11.97, “Von Fehaleisen, Celestina”; ídem, sent. del 20.04.98, “Benemelej, Yotob”; ídem, sent. del 20.04.98, “Díaz, Ruaaid”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68071

20.10.06

“SUÁREZ, MATILDE LIDIA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional”

(D.-Ch.)

Prescripción. Plazo aplicable. Cómputo.

Si bien el curso de la prescripción, en principio, comienza desde la fecha en que la sentencia quedó firme, no es menos cierto que existen circunstancias interruptivas -en el caso, el titular solicitó ante el organismo el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal-, que tienen como efecto el comienzo de un nuevo curso prescriptivo.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68071

20.10.06

“SUÁREZ, MATILDE LIDIA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional”

(D.-Ch.)

Recurso extraordinario. Art. 499 C.P.C.C.

Corresponde suspender la ejecución de la sentencia atento lo dispuesto por el art. 499 del C.P.C.C., cuando del sistema informático se desprende que la sentencia dictada por la Cámara fue objeto de recurso extraordinario, encontrándose las actuaciones en la sede de la C.S.J.N.; máxime cuando atento las cuestiones de fondo debatidas, no resulta factible haya sentencia firme respecto de algún rubro de los que se pretende ejecutar. (Del voto de la mayoría. El Dr. Chirinos votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68442

30.11.06

“VIRGALA, LEONTINA ERNA c/ Consolidar Cía. de Seguros de Retiros S.A. s/Incidente”

(Ch.-D.-M.)

Renta vitalicia previsional. Recurso extraordinario. Caución real.

Tratándose de una renta vitalicia previsional pactada en dólares estadounidenses, corresponde fijar como caución real el depósito judicial del monto devengado en concepto de retroactivo, el que deberá ser depositado ante el juzgado de origen. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que adhiere el Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95493

18.04.07

“WOLHEIN, DELIA c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. y otros/Incidente”

(P.L.-F.-L.)

EJECUCIÓN FISCAL

Obras sociales. Concurso. Competencia.

Si las sumas a ejecutarse eran de causa anterior a la de apertura del concurso preventivo de la Obra Social demandada, ante la inhibitoria articulada por el representante de aquella, el "a quo" debió -por imponérselo la ley concursal- declarar su incompetencia y remitir las actuaciones al juzgado en lo comercial donde tramitaba dicho concurso. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94672

26.12.06

"FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Obra Social del Personal del Espectáculo Público s/Ejecución fiscal"

(F.-P.L.-L.)

Obras sociales. Concurso. Competencia.

La ley de concursos, en su art. 59, prescribe claramente una distinción entre, por un lado, lo que implica la declaración de finalización del trámite para llegar al acuerdo concursal y sus consecuencias respecto del actuar del síndico y la intervención que se da a otros funcionarios concursales; y por el otro, las consecuencias de la decisión de concluir los procedimientos derivados del cumplimiento del acuerdo, único supuesto en el que cesan todos los efectos del concurso, y por ello, queda habilitada la posibilidad de tramitar la causa ante el tribunal competente natural por razón de la materia y el territorio (Fallos 325:1382). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94672

26.12.06

"FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Obra Social del Personal del Espectáculo Público s/Ejecución fiscal"

(F.-P.L.-L.)

Recursos. Apelación. Ley 11.683, art. 92. Inaplicabilidad.

Si bien el art. 92 de la ley 11.683 dispone que "la sentencia de ejecución será inapelable", cuando lo que se apela es una resolución interlocutoria que resolvió rechazar el planeo de nulidad impetrado por el presentante y no una sentencia de ejecución, la norma referida deviene inaplicable.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64097

05.12.06

"FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Canal S S.A. s/Recurso de queja"

(H.-F.)

EXCEPCIONES

Espera. Requisitos.

La excepción de espera tiene que fundamentarse en la existencia de un nuevo plazo concedido por el acreedor o por la ley, con posterioridad al nacimiento de la obligación (cfr. Fenochietto – Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", pág. 755 y sgtes.). Sólo es admisible cuando al oponerla se acompaña el documento del que ella emana (cfr. C.N.A.Civ., Sala E, sent. del 09.05.80, E.D. 88-722), y tal requisito de admisibilidad indica que el plazo mismo de la espera debe resultar también del instrumento que se acompañe (cfr. C.N.C.C.Esp., 4ta. 11.08.80, BCNEC y C, 1981-700).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 64317

16.02.07

"GIMÉNEZ, RUBÉN EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(D.-F.-H.)

HONORARIOS

CASSABA. Contribución. Ley 1.181. Procesos iniciados con anterioridad a su vigencia.

Asiste razón al recurrente en orden a la intimación a cumplimentar las obligaciones de aportar dispuesta por la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto que no resulta pertinente su aplicación retroactiva respecto de un proceso iniciado con antelación a su entrada en vigencia.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95481

18.04.07

“CAVALLO, JORGE JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-P.L.-L.)

CASSABA. Ley 1.181 de la Ciudad de Buenos Aires. Planteo de inconstitucionalidad. Acordada nº 06/05 C.S.J.N.

Respecto al planteo referido a la aplicación de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto el juez de primera instancia como la Cámara tienen el deber funcional de cumplir con lo ordenado por la C.S.J.N. en la Acordada nº 06/05, razón por la cual todas las cuestiones relacionadas con la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires deben ser planteadas ante dicho organismo (cfr. C.N.A.T., Sala VIII, “Pomzstein, Jaime c/ Ultramar Argentina S.A., sent. del 30.11.05; ídem, Sala IV, “Carrasco Delfino, Martha c/ Beautimax S.A.”, sent. del 21.09.05).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64665

29.03.07

“GIBERTI LORENZI, HORACIO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-H.-D.)

CASSABA. Ley 1.181. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

La presencia del gobierno federal en función del Estado Federal, juntamente con el gobierno también federal, pero en función de la Capital Federal, nos lleva con alguna claridad a comprender la distinción entre legislación, administración y jurisdicción federal y la legislación, administración y jurisdicción local. Por ello, lo que es objeto del derecho administrativo local, va a la justicia local u ordinaria (cfr. Ricardo Haro, “La competencia federal”, pág. 347). Desde esta perspectiva, cabe señalar que del art. 100 de la ley 1.181 surge clara la intención del legislador de someter las cuestiones que mezclan intervención judicial a los Tribunales de la Ciudad, sin que quepa efectuar otras distinciones allí donde la Legislatura mediante una ley especial y posterior al Código Contencioso no lo ha hecho. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68671

16.02.07

“VALMAGGIA, DANIEL ANÍBAL c/ CASSABA s/Acción meramente declarativa”

(D.-M.-Ch.)

CASSABA. Ley 1.181. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

La jurisprudencia se ha expedido en el sentido de que “el criterio subjetivo de las atribuciones de competencia no resulta novedoso en el ámbito de la Ciudad, toda vez que la ley 19.987 (Orgánica de la M.C.B.A.) disponía que ‘todas las causas originadas por la actividad de la Municipalidad, que se manifieste por actos de contenido general, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado, o individual, o por hechos’ se sustanciarán ante la Justicia Nacional en lo Civil o Especial en lo Civil y Comercial. La supervivencia por largos años de la norma de mención, sin que recibiese reparos de índole constitucional, no hace más que confirmar que el legislador puede, en determinadas ocasiones y por las razones que amerite cada caso, establecer la competencia con prescindencia de la materia de fondo. Finalmente, la expresión legal ‘tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires’ (art. 28, ley 472) no puede presentar duda o confusión alguna, por cuanto al tratarse de una norma emanada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma mencionados en la ley nº 7, que se encuentran en funcionamiento y, entre ellos, por una especificidad técnica, a los de este fuero” (cfr. C.A.Cont. Adm. y Trib. C.A.B.A., Sala II, “Fernández, Serafín Eduardo c/ G.C.B.A.”, sent. del 17.02.04, voto de los Drs. Centanaro y Russo). En consecuencia, correspon-

de confirmar la decisión del “a quo” que se declaró incompetente para entender en la acción de amparo promovida con el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 5, 15 y 18 de la ley 1.881. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68671

16.02.07

“VALMAGGIA, DANIEL ANÍBAL c/ CASSABA s/Acción meramente declarativa”
(D.-M.-Ch.)

CASSABA. Ley 1.181. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

De los arts. 80, inc. 5 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 100 y 101 de la ley 1.181, surge con claridad que la intención del legislador fue someter todos los conflictos vinculados a la aplicación de la ley referida a la competencia contencioso administrativa de la ciudad de Buenos Aires. (Del voto del Dr. Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68671

16.02.07

“VALMAGGIA, DANIEL ANÍBAL c/ CASSABA s/Acción meramente declarativa”
(D.-M.-Ch.)

CASSABA. Ley 1.181. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

El art. 100 de la ley 1.181 se enrola dentro del grupo de normas que atribuyen competencia, las que en base a los principio generales, no requieren reglamentación alguna y son autosuficientes; es decir, son normas operativas. Sin perjuicio de ello, es dable recordar que aún tratándose de una ley programática, para que la misma tenga vigencia no es necesario que exista un decreto que la reglamente (cfr. “Tratado de Dcho. Constitucional”, Miguel A. Ekmeldjian, pág. 75). (Del voto del Dr. Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68671

16.02.07

“VALMAGGIA, DANIEL ANÍBAL c/ CASSABA s/Acción meramente declarativa”
(D.-M.-Ch.)

CASSABA. Ley 1.181. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

La competencia federal es limitada, de excepción y restrictiva, motivo por el cual el legislador, al momento de regular la competencia de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, lo hizo enumerándola taxativamente en los arts. 2 y 3 de la ley 24.655. De la simple lectura de dichos artículos surge que no está prevista dentro de las prescripciones de los mismos, la competencia del fuero de la Seguridad Social para entender en una demanda por la que se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la reglamentación de la ley 1.181. (Del voto del Dr. Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68671

16.02.07

“VALMAGGIA, DANIEL ANÍBAL c/ CASSABA s/Acción meramente declarativa”
(D.-M.-Ch.)

Ejecución. Fallecimiento del titular. Imposibilidad de enderezar demanda contra la cónyuge supérstite.

La pretensión de la letrada de que se enderece demanda contra la cónyuge supérstite del causante -contra quien había dirigido la acción tendiente a ejecutar los honorarios regulados judicialmente por su actuación profesional-, no encuentra asidero en nuestro ordenamiento positivo, toda vez que el Código Civil establece que los derechos de una persona fallecida se transmiten a sus herederos, declaración ésta que le compete al juez civil del lugar del último domicilio del difunto, resultando que ante el mismo deben entablarse, entre otras, “las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia” (art. 3284, inc. 4). En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” que rechazó la solicitud de la accionante; sin perjuicio del derecho que le asiste a ésta de promover el respectivo incidente ante la sucesión del demandado o, en su caso, proceder a su apertura. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94246

27.11.06

“FRIZMAN, ADRIANA NORMA c/ Traba, José s/Ejecución de honorarios”
(P.L.-F.-L.)

Monto del proceso. Base regulatoria.

Conforme lo resuelto por la C.S.J.N. en Fallos 317:1378, el monto del proceso a los fines regulatorios está constituido, cuando progresa la demanda, por el monto de la condena (cfr. Nilda B. Fernández y Ángel L. Capo, “Honorarios de abogados y peritos”, pág. 86, sum. 246). De ello se sigue que deben tomarse todos los rubros que integran el capital, sin descuentos, por ser “... el monto del asunto o proceso...” (cfr. art. 6, inc. a, L.A.), así como la procedencia o el cálculo de los intereses fijados en la sentencia que quedó firme (cfr. arts. 505 y 508 Código Civil y 165 C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68185

31.10.06

“EMERI, ADELMIRO ALFREDO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”

(D.-Ch.)

Perito contador. Intimación a la parte actora.

Encontrándose firme y consentida la sentencia que hizo lugar a la demanda e impuso las costas por su orden con arreglo al art. 21 de la ley 24.463, corresponde confirmar la providencia del “a quo” por la que se dispuso intimar al actor para que deposite la suma correspondiente a los honorarios correspondientes al perito contador. Ello así, máxime teniendo en cuenta que la designación del experto fue dispuesta por el juzgado en atención al pedido que, en tal sentido, únicamente formuló el accionante.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94470

26.12.06

“LÓPEZ, ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.-P.L.)

Regulación. Notificación al obligado al pago. Recursos.

Surgiendo de las constancias de autos que por pronunciamiento emanado del Tribunal las costas de ambas instancias fueron impuestas por su orden, tanto como que la regulación de honorarios -practicada a pedido del letrado que ahora los apela por bajos- no le fue notificada a su patrocinada (que resulta obligada al pago conf. los arts. 18, 49 y 62 de la ley 21.839), corresponde dejar sin efecto la concesión del recurso y declarar mal elevadas las actuaciones.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 94581

26.12.06

“OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Pcia. de Córdoba s/Ejecución ley 23.660”

(F.-P.L.-L.)

INHABILIDAD DE INSTANCIA

Denuncia de ilegitimidad. Recurso administrativo extemporáneo.

Conforme lo dispuesto en los arts. 1, inc. c) y 25 de la ley 19.549, cabe concluir que no resulta revisable judicialmente la decisión que resolvió la denuncia de ilegitimidad, ya que la extemporaneidad del recurso administrativo conlleva la imposibilidad de habilitar la instancia judicial (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, “De la Vega, María Cristina”, sent. del 13.09.01). Dicho criterio ha sido confirmado por la C.S.J.N. en autos “Gorordo Allaria de Kralj, Haydee María c/ Estado Nacional”, sent. del 04.02.99 (Fallos 322:73).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68638

05.02.07

“GARCÍA, ANA MARÍA c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(D.-M.)

Medida preliminar. Suspensión del plazo. Improcedencia.

Una medida de prueba anticipada (en el caso, el peticionante presentó una acción sobre aseguramiento de pruebas, solicitando la remisión de las actuaciones administrativas correspondientes) -totalmente innecesaria para el inicio de la demanda ordinaria- en tanto se trata de una mera petición, no comporta una demanda en los términos del art. 330 del C.P.C.C. (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado, Tº II, pág. 139), es decir, no causa instancia (cfr. Enrique M. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" Tº II, pág. 591). Por ello, no corresponde considerar que la petición de dicha diligencia preliminar haya significado el inicio de la vía judicial de impugnación de un acto administrativo dictado por el órgano previsional y, en consecuencia, debe confirmarse la sentencia que declaró inhabilitada la instancia por haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el art. 25 de la ley 19.549 - al que remite el art. 15 de la ley 24.463-.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 65017

09.05.07

"CILIBERTO, MARIO JUAN c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias"
(F.-H.-D.)

MEDIDAS CAUTELARES

Objeto. Acción principal. Diferencia.

Determinado que el preciso objeto de la pretensión consiste en el reconocimiento del derecho jubilatorio en el marco de la ley 24.018, debe confirmarse la decisión del "a quo" rechazando la solicitud del peticionante que, bajo el ropaje de una medida cautelar, intenta de manera subsidiaria se ordene al órgano administrativo que le reconozca la condición de jubilado conforme la ley 24.241. Ello así, en tanto no puede ser de recibo que, por vía cautelar, en sustancia, se pida una medida cuyo alcance implique la adopción de un temperamento, también de fondo, y éste sea decidido inaudita parte del órgano que por ley es competente para verificar los recaudos de forma y fondo para diferir un haber jubilatorio.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64732

11.04.07

"LINDOW, ISABEL c/ E.N. – A.N.Se.S. s/ Incidente"
(F.-H.-D.)

Reiteración de la solicitud. Situación de hecho o de derecho. Modificación.

La circunstancia de que la medida cautelar solicitada sea reiteratoria de otra de idéntica naturaleza interpuesta en ocasión de iniciarse demanda y, el fundamento primordial de la nueva resolución desestimatoria del "a quo" haya sido que la pretensión ya había sido analizada anteriormente, sin que se introdujeran o invocaran nuevos elementos de hecho o derecho que permitieran modificar la decisión primigenia, resulta relevante para decidir la suerte de la cuestión planeada pues, amén de que la apelante no introduce objeción alguna a ese fundamento esencial vertido por el sentenciante, ha de compartirse el criterio que sostiene que si bien en virtud del carácter provisional de las resoluciones sobre medidas cautelares es posible solicitarlas nuevamente cuando han sido rechazadas, para ello es menester que se haya modificado la situación de hecho o de derecho (cfr. Serantes Peña – Palma, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág. 496). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95186

18.04.07

"UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA c/ Poder Ejecutivo Nacional s/Amparos y sumarísimos"
(P.L.-L.-F.)

OBRAS SOCIALES

Aportes y contribuciones. Clave. Error. Responsabilidad.

El sistema vigente para ingresar los aportes y contribuciones, si bien se basa en la autodeterminación a través de DDJJ sujetas a verificación administrativa, no desliga de responsabilidad al obligado (conf. Dec. 507/93 y en particular, Res. Gral. A.F.I.P. 3710, art. 6) en tanto se le impone a éste el deber de consignar el código de identificación que corresponda a la obra social, estableciéndose que la incorrecta identificación dará lugar a considerar como no cumplimentada la obligación mensual respectiva.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120288

26.12.06

“CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO XX DE SEPTIEMBRE 1925 c/ A.F.I.P. – D.G.I. /Impugnación de deuda”

(D.-M.-Ch.)

Aportes y contribuciones. Clave. Error. Responsabilidad.

Si bien el consignar por error el código de otra obra social resulta, aparentemente, una cuestión formal, ha de tenerse en cuenta que la A.F.I.P. recauda y distribuye el dinero que percibe en la cuenta correspondiente a la obra social que el contribuyente consigna con una clave particular. Por esa razón, la errónea identificación de la acreedora impide la correcta distribución de los montos abonados, cuanto menos hasta que se efectúe la pertinente denuncia, corrección o rectificación. En consecuencia, debe desestimarse la pretensión de la recurrente de hacer recaer la responsabilidad o consecuencias de sus propios actos, en la obra social acreedora o en el ente recaudador.

C.F.S.S., Sala I

sent. 120288

26.12.06

“CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO XX DE SEPTIEMBRE 1925 c/ A.F.I.P. – D.G.I. /Impugnación de deuda”

(D.-M.-Ch.)

Aportes y contribuciones. Ejecución ley 23.660. Competencia.

La ley 24.655 sólo transformó la competencia que antes correspondía a la Justicia Nacional del Trabajo para entender en los procesos tendientes al cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales iniciados de conformidad a las prescripciones del art. 24 de la ley 23.660, pero dejó incólume la aptitud jurisdiccional de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del resto del país para actuar en dicha cuestión. Por ello, la dilucidación sobre la atribución de competencia para el cobro de estos créditos se debe realizar conforme lo estipulado por el C.P.C.C. en su art. 5, inc. 7; debiendo concluirse que -en el caso- lo será el Juez del lugar donde tuvo nacimiento el deber tributario, ya que aún cuando el ejecutor fiscal hiciese uso de la opción legal que el Código establece a su favor (el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deben pagarse o el del domicilio del deudor), siempre resultaría competente aquél, dado que en la práctica nunca se pueden exceder los límites territoriales de la jurisdicción tributaria (cfr. Clemente A. Díaz, “Instituciones de Derecho Procesal”, Tº II-B, pág. 741). (Del dictamen Fiscal al que adhiera la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 93944

03.11.06

“OBRA SOCIAL PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN c/ SUSTE SIMA s/Ejecución ley 23.660”

(L.-P.L.-F.)

Cobro de aportes y contribuciones. Facultades de fiscalización y ejecución.

Las obras sociales comprendidas en el art. 1 de la ley 23.660 y sus modificatorias conservan las facultades de fiscalización y ejecución judicial sobre los ingresos correspondientes a cada una de ellas, en los términos de los arts. 21 y 24 de la citada ley. Esto es así debido a que las pautas jurisprudenciales conducen a interpretar la norma no de manera aislada o literal, sino armonizándola con el resto del ordenamiento específico, esto es, haciendo de este como totalidad el objeto

de una razonable y discreta hermenéutica (cfr. C.S.J.N., sent. del 18.10.88, "Augusto y Renato Vaschetti S.A.C.I.I. y F. c/ D.G.I."). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117388

17.04.07

"DOMO CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(F.-P.L.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Facultades de fiscalización y ejecución.

La autorización para las Obras Sociales contenida en los arts. 21 y 24 de la ley 23.660 y el Dec. 507/93 (ley 24.447) debe interpretarse dentro de un todo, y no aisladamente, de manera que no se contrapongan unos preceptos con otros. Esa interpretación deviene consecuente con principios hermenéuticos tales como aquellos que imponen respetar la voluntad del legislador, descartar la falta de previsión o la omisión involuntaria, y atender a la armonía que las leyes deben guardar con el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución Nacional. Ello así, hasta tanto el Poder Legislativo mantenga el actual método establecido en la legislación vigente, pues si bien el sistema recaudatorio se halla centralizado en la A.F.I.P., la autorización dada por la ley 23.660 a las Obras Sociales continúa vigente, pero con la supervisión del organismo estatal (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 15.04.97, "Santa Lucía Cristal S.A."; ídem, sent. del 28.12.95, "Diario Los Andes Hnos. Calle S.A."; Sala II, sent. del 01.03.98, "Criba S.A."; Sala III, sent. del 09.09.98, "Techint Cía. Técnica Internacional S.A."). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117388

17.04.07

"DOMO CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(F.-P.L.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Facultades de fiscalización y ejecución.

De los supuestos contenidos en los arts. 21 y 24 de la ley 23.660 se desprende una notoria diferencia en cuanto a la posibilidad de actuación funcional de quienes dirigen y administran a las Obras Sociales, que debe ser personal e indelegable en algunos casos, y en otros no. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117388

17.04.07

"DOMO CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(F.-P.L.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Facultades de fiscalización y ejecución.

Las liquidaciones y actualizaciones practicadas por los inspectores que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (art. 16 de la ley 11.683 y sus modific. según Dec. 821/98 y modif.); y el procedimiento de determinación de oficio se iniciará por el juez administrativo, con una vista al contribuyente (art. 17 ley 11.683 y sus modific. según Dec. 821/98 y modif.). Por ello, si de las constancias existentes en autos no surge cumplimentada la normativa citada, en salvaguarda del derecho de defensa y debido proceso (art. 18 de la C.N.) corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde las actas de requerimiento, y remitir la actuaciones a la instancia de origen a sus efectos. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 117388

17.04.07

"DOMO CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(F.-P.L.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Res. A.F.I.P. 1648/04. Acción de amparo. Planteo de inconstitucionalidad.

La deducción de 0,50% establecida por la Res. A.F.I.P. 1648/04 tiene origen en la ley 25.401 (art. 45). Ello así, y toda vez que la referida ley no ha sido materia de cuestionamiento ni impugnación por la reclamante en la acción de amparo intentada, corresponde revocar el decisorio recurrido que declaró la nulidad absoluta e insanable de la resolución citada por considerar que el descuento sobre las

sumas recaudadas en concepto de gastos operativos por la gestión de la A.F.I.P. no tenía origen legal y que, por ende, a través del dictado de ella se había excedido en su potestad reglamentaria.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68372

30.11.06

“OBRA SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES c/ Estado Nacional – A.F.I.P.

(M.-Ch.-D.)

Cobro de aportes y contribuciones. Res. A.F.I.P. 1648/04. Acción de amparo. Planteo de inconstitucionalidad.

El accionar arbitrario o la ilegalidad manifiesta, así como el daño concreto y grave, deben alegarse y fundarse específicamente, debiendo surgir de tal modo que el juzgador pueda captarlo a simple vista, como lo prescribe el art. 1 de la ley 16.986, siendo insuficiente alegar una conducta cuestionable sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 09.12.97, “Servicios Médicos Sarmiento S.A. c/ E.N.”). Por ello, no encontrándose acreditada en autos dicha circunstancia, corresponde rechazar la acción de amparo por la que la obra social cuestionó la validez constitucional de la Res. A.F.I.P. 1648/04 en cuanto establece la obligación de la obra social de entregar información patrimonial al organismo respecto de los actos de fiscalización y acciones judiciales realizadas durante cada mes calendario.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68372

30.11.06

“OBRA SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES c/ Estado Nacional – A.F.I.P.

(M.-Ch.-D.)

Contribución. Ley 19.518. Supresión. Medida cautelar.

El Dec. 359/96 suprimió, a partir del 01.10.06, los recursos de distinta naturaleza que existieren con destino a los ex Institutos creados por ley y transformados en Obras Sociales por el Dec. 492/95, los que deberían financiarse con los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial previstos por el art. 16, incs. a) y b) de la ley 23.660. En virtud de ello, y contemplado que -en el caso- se discute la debida protección del derecho a la salud de casi cien mil beneficiarios de la Obra Social, corresponde hacer lugar a la pretensión de ésta en tanto persigue la obtención de una medida cautelar con el objeto de suspender los efectos de los decretos que establecieron la eliminación de la alícuota dispuesta por la ley 19.518 (creadora del Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda). Ello así, más allá de la identidad que pudiera existir entre la medida peticionada -innovativa- y la acción que correspondiera, porque pese al restringido ámbito de conocimiento que ofrece el dictado de una medida cautelar, aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación denunciada podría generar a los beneficiarios de la obra Social, daños cuya entidad exige que deban ser inmediatamente evitados. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95095

01.03.07

“OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA c/ E.N. – Ministerio de Salud y Acción Social s/Medidas cautelares”

(P.L.-L.-F.)

Contribución. Ley 19.518. Supresión. Medida cautelar. Contracautela.

Contrariamente a lo sostenido por la peticionante, que entiende que la medida cautelar no lesionará ningún interés público que exija ser tenido en cuenta, ni provocará la existencia de peligro alguno de carácter político, social o económico, como así tampoco daño o perjuicio a las entidades aseguradoras que exigiesen una adecuada indemnización porque no se trata de una contribución dada por el Estado ni por las propias entidades aseguradoras, se hace necesaria la determinación de la contracautela. Ello así en virtud de la magnitud del monto mensual estimado, máxime teniendo en cuenta que la supresión de la contribución no importó una reducción en las primas cobradas, ya que en la actualidad los tomadores abonarán la contribución sin que las aseguradoras realicen la transferencia, supuesto éste que habilitaría a las compañías a exigir la restitución de los importes que se deriven del cumplimiento de la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar, suspendiendo los efectos de los decretos que establecieron la eliminación

de la alícuota dispuesta por la ley 19.518. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95095

01.03.07

“OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA c/ E.N. – Ministerio de Salud y Acción Social s/Medidas cautelares”

(P.L.-L.-F.)

Contribución. Ley 19.518. Supresión. Medida cautelar.

Se ajusta a derecho la decisión que desestimó la medida cautelar por la que se pretendía obtener la suspensión de los efectos de los decretos que establecieron la eliminación de la alícuota dispuesta por la ley 19.518, toda vez que la misma constituye un claro anticipo sobre el fondo de la cuestión que habría de resolverse en la acción principal. El acogimiento de la medida implicaría el análisis de una serie de decretos y de situaciones fácticas, con lo cual la materia de la medida se confunde con el objeto de la acción principal y, de hacerse lugar a aquella, nos hallaríamos frente a un anticipo de jurisdicción favorable a la actora, lesivo del derecho de defensa en juicio que asiste a la demandada. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 95095

01.03.07

“OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA c/ E.N. – Ministerio de Salud y Acción Social s/Medidas cautelares”

(P.L.-L.-F.)

Derecho a la vida. Preservación de la salud. Medicamentos. Entrega gratuita. Medias cautelares.

La C.S.J.N., a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.), ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de las llamadas medicina prepaga (cfr. Fallos 321:1684 y sent. del 01.06.00, “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional”).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64516

15.03.07

“LEMONS, MARÍA GENOVEVA Y OTROS c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Incidente”

(D.-F.)

Derecho a la vida. Preservación de la salud. Medicamentos. Entrega gratuita. Medias cautelares.

Los derechos del menor que se intentan resguardar mediante la medida cautelar por la que se persigue se le provea en forma gratuita e ininterrumpida la medicación para el adecuado tratamiento de la dolencia que padece, encuentran protección en tratados de jerarquía constitucional, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 4, 6, 18, 23, 24, 26 y 27). Por otra parte, no puede desconocerse que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, adoptando una visión progresista con respecto a las medidas cautelares de esta naturaleza, señaló la necesidad imperiosa de adoptarlas cuando medie agravio a la integridad física y psíquica de las personas (cfr. sent. del 07.08.97, “Camacho Acosta c/ Grafi Graf SRL”; sent. del 12.07.01, “Álvarez, Oscar Juan c/ Pcia. de Bs. Aires y otro”).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64516

15.03.07

“LEMONS, MARÍA GENOVEVA Y OTROS c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Incidente”

(D.-F.)

Derecho a la vida. Preservación de la salud. Medicamentos. Entrega gratuita. Medias cautelares.

A fin de conciliar el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes a través de la delegación impuesta a las Obras Sociales conforme los términos de la legislación vigente, y la necesidad extrema del menor cuya atención se procura -en el caso, para que se le provea gratuita e ininterrumpidamente el medicamento necesario para el adecuado tratamiento de la dolencia que padece-, corresponde ordenar a la obra social demandada la dación de la medicación en cuestión, sin perjuicio del oportuno reintegro que podrá solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente del porcentaje que excede el límite reconocido por la Res. 310/04.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64516

15.03.07

“LE MOS, MARÍA GENOVEVA Y OTROS c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Incidente”

(D.-F.)

PRINCIPIOS PROCESALES

“Iura novit curia”. Facultad y deber del magistrado.

Si bien por aplicación del principio iura novit curia, los jueces no se encuentran vinculados por la aplicación jurídica que las partes dan a sus pretensiones y pueden suplir el derecho mal invocado, ello es así en tanto y en cuanto no alteren las bases fácticas de lo discutido (cfr. dictamen de la Procuración General al que se remitió la C.S.J.N. en autos “Autolatina Argentina S.A. c/ D.G.A.”, sent. del 03.04.03). En consecuencia, nada impide al juzgador analizar las pretensiones deducidas en la litis con arreglo a la ley aplicable, prescindiendo de las normas que las partes refieran erróneamente, siempre y cuando se respete el objeto pretendido, los antecedentes que conforman al mismo, y el derecho de defensa de los litigantes.

C.F.S.S., Sala II

sent. 120388

13.03.07

“GRAFF, JUAN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-D.-H.)

Defensa en juicio.

La C.S.J.N. ha sostenido que “el derecho a requerir la tutela jurisdiccional supone el cumplimiento, por parte del interesado, de los requisitos procesales establecidos por las normas vigentes” (cfr. “Asociación de Testigos de Jehová c/ Consejo Provincial de Educación del Neuquén”, sent. del 19.08.05) como, asimismo, que la garantía constitucional de la defensa en juicio no impone que los litigantes deban ser oídos y tengan el derecho de producir su prueba en cualquier momento y sin restricción de forma; confiere sólo un derecho que debe ser reglamentado en su ejercicio, o sea, restringido o limitado por las leyes de procedimientos, a fin de hacerlo compatible con el derecho análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una justicia eficaz. En sustancia, la inviolabilidad de la defensa sólo exige que el litigante sea oído y tenga oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en la forma que prescriben las leyes de procedimiento (Fallos 185:242).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64718

10.04.07

“VILLA, INÉS c/ A.N.Se.S. s/Ejecución de astreintes”

(F.-H.)

RECURSOS

AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Apelación. Competencia.

Sin perjuicio del criterio sustentado en anteriores causas análogas, un nuevo análisis de la cuestión lleva a concluir que, debatiéndose la aplicación de las normas de la L.N.P.A. (en el caso, la peticionante dedujo el amparo previsto por el art. 28 de la ley 19.549, con la finalidad de que el juez federal con jurisdicción en su domicilio ordenara el pronto despacho de las actuaciones tramitadas ante el organismo), el caso debe ser resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción (en el caso, Córdoba). Ello así, porque nada hace suponer que se haya privado a ésta de competencia como Tribunal de Alzada en tales acciones, en razón del carácter contencioso administrativo de la causa que está dado, fundamentalmente, por la naturaleza de las normas que han de utilizarse para resolver el pleito -en tal sentido, ver C.S.J.N., sent. del 05.08.99, "Renin, Miguelina del Carmen"- (Del voto de los Drs. Díaz y Maffei).
C.F.S.S., Sala I
sent. Int. 68440
30.11.06
"GELATTI, ALFILIO c/ A.N.Se.S. y otro s/ Amparo por mora de la administración"
(Ch.-D.-M.)

APELACIÓN

Expresión de agravios. Excesivo rigor formal.

Corresponde dar tratamiento a los planteos expuestos en el memorial, aunque mínimamente desarrollados, a fin de no caer en un desmedido rigorismo. Al respecto, la C.S.J.N. ha sostenido que "la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se vea turbado por un excesivo rigor formal" (cfr. "Belgrano 1332 SRL c/ Nación Argentina", sent. del 21.04.87; "Sansonnatti, Pascual y otro", sent. del 02.10.86, entre otros).

C.F.S.S., Sala III
sent. 115909
22.02.07
"LÓPEZ, BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones"
(F.-P.L.-L.)

Expresión de agravios. Presentación errónea.

No encontrándose en discusión que la expresión de agravios se efectuó una vez vencido el plazo que fija el art. 259 del C.P.C.C., y tampoco que la presentación errónea del escrito en otra Sala del Tribunal obedeció exclusivamente a un error imputable al apelante, corresponde rechazar el argumento de éste que aduce la existencia de una flagrante violación al debido proceso adjetivo, ya que la única infracción existente en autos es aquella derivada de su propia torpeza.

C.F.S.S., Sala II
sent. 121389
29.05.07
"RODRÍGUEZ, ALICIA IRENE c/ Oversafe Seguros de Retiro S.A. s/ Inconstitucionalidades varias"
(F.-D.-H.)

Expresión de agravios. Presentación errónea.

Si el recurso de apelación no fue presentado en la Secretaría correspondiente, sino en otro juzgado, y no existe constancia de que el escrito respectivo hubiera ingresado temporáneamente en el tribunal de la causa, el fallo de la Cámara que lo admite y revoca el de primer grado importa revisión de una sentencia en autoridad de cosa juzgada y viola el derecho de defensa (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.04.75, "Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos Argentinos c/ Ministerio de Trabajo").

C.F.S.S., Sala II
sent. 121389
29.05.07
"RODRÍGUEZ, ALICIA IRENE c/ Oversafe Seguros de Retiro S.A. s/ Inconstitucionalidades varias"
(F.-D.-H.)

Improcedencia. Preclusión.

Resulta improcedente el recurso intentado cuando el auto atacado es consecuencia directa de otra resolución anterior que se encuentra firme y alcanzada

por el principio de preclusión, motivo por el cual aquél es inapelable (cfr. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Tº IV, pág. 213; Palacio, "Derecho Procesal Civil", Tº V, pág. 9; Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº II, pág. 287). Sostener una solución contraria habilitaría una nueva vía de impugnación, generando así una situación de inseguridad acerca de la firmeza de los actos procesales cumplidos (cfr. causas 8283 del 29.08.96; 21451 del 19.11.96; 647 del 15.04.97; 1326 del 13.05.97, 2139 del 15.07.99, entre otras, de la C.N.A.Civ. y Com. Fed.).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68568

27.12.06

"LE PERA, ARMANDO MARIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad" (Ch.-D.-M.)

QUEJA

Copias. Art. 283, pto. 1, inc. d) del C.P.C.C.

Corresponde desestimar la queja si el recurrente no dio cumplimiento al extremo contemplado en el pto. 1, inc. d) del art. 283 del C.P.C.C., alegando la imposibilidad de munirse de la copia de la resolución denegatoria de la apelación sin indicar las razones que la generaron. A mayor abundamiento, en la hipótesis que dicha dificultad radicara en la falta de exhibición del expediente, cabe recordar que en virtud del art. 133 del referido cuerpo legal, el quejoso podría haber evitado el inicio del cómputo del plazo para recurrir en queja, haciendo constar dicha circunstancia en el libro de asistencia del juzgado de origen.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64340

16.02.07

"RAGO, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja" (F.-H.-D.)

SANCIONES CONMINATORIAS

Astreintes.

No ha de tener favorable recepción el recurso interpuesto por el organismo que, como único agravio contra la resolución por la que el "a quo" fijó astreintes, sostuvo que la misma se apartaba de lo dispuesto por el art. 23 de la ley 24.463, que prohíbe el dictado de ésta clase de medidas. Ello así, en razón de que el artículo señalado ha sido abrogado por el art. 1 de la ley 26.153 el que, por referirse a normas de neto carácter procesal, es de aplicación inmediata de los procesos en trámite. Máxime cuando el recurrente no acredita el cumplimiento de la obligación emanada de la sentencia ni justifica su proceder, circunstancias que evidencian la subsistencia de su actitud contumaz.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64719

10.04.07

"CORRIONERO, PILAR c/ A.N.Se.S. s/Incidente" (F.-H.)

Astreintes.

La demora que supone el trámite burocrático en el seno de la A.N.Se.S. no es imputable ni debe pesar sobre el vencedor del pleito que posee una acreencia judicialmente reconocida que debe ser satisfecha sin dilaciones, máxime en atención a su carácter alimentario.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64719

10.04.07

"CORRIONERO, PILAR c/ A.N.Se.S. s/Incidente" (F.-H.)

Astreintes.

La condena conminatoria -asterintes- impuesta se ajusta a derecho en tanto se

trata de una medida adecuada para vencer la resistencia de la parte que resultó perdidosa, ya que en caso de seguirse la postura del ente previsional -el cual, como órgano autárquico de la Administración Pública no se encuentra fuera del bloque de legalidad ni sobre la autoridad de los magistrados- el Poder Judicial se vería inerte para contrarrestar el incumplimiento de sus pronunciamientos.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64719

10.04.07

“CORRIONERO, PILAR c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(F.-H.)

Astreintes. Aplicación. Incumplimiento del deudor.

Las astreintes son de aplicación excepcional y necesitan para su determinación la existencia de una sentencia firme, y un incumplimiento por parte del deudor. Por ello, sólo es dable aplicar sanciones conminatorias después de haber incurrido en incumplimiento el obligado (cfr. C.N.A.Civ., Sala B, E.D. 32-510, 46-619; ídem, J.A. 15-1972-180). En consecuencia, corresponde tener por acreditados los presupuestos para hacer efectiva la multa diaria dispuesta por el “a quo”, si el organismo no adjuntó el expediente administrativo solicitado, habiéndose excedido ampliamente el plazo estipulado por el magistrado. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64921

26.04.07

“SUTAR, LUIS ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(H.-D.-F.)

Astreintes. Aplicación. Incumplimiento del deudor.

Las astreintes, según la doctrina, constituyen un medio de compulsión consistente en la imposición de una condena pecuniaria al sujeto que no cumple con un mandato dispuesto por resolución judicial, y cuya vigencia perdura mientras no cese la inejecución, pudiendo aumentar indefinidamente o, en su caso, ser dejadas sin efecto cuando el sujeto afectado desiste de su resistencia y justifica, total o parcialmente, su proceder -art. 666 bis Código Civil- (cfr. Belluscio y Zannoni, “Código Civil y Leyes Complementarias”, Tº III, pág. 242; Garrone, “Diccionario Jurídico”, pág. 207; Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tº I, pág. 311; “Fassi y Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tº I, pág. 289, entre otros). El fundamento de tal medida está dado por el “imperium” que tiene el Poder Judicial para hacer efectivos sus mandatos y lograr que sus fallos sean acatados. Ello sin recurrir a normas jurídicas que tipifican penalmente la desobediencia judicial a través de figuras como el desacato. (Disidencia de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64921

26.04.07

“SUTAR, LUIS ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(H.-D.-F.)

Astreintes. Aplicación. Incumplimiento del deudor.

Las astreintes sólo pueden aplicarse a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos por una resolución judicial, toda vez que no constituyen una indemnización al acreedor por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, sino una herramienta técnica destinada a lograr el acatamiento de decisiones judiciales por lo que su aplicación retroactiva contradice la función a que se hallan destinadas (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. del 24.02.92, “Romero c/ Frigorífico Rioplatense S.A.”). (Disidencia de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64921

26.04.07

“SUTAR, LUIS ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(H.-D.-F.)

Astreintes. Aplicación. Incumplimiento del deudor.

La imposición de astreintes es discrecional del magistrado. Al utilizarse dicho mecanismo debe tenerse extrema prudencia, pues su finalidad consiste -exclusivamente- en lograr que el deudor remiso cumpla con la obligación que le compete, pero sin confundirlo con otras figuras tales como la petición de daños y perjuicios o intereses por mora, donde lo pretendido es obtener un resarcimiento

económico por un incumplimiento, extremo que, por supuesto, requiere se acredite el perjuicio sufrido. (Disidencia de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64921

26.04.07

“SUTAR, LUIS ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(H.-D.-F.)

Astreintes. Aplicación. Incumplimiento del deudor.

Si bien el interés individual debe ser respetado y tutelado con extremo cuidado en materia de seguridad social, no debe olvidarse el interés colectivo que conforma la clase pasiva, por lo que la adopción de sanciones conminatorias deberá efectuarse con suma cautela, tratando de no lesionar el normal desenvolvimiento de un sistema basado en la solidaridad. Lo importante consiste en lograr el acabado cumplimiento de la orden judicial impartida en defensa de los intereses del justiciable, pero sin que la desidia e inoperancia del órgano interviniente se traduzca en un enriquecimiento injustificado, más aún teniendo presente que el principio básico de casi la totalidad de los regímenes previsionales es la solidaridad, por lo cual las contribuciones no constituyen una capitalización a favor del interesado sino una manera de integrar el patrimonio común que proveerá los recursos para cumplir con el fin social propuesto. (Disidencia de la Dra. Dorado).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 64921

26.04.07

“SUTAR, LUIS ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(H.-D.-F.)

Ley 24.463. Derogación. Aplicación del art. 37 C.P.C.C.

Atento la entrada en vigor del art. 1 de la ley 26.153 (a partir de la sanción de la Ley de Presupuesto nº 26.198) que derogó los arts. 16, 17, 20 y 23 de la ley 24.463, corresponde confirmar la resolución por la que el “a quo” fijó una multa diaria al organismo en atención a su reiterado incumplimiento. Ello así, porque resulta de plena aplicación el art. 37 del C.P.C.C. en cuanto faculta a los jueces y tribunales a imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes cumplan sus mandatos.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68634

05.02.07

“CANTALUPPI, ROSA LAURA c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste por movilidad”

(D.-M.)

SENTENCIA

Modificación. Cambio de jurisprudencia. Improcedencia.

Es inadmisibles la modificación de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en virtud de un cambio de jurisprudencia, aún cuando provenga de la C.S.J.N. (Fallos 293:531).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 68325

24.11.06

“BOZZELLI, MARÍA ROSARIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(M.-D.-Ch.)